MARIANGELA ZUÑIGA SALAZAR

**LA IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO, EN VIRTUD A FALLOS
RELEVANTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**

(Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público)

Bogotá D.C., Colombia

2019

**UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
MAESTRIA EN DERECHO DEL ESTADO CON
ENFAIS EN DERECHO PÚBLICO**

Rector: **Dr. Juan Carlos Henao Pérez**

Secretaria General: **Dra. Marta Hineirosa Rey**

Decana Facultad de Derecho: **Dra. Adriana Zapata Giraldo**

**Directora Departamento
Derecho Constitucional:** **Dra. Magdalena Correa Henao**

Directora de Tesis: **Dra. Soraya Pérez Portillo**

Examinadores: **Dr. Gonzalo Ramírez Cleves
Dr. Fabio Estrada Valencia**

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	v
1. FICHAS ANALISIS JURISPRUDENCIA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA ACUERDO FINAL DE PAZ.....	1
1.1 C-699-2016.....	1
1.2 C-332-2017.....	23
1.3 C-630-2017.....	50
1.4 C-027-2018.....	67
1.5 C-020-2018.....	78
CONCLUSIONES DEL ANALISIS JURISPRUDENCIAL.....	88
BIBLIOGRAFÍA.....	114

RESUMEN

El presente documento se caracteriza por el análisis jurisprudencial efectuado a varios fallos generados por la Corte Constitucional en relación con la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado por el por el Gobierno Nacional y las Farc EP el 24 de noviembre de 2016.

En el desarrollo del mismo se evidenció el papel primordial ejercido por la Corte como guardiana de la Carta Política de 1991 y la interpretación crucial que se adelantó de la Paz en su triple dimensión (valor, derecho y deber) y como su materialización se estableció como fin último de la normatividad objeto de control, la importancia del mandato otorgado en razón de los acuerdos a las instituciones y autoridades en escenarios de transición hacia la paz, así como la decantación, caracterización y ponderación realizada de los principios axiales que integran la Constitución Nacional tales como la supremacía constitucional, rigidez, separación de poderes, deliberación , legalidad entre otros.

Finalmente es un análisis que permitió la ampliación del espectro acerca de cada uno de los roles que tienen los diferentes actores gubernamentales, de las diferentes ramas de poder público, autoridades y de la sociedad civil en general en la construcción de herramientas que permitan el logro de la convivencia pacífica y la materialización de los fines del Estado social de Derecho adoptado por la Constitución Política de 1991.

INTRODUCCIÓN

Los colombianos han tenido que padecer y afrontar el conflicto armado interno por casi aproximadamente de 60 años, cuyos orígenes se decantan en varias teorías y causas, pero lo que sin duda no se puede desconocer es que a su paso ha causado el desplazamiento forzado de millones de personas, centenares de muertos y desaparecidos, así como decenas de miles de víctimas de amenaza, despojo, abandono forzado de tierras, secuestro, extorsión, tortura, violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas y demás graves y crímenes, es por ello que para el año 1991 la Asamblea Nacional Constituyente tuvo como una de sus pretensiones centrales que la paz fuese un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la constitución que estaba por expedirse, la lucha por la consecución de la paz en el proceso constituyente de 1991 adquirió significativa relevancia, en este contexto se precisó para la época “la búsqueda de soluciones pacíficas los conflictos internos desarrolla la filosofía humanista de la Constitución y legitima la acción de las autoridades públicas de un Estado democrático”¹.

A pesar de los esfuerzos plasmados en la Constitución de 1991 para la consolidación de Paz, el conflicto armado interno del país se siguió prolongando, situación que generó diversos esfuerzos de diferentes gobiernos de llevar diálogos de paz en aras de la terminación del conflicto y cese de las hostilidades, los cuales terminaron siendo infructuosos. El inicio de las negociaciones si solución de continuidad entre el Gobierno de la época y las Farc-EP el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar actividades en la capital cubana constituyó el inicio de un camino hacia la suscripción de un acuerdo que permitiera poner fin al conflicto y la construcción de

¹ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 630 de 2017 (17-10-2017). MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. P.64 la cual refiere lo contenido en Sentencia C-047-2001.

una paz estable y duradera, en el camino el mismo sufrió reveses, pero también espaldarazos como lo fue la declaración de exequibilidad de las normas que permitieron la construcción del marco jurídico para la paz a través de las sentencias C- 579-2013 y C-577 de 2014 que declaró la constitucionalidad del artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2012.²

Finalmente, en el año 2016 se suscribe Acuerdo Final de paz entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc, después de haber sido renegociado y reformulado el suscrito inicialmente, en ocasión a la decisión popular adoptada por el pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y a la refrendación popular del nuevo acuerdo adelantada por el Congreso de la República como órgano popular constituido y con alta legitimidad democrática.

El referido Acuerdo Final de paz, que en el inicio de los diálogos con las Farc nace de la decisión mutua de las partes de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera y por el clamor del pueblo de lograr dicha finalidad, termina convirtiéndose en un instrumento de carácter político y con status de política de Estado. Acuerdo que trae en consigo varias finalidades entre ellas la protección a las víctimas que dejó el conflicto y el objetivo que no exista una más después de su implementación, lograr amplios estándares de inclusión social, la integración de los territorios que padecieron el conflicto y el fortalecimiento de la democracia que asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales.³

² COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. AL 01 de 2012 (31 de julio de 2012). Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones que le conferían al Congreso de la República. [en Línea]. Bogotá D.C. Diario oficial. 2012.37. [consultado el 8 octubre de 2019]. En el cual en su artículo 3 disponía parámetros para determinar pueden considerarse como delitos políticos y de esta forma determinar quiénes después de someterse a un proceso de paz y la desmovilización y reinserción dentro de la sociedad civil, pueden participar en política en un futuro.

³ COLOMBIA. GOBIERNO DE COLOMBIA – FARC E-P. acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 2016. Introducción.

El Acuerdo Final dentro de sus fundamentos y finalidades propende por el respeto de los derechos inalienables de la persona como fundamento de la convivencia, así como la garantía que este deba regirse por el reconocimiento de ninguna forma de discriminación, igualdad y protección del pluralismo de la sociedad Colombia, de la misma forma será garante de las medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencia y de género y la participación ciudadana como eje central para su desarrollo; para los efectos propios del logro de lo anterior el Acuerdo Final se encuentra estructurado en seis ejes temáticos que abarcan en particular los temas primordiales que se requieren para garantizar que efectivamente exista la construcción de un estado social de derecho, incluyente con participación y garante de los principios democráticos y derechos humanos para cada uno de los ciudadanos que hacen parte de él, así las cosas los mencionados ejes rectores del acuerdo son: 1) Reforma rural Integral 2) Participación integral 3) Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas 4) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 5) Víctimas 6) Mecanismos de implementación y verificación.

Así las cosas y en aras de lograr la implementación e incorporación jurídica de lo pactado en el Acuerdo Final de paz debido a la carencia de valor normativo de este, el gobierno y el Congreso de la República han dispuesto de mecanismos de producción normativa como actos legislativos, leyes y demás medios constitucionales, legales y reglamentarios, para los cuales en el *procedimiento legislativo para la paz* (Fast track) se estableció el control de constitucionalidad de dichos actos reformativos de la constitución, competencia otorgada a la Corte Constitucional que toma papel preponderante y es el objeto de estudio del presente análisis jurisprudencial, en el cual se han seleccionado sentencias específicas que permiten construir un marco de orientación en torno al sentido de los fallos y las decisiones adoptadas con respeto a los límites formales y materiales de reforma de los órganos competentes y la finalidad última del establecimiento de

la paz sin que existiese alteración o suplantación de los ejes axiales que fundamentan la identidad de la Constitución Política de Colombia.

Con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2016, se le asignó a la Corte Constitucional la función de revisar la totalidad de las normas de implementación del Acuerdo Final que llegaran a ser expedidas mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz o en virtud de las Facultades Presidenciales para la Paz, dicho rol lo denominó el magistrado Alejandro Linares como el de una “tercera cámara legislativa”,⁴ puesto que corporación que representa se le asignó tarea de realizar el control integral de todas las normas derivadas de dicha implementación generando con ello precedente jurisprudencial en la conformación de un ordenamiento orientado a la transición del conflicto a la paz y los criterios de interpretación de las normas que desarrollan el Acuerdo Final y la normatividad que garantiza la estabilidad del mismo.

El papel adelantado por la Corte Constitucional en la implementación y desarrollo del Acuerdo Final ha sido un trabajo sin precedentes, pero solo esta corporación tenía la competencia constitucional para ejercer el control de los actos reformativos, leyes y decretos leyes expedidos en este proceso en su calidad de autoridad guardiana de la integridad de la Constitución, en palabras del Magistrado Linares expresa “En este rol, nuestro trabajo se incrementó de manera exponencial, pues debíamos cumplirle al país, en un tiempo razonable, con la difícil tarea de señalar cuáles normas se ajustaban a la Constitución y cuáles no. Revisamos un total de 46 normas, así: 5 actos legislativos, 6 leyes y 35 decretos-ley, para un total de 774 disposiciones normativas. La importante labor

⁴ Las Cinco Decisiones de la Corte Constitucional Frente al proceso de Paz. Diario la Republica. Bogotá D.C. 18 de octubre de 2018. [consultado el 20-09-2019] .Disponible en: <https://www.larepublica.co/economia/las-cinco-decisiones-de-la-corte-constitucional-frente-al-proceso-de-paz-2782011>

encomendada a la Corte Constitucional nos enfrentó a dos tipos de retos: jurídicos y políticos”⁵.

Por tanto, mis objetivos con el presente documento consisten en, analizar el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional Colombiana ha realizado sobre la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de esta forma concluir acerca de lo decidido en esta materia por parte de esta Corporación y como estas decisiones han contribuido a la materialización de las finalidades, principios y compromisos estipulados en el Acuerdo Final de Paz.

Consecuente, pretendo en esta investigación analizar los avances que ha tenido la implementación normativa del Acuerdo Final de Paz en el ordenamiento interno colombiano, por tanto seleccione cinco fallos de la Corte Constitucional en el periodo 2016 a 2018, que me permitiera dilucidar mi objeto de investigación, para ello realice un análisis jurisprudencial a través de fichas que se decantan en el desarrollo del documento, las sentencias analizadas fueron: 1.1 Sentencia C-699-2016 (se revisa constitucionalidad AL 01 de 2016 que desarrolla el procedimiento legislativo para la paz (fast track) y facultades presidenciales para la paz), 1.2 Sentencia C-332-2017 (se revisa constitucionalidad de las normas del AL 01 de 2016 que no fueron objeto de control de sentencia C-699-2016), 1.3 Sentencia C-630-2017 (se revisa constitucionalidad AL 02 de 2017 que introduce artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final), 1.4 C-027-2018(se revisa constitucionalidad del AL 03 de 2017 que regula parcialmente la reincorporación en política), 1.5 Sentencia C-020-2018 (re revisa constitucionalidad del AL 04 de 2017 por medio del cual se reforma el sistema general de regalías). Al final del documento se reseñan unas conclusiones reflexivas de los temas más importantes que en mi criterio desarrollan las providencias objeto de análisis.

⁵ Las Cinco Decisiones de la Corte Constitucional Frente al proceso de Paz. Diario la Republica. Bogotá D.C. 18 de octubre de 2018. [consultado el 20-09-2019] .Disponible en: <https://www.larepublica.co/economia/las-cinco-decisiones-de-la-corte-constitucional-frente-al-proceso-de-paz-2782011>

1. FICHAS ANALISIS JURISPRUDENCIA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA ACUERDO FINAL DE PAZ

1.1 C-699-2016

C-699-2016	
TIPO DE PROCESO QUE GENERA SENTENCIA	ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO
FECHA DE LA SENTENCIA	13 de diciembre de 2016
MAGISTRADO (A) PONENTE	María Victoria Calle Correa
MAGISTRADOS QUE CONFORMARON SALA	Sala Plena
1.6 MAGISTRADOS QUE ACLARAN VOTO	Luis Ernesto Vargas Silva Alejandro Linares Cantillo Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (aclaración no aparece en el compendio de la sentencia) Aquiles Arrieta Gómez (Mg E) (aclaración no aparece en el compendio de la sentencia)
MAGISTRADOS QUE SALVAN VOTO	Luis Guillermo Guerrero Pérez Jorge Iván Palacio Palacio (parcial) Alberto Rojas Ríos (parcial) Gloria Stella Ortiz delgado (parcial)
ACTOR O DEMANDANTE	Jesús Pérez González Rubio
INTERVINIENTES	<p>-Gobierno Nacional (intervención conjunta del Ministerio de Justicia y del derecho, el Alto Comisionado para la paz , Secretaria Jurídica de Presidencia de la República, Alto consejero Postconflicto, derechos humanos y seguridad, el Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Director General de la Agencia Colombiana para la reintegración y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos).</p> <p>-Departamento de Prosperidad Social.</p> <p>-Defensoría del pueblo.</p> <p>-Centro Nacional de Memoria Histórica</p> <p>- Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz –Cinepppp.</p> <p>- Ciudadano Iván Orozco Abad.</p> <p>- Federación Colombiana de Municipios –Fedemunicipios.</p> <p>- Universidad de Cartagena, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.</p> <p>- Universidad Externado de Colombia -Departamento de Derecho Constitucional.</p> <p>- Universidad Industrial de Santander –UIS-, unidad de Litigio Estratégico.</p> <p>- Universidad Sergio Arboleda – Facultad de Derecho.</p> <p>- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.</p> <p>- Corporación Cultura y Educación para la Paz – Cepaz.</p> <p>- Intervenciones ciudadanas: José Manuel Charria.</p> <p>Intervenciones ciudadanas extemporáneas –anteriores al registro del proyecto de fallo-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciudadana Bernardita Pérez Restrepo. - Ciudadano Alirio Uribe Muñoz.

C-699-2016	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ciudadano Yesid Reyes Alvarado. - La Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. <p>Intervenciones ciudadanas extemporáneas –posteriores al registro del proyecto de fallo-</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. - Presidente Cámara de Representantes. - Familiares de los Diputados del Valle del Cauca. - Ciudadanos Daniel Jiménez, Jhon Amaya, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jeisson Pérez, Germán Ardila, Dayr Sedano y Santiago Rivera. - Ciudadano Jaime Arturo Fonseca Triviño, actuando en representación de la Asociación de las Víctimas Cristianas Evangélicas de Colombia. - Congresistas del partido Centro Democrático. - Federación Comunal del Departamento de Putumayo. - Ciudadanos Andrés Vernaza y Jaime Castro. - Ciudadanos Esteban Jaramillo, Carlos Hugo Ramírez y Jorge Bustamante. - Grupo de organizaciones sociales (Red Jóvenes Sinestesia, El Avispero, Paz a la Calle, Seamos Democracia Digital, Paziempre Movimiento Estudiantil, Javerianos por la Paz y Campamento por la Paz).
A FAVOR DE LA EXEQUIBILIDAD NORMA DEMANDADA	<p>-Gobierno Nacional: Le solicitan a la Corte inhibirse o, en su defecto, declarar exequibles las disposiciones cuestionadas, lo anterior fundamentado en: el actor no identifica apropiadamente el pilar fundamental que habría sido sustituido, es decir el actor muestra el hecho objetivo de que se modificó el procedimiento de reforma constitucional mediante actos legislativos, pero no que se hubiera sustituido el principio de rigidez constitucional. Con respecto al cargo dos el ciudadano no precisa en qué consiste el pilar fundamental sustituido por el artículo 2 del Acto Legislativo, y fuera de ello tampoco demuestra por qué se sustituye con esa norma.</p> <p>Que si la Corte Constitucional decide declarar aptos los cargos, deben ser declarados imprósperos toda vez que el Acto Legislativo 01 de 2016 busca garantizar la integralidad, la eficiencia, la agilidad y la fidelidad de las reformas que es preciso introducir al ordenamiento jurídico en aras de implementar el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, ya que no implementarlos con fidelidad y de manera oportuna implicarían un <i>“riesgo alto de que se reabran negociaciones cerradas y resurja la violencia”</i>. Se debe precisar las disposiciones cuestionadas solo entran en vigencia una vez exista un acuerdo para la terminación del conflicto y este haya sido refrendado popularmente y que los mecanismos contemplados en las previsiones demandadas apelan a organismos democráticos (Congreso y Presidente de la República), y se sujetan a control constitucional.</p> <p>Finalmente señala el gobierno que las disposiciones acusadas no sustituye el principio de rigidez, sino que se cambia una de sus manifestaciones concretas por otra, también respetuosa</p>

C-699-2016

de la rigidez constitucional, además excepcional, temporal y transitoria y tampoco se sustituye el principio de separación de poderes, sino que se reforma una de sus expresiones concretas y queda entonces un orden constitucional en el cual se identifica plenamente el referido principio, lo anterior basados en lo señalado por la jurisprudencia constitucional la cual ha determinado que el poder de reforma constitucional le puede asignar facultades legislativas extraordinarias directamente al Presidente de la República y el legislador puede conferirle al Presidente estas facultades por un tiempo y para regular asuntos precisos, dentro de ciertos límites, que es lo que hace precisamente al Acto Legislativo 01 de 2016.

-Departamento de prosperidad social: Solicita a la corte inhibirse de emitir fallo de fondo o en su defecto declarar exequible los preceptos demandados, lo anterior en virtud que la posición del demandante no confronta las normas acusadas con los principios constitucionales que dice sustituidos.

Adicional a lo anterior precisan que la rigidez constitucional no es el único principio que identifica la Constitución, y el Congreso puede reformar los principios y valores que identifican el orden constitucional en aras de reforzar otros de la misma naturaleza, caso en el cual no habría una sustitución sino una reforma y en relación con la sustitución del principio de separación no hubo sustitución del mismo, pues las facultades extraordinarias que se le confieren al Presidente de la República están limitadas al desarrollo del acuerdo de paz y por el control constitucional.

-Defensoría del pueblo: Solo hace referencia al cargo número 1 demandado, señalando que el 2 no está llamado a prosperar ya que no se fundamenta en debida forma.

Determina que el artículo 1 del acto legislativo 01 de 2016 debe ser declarado exequible en razón a que en primera medida ya que el Acto Legislativo bajo examen no iguala los procedimientos de expedición de actos legislativos y de leyes, como se aprecia a partir de la lectura de la reforma, ya que si bien es cierto reduce las exigencias contempladas para expedir actos legislativos considera que este no es contrario regímenes parlamentarios o presidenciales relevantes para interpretar los valores del orden constitucional colombiano.

Puntualiza que la norma demandada no sustituye la constitución "*porque obedece a criterios de razonabilidad y proporcionalidad*" y que es precisamente este acto legislativo el que contempla mecanismos para implementar el acuerdo de terminación del conflicto con el fin imperioso de lograr la paz, y su contribución en la reconciliación y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho deben tenerse en cuenta al examinar su constitucionalidad.

-CinepPPP: Señala que las normas demandadas deben ser declaradas exequibles, ya que, en primer lugar, la Constitución de 1991 Constitución flexible, toda vez que no contiene cláusulas pétreas o intangibles. La instauración de la paz en

C-699-2016

el territorio colombiano, se instaure como objetivo esencial y definitorio de la identidad de constitución.

Adicionalmente establecen que no sustituye la Constitución, sino que posibilita la constitucionalización de un conflicto; es decir, transformarlo en discusión política.

-Ciudadano Iván Orozco Abad: Considera que las normas demandadas son exigibles y realiza un análisis doctrinal acerca del constitucionalismo colombiano y sus particularidades.

El interviniente determina que La paz negociada y la justicia transicional demandan además mucha celeridad en sus ejecutorias, y no pueden sujetarse al ritmo de lo ordinario, toda vez que son instrumentos para dejar atrás un pasado de injusticias extraordinarias, y para permitir que la colectividad vuelva a concentrarse en la realización plena de la Constitución y de su justicia como ordinarias. Con el Acto Legislativo se busca esa finalidad, sin sacrificar el principio de separación de poderes pues se trata de un acto que expide el Congreso y deja en cabeza suya el poder de reforma constitucional; preserva en el Congreso la facultad de hacer las leyes y en la Corte la de controlarlas; y mantiene límites a las facultades legislativas extraordinarias conferidas al Presidente de la República.

Puntualiza que, si bien la lógica ordinaria de la Constitución no pierde relevancia, adquieren mayor peso las normas de la Constitución que desarrollan lógicas extraordinarias en virtud del caso concreto será potestad de la Corte tomar postura con alguna de las dos lógicas, señalando que la extraordinaria busca una salida negociada a los conflictos.

-Fedemunicipios: Parte por señalar que se deben declarar exigibles las provisiones demandadas. Para la Federación resulta exagerado sostener que las cláusulas de reforma constitucional no puedan a su turno ser reformadas. Reconoce en esas normas constitucionales “*un elemento basilar de la Carta*”, pero aclara que una cosa es abolirlas y otra simplemente modificarlas, como ocurrió en este caso.

Adicional a ello ponen de manifiesto que el acto cuestionado pretende responder a circunstancias excepcionales y de hondo significado para la vida política del país, y por eso se refuerza la premisa inicial de que no por el hecho de solo haber modificado las cláusulas de reforma las disposiciones demandadas son inconstitucionales. Y que para el segundo cargo expuesto por el demandante no se trata de una sustitución del principio de separación de poderes sino una representación distinta del mismo.

-Universidad Externado de Colombia: plantea a través de su departamento de derecho constitucional que se encuentra en oposición a la acción pública de inconstitucionalidad ya que el juicio que realiza el demandante no conduce a las conclusiones que esboza.

C-699-2016

-Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: Señala que la corte debe inhibirse de proferir fallo. Señalan que el Acto Legislativo cuestionado no sustituye la constitución ya que confiere facultades extraordinarias limitadas en el tiempo, sin afectar siquiera las competencias legislativas permanentes del Congreso y solo para garantizar la autenticidad de los acuerdos logrados en la Habana.

Adicional a ello las cláusulas de reforma constitucional, si bien son postulados de garantía de los principios y valores de la Constitución, no pueden considerarse cláusulas pétreas o límites materiales inmodificables, y en cambio deben poderse reformar en circunstancias extraordinarias concretas; el procedimiento no introduce en últimas elementos extraños a la carta por el contrario contiene los requisitos esenciales para una reforma estipulados en la constitución.

Intervenciones ciudadanas extemporáneas antes del registro del proyecto del fallo

Para efectos del desarrollo de la sentencia y pronunciamientos de la corte constitucional es importante rescatar la postura de los ciudadanos Alirio Uribe Muñoz y Yesid Reyes Alvarado ambos puntualizan en que los artículos demandados deben ser declarados exequibles ya que para el primero el procedimiento especial incluido en el acto legislativo 01 de 2016 ya que este no sustituye la constitución porque no reemplaza por otros los mecanismos de reforma constitucional, sino que los adiciona con un nuevo instrumento que exige mayorías absolutas, cuatro debates, participación de las dos Cámaras y control constitucional automático, reformas que armonizan con otras instituciones de la Constitución de 1991.

Ambos coinciden en la integración normativa del artículo 5 del acto legislativo y sea por tanto objeto de control debido a la íntima conexión que tiene con las disposiciones acusadas y para evitar un fallo inocuo, el ciudadano Reyes Alvarado también concluye algo similar en cuanto a la integración normativa del referido artículo aduciendo que el mismo no tiene un contenido deóntico propio sino que está íntimamente relacionado con el procedimiento legislativo especial, pues define un componente esencial del nuevo mecanismo de reforma constitucional que es la refrendación como su condición de posibilidad jurídica.

Finalmente señalar que ambos solicitan que en caso de prosperar la integración normativa del artículo 5 del acto legislativo 01 de 2016 en el control de constitucionalidad que adelanta la Corte, la norma debería declararse inexecutable ya que: "introduce un mecanismo de reforma plebiscitaria de la Carta, que verdaderamente sustituye el esquema de reforma constitucional, y desconoce la separación de poderes pues supedita la puesta en vigencia de un acto del Congreso a un acto facultativo de otra rama del poder público, y del pueblo, materia que es incompatible con su autonomía política". (Alirio Muñoz) y conforme a lo señaló el ciudadano Yesid Reyes "introduciría a la Constitución un nuevo mecanismo de reforma constitucional, el "*plebiscito especial*

C-699-2016	
	<p><i>constituyente</i>", desprovisto de los controles que tienen las cláusulas de reforma establecidas por el Constituyente originario para evitar la imposición ilegítima de una decisión mayoritaria al resto del cuerpo ciudadano".</p>
EN FAVOR DE INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA	<p>-<u>Universidad de Cartagena</u>: considera que debe declararse inexecutable el literal f del artículo primero de la norma demandada, en razón a que las cláusulas de reforma constitucional son esenciales a la identidad de la Constitución de 1991 y, en consecuencia, conforme a la Constitución la adición de un nuevo mecanismo de cambio constitucional sustituye un elemento definitorio de la esencia de la Carta.</p> <p>-<u>Universidad Industrial de Santander –UIS</u>: En su planteamiento estima que las dos normas acusadas son inexecutable, la primera norma es inconstitucional porque <i>"identifica en materia de procedimientos y debates la producción de las normas constitucionales y legales"</i> y para el artículo 2 sustituye la Carta por cuanto la jurisprudencia de la Corte ha indicado que la delegación legislativa no supone una extralimitación de los límites de competencia del Congreso <i>"siempre y cuando sea específica, sujeta a la cláusula de reserva de ley y en todo caso supeditada al control constitucional"</i>, y esa restricción se transgredió en el presente caso concluye el interviniente.</p> <p>-<u>Universidad Sergio Arboleda</u>: La intervención está orientada a coadyuvar la demanda, como primer punto estima inconstitucionales todos los literales del artículo primero del acto legislativo 01 de 2016, por tanto exhorta a la Corte Constitucional integrarlos en unidad normativa y someterlos a control toda vez que todos en conjunto integran un nuevo procedimiento de reforma a la constitución, señalan para concluir ese primer punto que: las cláusulas de reforma constitucional son elementos propios y esenciales de la identidad de la Constitución y por tanto –dice– <i>"no podrían ser alteradas por el poder constituyente secundario"</i> de conformidad a lo que indica la jurisprudencia constitucional.</p> <p>Concluyen señalando que la reforma incluida en los artículos acusados modifica las reglas de la reforma a la constitución, las cuales son un eje definitorio de la carta, lo cual altera dicho pilar fundamental probando esto un desbordamiento a los límites de la reforma.</p> <p><u>Ciudadano Juan Charria Segura</u>: considera que las normas demandadas deben declararse inexecutable y pronunciarse además del artículo 4 del acto legislativo así no este demandado.</p> <p>En su planteamiento señala que la reducción de ocho a cuatro debates para aprobar actos legislativos <i>"vulnera"</i> la normatividad vigente para la emisión de normas constitucionales, toda vez que en virtud suya <i>"es lo mismo aprobar una reforma a la Constitución con un Acto Legislativo que una ley, lo cual significa que la Constitución se vuelve flexible cuando el constituyente de 1991 elaboró una Constitución rígida y que adicional a ello dicho procedimiento</i></p>

C-699-2016	
	<p>de reforma vulnera el principio de supremacía constitucional al equiparar la formación de los actos legislativos con las leyes.</p> <p>Determina para finalizar su intervención que el artículo 2 cuestionado vulnera el principio de separación de poderes ya que el poder de reforma no puede conferir facultades legislativas extraordinarias, ni mucho menos puede darse una habilitación legislativa imprecisa. Lo anterior a que con el Acto Legislativo 01 de 2016 el Presidente de la República se convierte en legislador, y usurpa una competencia asignada por el Constituyente al Congreso de la República.</p> <p>Intervenciones ciudadanas extemporáneas antes del registro del proyecto del fallo</p> <p><u>-Ciudadana Bernardita Pérez Restrepo:</u> En su intervención solicita a la Corte declarar terminado el trámite de control constitucional del Acto Legislativo 01 de 2016, ya que el mismo carece de objeto un pronunciamiento de fondo, ya que con la victoria del NO en el Plebiscito, se entiende que no se refrendaron los acuerdos y el acto reformativo de la Constitución no entró en vigencia.</p>
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	<p>La Procuradora General de la Nación (e), a través de concepto 6184 del 11 de octubre de 2016, solicita a la corte constitucional declararse inhibida por falta de competencia, o de no hacerlo declarar inexecutable las normas acusadas.</p> <p>Lo primero que señala el pronunciamiento de la procuraduría es que la Corte Constitucional no tiene atribuciones para controlar los actos que reforman la constitución bajo el supuesto teórico de la prohibición de la sustitución constitucional toda vez a que el constituyente solo estableció límites formales al poder de reforma, no existen parámetros para determinar objetivamente ejes axiales para la constitución y tampoco normas que le atribuyan esa competencia a la Corte constitucional.</p> <p>Con respecto a la competencia de la Corte Constitucional para conocer de la demanda de constitucionalidad del Acto Legislativo demandado, señala que la referida corporación es competente de asumir conocimiento, toda vez a que si bien es cierto este solo entra en vigencia cuando sea refrendado por el pueblo, hecho que no ha ocurrido y por tanto no estaría vigente, se entendería que no es incongruente su revisión y la emisión de un fallo toda vez que ya el Acto Legislativo 01 de 2016 se encuentra en “estado de latencia” ya que su vigencia se supedita a una condición que aún puede cumplirse en el futuro.</p> <p>Al analizar la inconstitucionalidad del artículo primero del acto legislativo extrae los fundamentos aplicados por el actor para fundamentar los cargos realizados, mas como aporte señala la procuradora que conforme a la estructura del procedimiento emanado de dicho artículo existe una reducción de exigencias que va en contra de un principio democrático esencial en las reformas constitucionales, garantizado por el tramite más</p>

C-699-2016	
	<p>exigente de las mismas , la cual se fundamenta en la búsqueda del mayor consenso posible.</p> <p>Con respecto al artículo segundo señala que comparte con el actor en que el principio de separación de poderes es un eje axial, que puede contemplarse en varias disposiciones de la carta política, para la procuraduría el acto demandado desconoce dicho principio ya que : “(a) confiere facultades legislativas ordinarias, no supeditadas a la inactividad del Congreso, (b) para la expedición de todo tipo de leyes ordinarias, excepto las tributarias, (c) con el objeto de que el Presidente pueda emitir por esa vía todas normas ordinarias que desarrollen el acuerdo, (d) y para implementar un acuerdo cuyo contenido se desconocía cuando se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2016, de modo que confirió facultades legislativas para desarrollar una materia que era desconocida por el Congreso” elementos que concluye son extraños al principio de separación de poderes instituido por la constitución de 1991.</p> <p>Finalmente, que el aparte demandado en relación la prórroga del procedimiento legislativo extraordinario para la paz es inconstitucional ya que aniquila a su modo de ver la función legislativa ordinaria al someterla a la voluntad del poder ejecutivo, generando con esto la posibilidad de que esa rama del poder “<i>bloquee la función legislativa ordinaria</i>” invirtiéndose el principio de separación de poderes.</p>
DETALLES Y/O CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA	
TEMAS TRATADOS	<ul style="list-style-type: none"> -Procedimiento especial para la implementación de los acuerdos de paz. -Juicio de Sustitución - Refrendación Popular -Límites a la Reforma Constitucional -Principio de Unidad constitucional -Principio de Resistencia Constitucional Relativa. - Principio de Separación de Poderes
NORMA DEMANDADA	<p>Se demanda de forma parcial el artículo 1 y 2 del acto legislativo 01 de 2016 <i>“Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”</i>.</p> <p>Así las cosas, se transcriben las normas enunciadas y objeto de revisión y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, los párrafos que se resaltan en negrilla son los demandados:</p> <p>ARTÍCULO 1o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:</p> <p>Artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera</p>

C-699-2016	
	<p>excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. <u>Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República.</u></p> <p>El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se regirá por las siguientes reglas: [...] f) <u>Los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días.</u> [...]</p> <p>ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:</p> <p><u>Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. [...]</u> ”.</p>
<p>HECHOS Y ARGUMENTOS JURUICOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA</p>	<p>El actor demanda la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 (parcial) del acto legislativo 01 de 2016 en el entendido que para él se constituyen en un vicio de competencia del Congreso de la República, ya que al ser órgano constituido carece de facultades para sustituir la constitución y que los apartes de los artículos demandados sustituyen ejes axiales definitorios de la constitución, tales como la superior dificultad para ser reformada, integrado por los principios de Estado Constitucional de Derecho, rigidez constitucional, supremacía de la Constitución y control constitucional de las leyes; y el principio de separación de poderes para el aparte demandado del artículo 2 del Acto Legislativo.</p> <p>El fundamento de sustitución del elemento definitorio de la constitución con respecto al artículo primero, lo adelanta el acto señalando en primera instancia que la Constitución del 1991 se identifica por la garantía de los principios de supremacía constitucional y estado constitucional basados en los artículos 4, 3, 241, 243 y 374 de la carta política y señalan que esos principios son definitorios de la misma ya que son una reacción al régimen contemplado en la constitución de 1886, ya que anteriormente no se le daba ese reconocimiento de norma suprema a la constitución y para su eficacia debía ser objeto de desarrollo legal.</p> <p>Señala que además hay sustitución de la carta política al equiparar la norma acusada que corresponde a un procedimiento de reforma constitucional al de la expedición de</p>

C-699-2016

una ley de la república, en argumentos esbozados por el actor concluye para este punto que “habrá desaparecido la Supremacía de la Constitución”, y los principios instrumentales a ella, y “habremos pasado del principio de rigidez constitucional al de flexibilidad constitucional que implica que la Constitución puede ser reformada por la ley que se expide con idéntico procedimiento e idéntico número de debates”.

Señala además que las normas relacionadas con reformas constitucionales son parte esencial de las constituciones y por tanto inmodificables, afirmación que sustenta en pronunciamiento de la Corte, sentencia C-1056 de 2012 que manifiesta que sin importar cual haya sido la motivación específica para determinar las reglas de reforma, estas son esenciales para la carta por que determinan los parámetros para la modificación del texto fundamental y que precisamente esos criterios son valiosos para la comunidad que se rige por ellos.

Adicional a ello toma elementos de la doctrina como es el caso de Alf Ross y Pedro de Vega que señalan que una reforma al acápite de cláusulas para realizar enmiendas a la constitución no podrían ser realizadas por el mismo procedimiento que ellas establecen, ya que dichos preceptos desaparecerían quedando sin fundamento jurídico las normas expedidas, lo que trae como consecuencia que solo el constituyente primario podría realizar dicha reforma, el demandante al aplicar dichas teorías al ordenamiento jurídico colombiano infiere que la reglas de reforma constitucional podrían ser reformadas , pero que dicha alteración no puede emanar del poder constituyente secundario (Congreso de la República) ya que estas son esenciales para la identidad de la constitución y dicho órgano no tendría la competencia para hacerlo.

Finalmente realiza conclusión que el acto legislativo es “incompatible” e “irreconciliable” con la constitución en la medida que a) *modifica de manera sustancial la producción de actos legislativos por parte del constituyente instituido o secundario al reducir el número de debates de ocho a cuatro*, y altera las cláusulas de reforma, norma entonces que sustituye la constitución porque el congreso carece de competencia para expedir esa clase de reformas. Y b) produce como resultado que “[l]os actos legislativos y la ley tienen [en adelante] *fundamentalmente el mismo procedimiento*”, lo cual en su concepto *“implica que la Constitución puede ser reformada por la ley, pues en el fondo lo que se ha hecho es eliminar el principio de rigidez de la Constitución reemplazándolo por el flexible”.*

Con respecto a los cargos establecidos para el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, el actor señala tajantemente que este sustituye el principio de separación de poderes y su complementario frenos y contrapesos, los cuales evidencian su desarrollo en los artículos 114, 115, 116 y 117 de la carta política y que finalmente se caracteriza por que cada rama del poder público ejerza funciones distintas a la principal, con autonomía financiera y administrativa, no obstante según

C-699-2016	
	<p>criterio del demandante la Corte Constitucional ha establecido límites a la competencia del poder de reforma del congreso de la república en materia de delegación legislativa.</p> <p>La corte según el acto ha definido claramente en su jurisprudencia que se sustituye la constitución cuando: “ (i) se suplanta una de las ramas del poder, a través de la asignación de sus competencias a otros órganos; y, a su vez; (ii) ese traslado de competencia genera que el acto jurídico resultante quede excluido de los controles que la misma Constitución prevé, en especial el control judicial” (Sentencia C-288-2012).</p> <p>Puntualiza que La Constitución habría sido entonces objeto de sustitución parcial y temporal, toda vez que el artículo 2 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2016 no reforma la Constitución, sino que confiere facultades extraordinarias al Presidente de la República, sin tener competencia para ello en ejercicio del poder de reforma.</p> <p>Finalmente termina señalando que la disposición demandada confiere facultades al Presidente de la República, que modifican la competencia temporal prevista en la Constitución, sin que se establezca una habilitación precisa o en concreto para el legislador extraordinario, toda vez a que hace remisión genérica a un acuerdo final para la paz cuyos temas son múltiples y diversos. Por tanto, concluye que el eje definitorio de la identidad de la Constitución, separación de poderes se altera una vez el Congreso de la República le confiere la delegación legislativa pro tēpore sin precisar las facultades extraordinarias al presidente, por lo que se sustituye parcialmente la Constitución.</p>
NORMAS JURIDICAS Y JURISPRUDENCIA APLICADA AL CASO	<p>Doctrina jurisprudencial</p> <p>-Doctrina jurisprudencial control de reformas constitucionales por vicio de competencia del órgano productor en razón a la sustitución de la constitución en los actos legislativos.</p> <p>Constitución</p> <p>-Preámbulo de la Constitución Política -Artículo 241 -242 CN -Artículo 379 CN -Artículo 376 CN -Artículo 374 CN -Artículo 375 CN - Artículo 378 CN -Artículo 133 CN</p> <p>Sentencias</p> <p>-Sentencia C-1056-2012 -Sentencia C-467-1993 -Sentencia C- 379-2016 -Sentencia C-551-2013 -Sentencia C-971-2004 -Sentencia C-1040-2005 -Sentencia C-170-2012</p>
PROBLEMA JURIDICO GENERICO C.C	<p>1. ¿Incurrió el Congreso en un vicio de competencia por sustitución parcial de la Constitución (del principio de rigidez</p>

C-699-2016	
	<p>constitucional), al establecer un procedimiento transitorio de aprobación de actos legislativos que consta de una sola vuelta, cuatro debates y un término de ocho días para la transición entre cámaras, el cual solo puede activarse cuando haya refrendación popular, y que en su aplicación exige mayoría absoluta, control automático de constitucionalidad, participación de las dos cámaras, teniendo en cuenta que este mecanismo fue previsto para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo de las reformas pactadas en un acuerdo final para la terminación del conflicto?</p> <p>2. ¿Incurrió el Congreso en un vicio de competencia por sustitución parcial de la Constitución (del principio de separación de poderes), al otorgarle directamente facultades extraordinarias al Presidente de la República en un contexto en el cual la habilitación se extiende por 180 días prorrogables, para facilitar e implementar un acuerdo final de terminación del conflicto, sin embargo no se extiende a expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, códigos, leyes que necesitan mayoría calificada o absoluta, ni para decretar impuestos, y se sujetan a control automático de constitucionalidad?</p>
TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTOS DE LA DECISIÓN	
PROBLEMA JURIDICO (RESUELTO POR LA CORTE)	<p>La corte constitucional conforme a la argumentación e hilo discursivo desarrollado en su fallo se propuso resolver tres cuestionamientos los cuales se exponen a renglón seguido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Le corresponde a la corte adelantar pronunciamiento de fondo de los artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 01 demandados en razón a que la vigencia del mismo está supeditada a la condición de refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? 2. ¿Determinar si con la expedición del procedimiento legislativo para la paz contenido en el artículo 1 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2016 se ha sustituido el elemento definitorio “rigidez constitucional” de la carta constitucional por parte del congreso de la República en el marco de sus competencias de reforma constitucional? 3. ¿Establecer si con el otorgamiento de las facultades presidenciales especiales para la paz estipuladas en el artículo 2 (parcial) del Acto legislativo 01 de 2016 hubo vicio de competencia por sustitución del pilar axial definitorio de la constitución de separación de poderes por parte del Congreso de la República?
3.2 RATIO DECIDENDI	<p>1. conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional es preciso que los actos legislativos o demás normas del ordenamiento jurídico que se les deba ejercer control por parte de esta corporación, se encuentren vigentes o que si no lo están, estos produzcan efectos o tengan vocación de producirlo, es decir potencialidad para ello, por tanto, para el caso del acto legislativo la entrada en vigencia se supliría con la refrendación popular del mismo y en razón a que el concepto es genérico y carece de desarrollo expreso, por lo</p>

C-699-2016

que le permite un amplio margen de configuración a las autoridades que deben aplicarla y configurarla.

Por tanto, para corte la expresión “refrendación popular” ofrece el siguiente marco conceptual para su entendimiento y aplicabilidad : (i) *proceso*, (ii) *en el cual haya participación ciudadana directa*, (iii) *cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos*, (iv) *proceso que puede concluir en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática*, (v) *sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participación ciudadana para la revisión específica de aspectos concretos ulteriores.*, criterios que le permitirán a los órganos llamados a darle aplicación al Acto Legislativo si se cumplió y entro en vigencia el mismo.

Se debe entender que siempre habrá refrendación popular aun cuando no se someta a ratificación ciudadana posterior siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso, en especial se respeten, interpreten y desarrollen de buena fe los resultados de la consulta previa a la ciudadanía, en un escenario de búsqueda de mayores concesos, ya que el acuerdo final será producto de las modificaciones ocasionadas a esa participación ciudadana; lo que permite la protección del principio democrático y la facultad del pueblo para reorientar la concreción de la política de paz.

Finalmente, la Corte determina que la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016 no está supeditada a una decisión judicial ya que es improcedente y carece de competencia para ello, por ese abroga esa facultad al Congreso de la República o autoridad revestida de legitimidad democrática para determinar la vigencia del referido Acto y si se dio cumplimiento a cada uno de los criterios para determinar que hubo señalados por la Corte constitucional para refrendación popular exigida en el artículo 05 de la norma cuestionada, convirtiéndose así en un asunto de competencia exclusiva del Congreso en virtud de sus funciones.

2. La corte parte realizando la salvedad que en el orden constitucional colombiano se identifica por una “rigidez específica” caracterizada por una resistencia relativa susceptible de adaptarse al tránsito, diversa y funcionalmente diferenciada.

La Corte Constitucional, infiere que la constitución de 1991 no prevé límites de intangibilidad material absoluta, ni cláusulas de perpetuidad. Por tanto, la resistencia que detentan las normas constitucionales es ciertamente superior a la de las leyes, pero esa superioridad es un elemento que puede ser susceptible de adaptación transicional, ya que este principio cede en flexibilidad sin desaparecer a los compromisos fundamentales puedan estar es riesgo de ineffectividad. Así las cosas, en contextos de transición de un conflicto a su terminación se debe preservar la integridad del orden constitucional aplicando al principio de resistencia constitucional una dosis de adaptabilidad que asegure el

C-699-2016

cumplimiento de los valores, principios y derechos contemplados en la constitución.

Finalmente se determina en el presente fallo que no hay sustitución de la constitución ya que el eje axial definitorio de identidad de la constitución catalogado como resistencia relativa no ha sido cambiado por el legislador, toda vez que:

1. el Congreso de la República tiene competencia para a través de actos legislativos puede modificar previsiones que establecen mecanismos de enmienda constitucional, de hecho podría graduar el estándar de dificultad para el cambio originariamente previsto en la constitución, incluso reducirlo.
2. El procedimiento especial para la paz es **excepcional**: ya que solo servirá para implementar el acuerdo, **especial**: Porque su objeto es la transición hacia la terminación del conflicto a través de la implementación del acuerdo final suscrito y **transitorio**: en el entendido que su vigencia está limitada a un periodo de 6 meses prorrogable por el mismo tiempo.
3. El mecanismo especial de enmienda constitucional permite que permanezca la resistencia al cambio de las normas constitucionales por encima de las leyes, ya que contempla características en su formación que no contiene el procedimiento legislativo ordinario.
4. No establece el precepto demandado cláusulas de intangibilidad en las disposiciones o mecanismo de reforma constitucional que adopta, es decir es susceptible de ser sujeto a enmienda posterior a través de los mecanismos de reforma constitucional.
5. El procedimiento cuestionado no suprime, ni reduce la diversidad de procedimientos para el cambio constitucional, solo adiciona un mecanismo especial y
6. El acto legislativo al que pertenece el precepto acusado no equipara de ninguna forma el poder constituyente a la competencia de reforma constitucional.

3.La Corte Constitucional determinó que el precepto acusado parcialmente no desconoce y por tanto no sustituye el pilar esencial de separación de poderes contenido en la carta política, la anterior afirmación en razón a que:

A. Para su entrada al ordenamiento jurídico se requería de refrendación popular en los términos ya referenciados ratio número 1. B. el Acto Legislativo brinda herramientas y garantías para evitar que el Congreso de la República sea privado de su competencia legislativa, en ningún momento pierde su facultad principal de legislar. C. establece limite a la facultad legislativa extraordinaria del presidente, la cual solo será ejercida para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo de paz y no podrán versar sobre materias con reserva especial o estricta de ley. D. Los decretos ley producto de la habilitación legislativa extraordinaria del presidente deberán tener conexidad objetiva, estricta y suficiente con el acuerdo final. E. El ejercicio de estas facultades extraordinarias del presidente tiene un término limitado (180 días) y el legislador podrá reformar los mismo conforme a sus competencias. y F. La disposición cuestionada no suprime los controles interorgánicos que preserva el equilibrio de poderes públicos y la supremacía de la Constitución.

C-699-2016

OBITER DICTA

- Las expectativas del órgano que emite una constitución o una reforma constitucional pueden informar el sentido normativo que se les atribuya estas. Pero puede suceder que los redactores de una norma no logran prever ciertos acontecimientos sociales y políticos, que desajusten el balance de principios contenido en sus reglas, y es por eso que las expectativas originales, aunque informan, no determinan el sentido de la interpretación constitucional y se hace necesario realizar la claridad al respecto.

-La sola noción de una '*refrendación popular*' no predetermina si la participación ciudadana directa debe o puede (i) exigir la intervención de organismos representativos, (ii) contemplar la mediación ciudadana al final del proceso o en una etapa previa, (iii) tener carácter decisorio, deliberativo o propositivo, o más de uno de estos atributos conjuntamente, (iv) tener carácter vinculante o no.

- En conclusión, la refrendación popular presenta como exigencia la participación *ciudadana* directa, la cual puede darse con o sin intervención de organismos representativos; esta participación podría presentarse al final o de forma previa a la mediación de los organismos de representación; puede tener carácter decisorio, deliberativo o propositivo; y ser vinculante o no y, en caso afirmativo, esta característica será dada por el mecanismo que se utilice, así como sus resultados y el organismo sujeto a sus efectos.

- Es menester para la Corte Constitucional señalar que no forma parte de la identidad de la constitución la inmodificabilidad de las cláusulas de reforma, lo anterior porque no hay disposiciones constitucionales que se opongan a la reforma de los mecanismos de enmienda, así como tampoco existe mandato de inmodificación absoluta de sectores y preceptos del texto superior e incluso es pertinente afirmar que la carta política ha experimentado enmienda de los procedimientos de reforma.

- La existencia de diferentes mecanismos de reforma, susceptibles de ser activados por la ciudadanía y organismos distintos al congreso, con participación decisiva en la mayoría de casos y con la posibilidad de contrapesar sin la intervención del Congreso reformas a componentes determinantes, son componentes esenciales del principio de resistencia constitucional relativa, variable y diversa.

-La Constitución solo puede entonces ser sustituida por otra opuesta o integralmente diferente, a través de asamblea nacional constituyente convocada sin limitaciones de competencia en la cual pueda ejercerse el poder constituyente delegado por el pueblo soberano, aunque es pertinente señalar que para entrar a revisar la sustitución de una constitución no se requiere la proclamación de un nuevo orden.

-El juicio de sustitución del principio de rigidez específica se debe aplicar tomando en consideración que es susceptible de adaptación transicional, precisamente con la finalidad de

C-699-2016	
	<p>garantizar la integridad de parte dogmática de la carta, en especial derecho a la paz y principios que de este se derivan.</p> <p>- Un mismo órgano del poder público tiene competencia para ejercer más de una de estas funciones (dadas a otros órganos), es posible identificar en cada caso <i>una función principal</i> y advertir que las distintas funciones no se concentran excesivamente. De no ser así, la Constitución de 1991 sería irreconocible si este principio presente en toda la estructura política fundamental fuese sustituido, total o parcialmente, por un principio de concentración excesiva de poder.</p> <p>-No es exceso del poder de revisión constitucional conferir facultades extraordinarias legislativas al Presidente, ya se había realizado en otros actos legislativos, los cuales hacen parte del ordenamiento constitucional y permiten definir la identidad de la carta política y adicional a ello ya la Corte Constitucional había emitido fallos de exequibilidad para la habilitación legislativa extraordinaria del presidente conferida por órganos constituidos y competente para reformar la constitución.</p> <p>-Es cierto que al perfeccionarse el Acto Legislativo 1 de 2016 no se había finiquitado un acuerdo, pero esto no puede entenderse como que las facultades carezcan de límites competenciales, si no que dichos límites se concretaron después o al expedirse la reforma.</p>
METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO	<p>Juicio de Sustitución por posible vicio de competencia del congreso de la republica al expedir actos legislativos, para ello es preciso identificar dos premisas y extraer la conclusión, la <i>premisa mayor</i> en la cual se debe identificar los elementos definitorios de identidad de la constitución objeto de controversia, esta premisa debe caracterizarse por ser: a) expresa y clara, b) fundamentarse en diversos referentes normativos que determinen su especificidad en la carta política, c) esencial de la identidad de la constitución y d) no equivaler a la fijación de límites materiales intocables por el poder de reforma; en cuanto a la <i>premisa menor</i> las características de la enmienda producida por el órgano constituido y su alcance en torno al elemento definitorio de la identidad de la constitución que se estudian; al comparar estas dos premisas arrojará una <i>conclusión</i>.</p> <p>Cuando exista un fallo de inexecutable se entenderá entonces que “el elemento definitorio expresado en la premisa mayor “<i>reemplazado por otro –no simplemente modificado, afectado, vulnerado o contrariado-</i>” y el nuevo es opuesto o integralmente diferente al anterior, al punto que resulte incompatible con los elementos definitorios de la identidad de la Constitución de 1991” entonces se entenderá que hubo sustitución de la constitución.</p>
DECISIÓN EN CONCRETO	<p>Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 1 de 2016 ‘<i>Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo</i></p>

C-699-2016	
	<i>del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera'</i>
SALVAMENTO DE VOTO	<p>Salvamento de voto parcial, Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado:</p> <p>Fundamento su decisión basada en dos argumentos fundamentalmente:</p> <p>la posición mayoritaria excedió sus competencias cuando asumió innecesaria, oficiosa e implícitamente, el estudio de constitucionalidad del artículo 5º del Acto Legislativo 1º de 2016 para pronunciarse sobre el sentido de la expresión “refrendación popular” en relación con todo el acto legislativo y no sólo respecto de las normas parcialmente acusadas, (b) la Corte debió limitar los alcances del artículo 2º para asegurar la integridad y supremacía de la Constitución y evitar que se sustituya por otros principios que modifiquen la esencia de la Carta de 1991, como en efecto sucedió.</p> <p>En síntesis y en desarrollo del literal a indica que el control de constitucionalidad es rogado y por tanto solo podía sujetarse a los cargos demandados, la facultad del control permite hacer un juicio de validez mas no de asumir la interpretación de la vigencia de la norma y el hecho de determinar su competencia para conocer de la norma acusada no le da potestad para realizar control de constitucionalidad implícito de las normas que no fueron demandadas.</p> <p>Con respecto al literal b en el entendido que era vital que la Corte determinará límites a las facultades presidenciales para legislar ya que están potencialmente podían sustituir la constitución, lo anterior en su calidad de protectora de la supremacía de la constitución, ya que en regímenes de transición se debe preservar el orden constitucional vigente. La fijación de criterios era necesaria para que dentro del marco constitucional se procedería debidamente en escenarios excepcionales que plantea el acuerdo de paz. Límites que se hacen necesarios por que las restricciones a las facultades legislativas dadas al presidente son imprecisas y se refieren a un amplio conjunto de materias que van más allá de la necesidad propia del contexto, potestades que a su vez pueden desdibujar la función del legislador y en consecuencia vulnerar los elementos centrales y decisivos del orden constitucional vigente.</p> <p>Salvamento de voto Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez:</p> <p>–Parte en su argumento señalando que : “la flexibilización del procedimiento de reforma constitucional, acompañada de una limitación de las competencias del Congreso de la República, así como las amplias facultades extraordinarias que se confieren al Presidente de la República en el Acto Legislativo 01 de 2016, si no están acompañadas de una positiva refrendación popular del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC, como se preveía en el propio acto legislativo, sustituyen principios fundamentales sobre los cuales se asienta la Constitución de 1991”.</p>

C-699-2016

– el Magistrado señaló además que resultaba ineludible incorporar al fallo el sentido que tiene el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2016, con la única razón de la exigencia de una previa refrendación popular del acuerdo de paz, que solo tiene aceptación conforme a los mecanismos del artículo 103 de la constitución, con ciertos matices es decir que tenga alcance refrendario, solo así puede avalarse la legitimidad de unos instrumentos que trastocan de forma radical el modelo de estado previsto en la carta política del 91. reduciendo la rigidez del trámite de reforma constitucional, condicionando la competencia del congreso y confiriendo amplias facultades legislativas al Presidente de la República.

– Señala además que las reformas estructurales al ordenamiento jurídico en temas diversos y sensibles que limitan los espacios de deliberación y decisión de las instancias de producción normativa, solo resultan admisibles en el escenario en el que el acuerdo haya alcanzado el aval popular, a través de los mecanismos definidos por la carta política, que permitieran establecer de manera inequívoca un conceso ciudadano en torno al contenido del acuerdo de paz.

-La corte prescindió de los concesos fundamentales del acuerdo de paz y que se encuentran plasmados en la carta y explican la rigidez del texto superior, en aras de implementar rápidamente el acuerdo, valiéndose de una línea argumentativa artificiosa para transformar la naturaleza del mecanismo de participación usado para la refrendación popular, convirtiéndolo en un requisito de consulta previa.

-Para el magistrado el procedimiento legislativo no solo sustituye elementos axiales de la constitución, sino que afecta la legitimidad de un proceso que dio lugar a un acuerdo el cual requería de asimilación popular y un expreso respaldo del pueblo.

-Señala adicionalmente que la corte flexibilizó el procedimiento de reforma constitucional y las amplias facultades extraordinarias legislativas al Presidente, al darle una interpretación artificiosa y débil a la refrendación popular, por lo cual se concluye que se sustituye la constitución porque ambas figuras trastocan radicalmente el modelo constitucional vigente.

Salvamento parcial de voto Alberto Rojas Ríos:

Señala que pese a que en otras circunstancias merecía otro tratamiento el análisis del artículo 2 parcial del acto legislativo 01 de 2016, señalando que para el caso concreto se debe hacer un sacrificio de principio democrático en forma transitorio y excepcional, para privilegiar a través de una visión sistémica de principios y valores constitucionales, el derecho fundamental de la paz; y determina que su desacuerdo con la posición mayoritaria de la Corte solo radica en la errónea definición de refrendación popular para activar la flexibilización de los procedimientos de deliberación parlamentaria y de las facultades del Presidente de la República.

C-699-2016

-La Corte Constitucional tenía dos caminos para definir la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016, conforme al Acuerdo de paz firmado por el gobierno y las Farc el 24 de noviembre de 2016, los cuales eran: a) Recurrir al artificio de legitimación popular, el cual debía refrendarse a través de refrendo (instrumento constitucionalmente espurio) o b) basar su argumentación en los artículos 22 y 189 numeral 4 en el entendido que los acuerdos de paz son de exclusiva atribución del Presidente de la República y facultad del Congreso su implementación; por lo que el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2016 en su expresión de “Refrendación Popular” es contrario a nuestra constitución política.

-El Magistrado se aparta del criterio mayoritario adoptado por la Corte en la sentencia, en el entendido de abstenerse de ejercer control judicial sobre el Acto Legislativo 01 de 2016, ya que esta tenía un papel histórico conforme a los esfuerzos del Gobierno Nacional en la consecución de la Paz, que como principio, valor y derecho da fundamento del ordenamiento jurídico constitucional.

Trasladar al congreso la decisión de la vigencia del acto legislativo cuestionado implicó no sólo eludir la obligación constitucional de controlar y ajustar los acuerdos políticos de la negociación, que fueron vertidos en los actos jurídicos de reforma de la Constitución (Acto Legislativo 01 de 2016), sino también desconocer el compromiso histórico que las circunstancias imponían. Los cuestionamientos acerca de la vigencia de las normas son naturaleza jurídica y no política, por tanto, son los órganos que administran justicia los llamados a pronunciarse.

-Existían los presupuestos para que en el control de constitucionalidad realizado la integración normativa del artículo 5 Acto Legislativo 01 de 2016 ya que se cumplía con la causal que guarda una relación intrínseca con los artículos 1

Y 2 del acto legislativo cuestionado y era necesario su estudio porque “El hecho de que el Congreso de la República hubiera sometido al pueblo su poder secundario como constituyente, por la vía de un mecanismo sin potencialidad de reformar la Constitución (plebiscito), implicó un vaciamiento de sus competencias, lo cual configura, sin mayores audacias interpretativas, una sustitución de la Constitución de 1991”.

-Concluye su salvamento señalando que en aras de la defensa de la paz y sus tres dimensiones en el ordenamiento jurídico colombiano llamado por el magistrado como “estructura polivalente”, debe entenderse que “En un sistema democrático de gobierno, que acoja la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales, no puede someter al escrutinio popular la vigencia de éstos. Siendo la paz un derecho fundamental, y por ende, contra-mayoritario, su vigencia no está sometida a la voluntad de la mayoría parlamentaria, ni tampoco a aquella expresada por el pueblo mediante los mecanismos de participación ciudadana”.

C-699-2016	
	<p>Salvamento parcial de voto Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio:</p> <p>-Salva parcialmente el voto en razón a que en la parte motiva de la sentencia se realiza condicionamiento tácito, que pone obstáculos al proceso de paz y adicional a ello se realiza un control de constitucionalidad implícito del artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual no debía realizarse porque no había sido demandado.</p> <p>-En su pronunciamiento indica que, la constitución ni es un instrumento neutro en materia de paz, por el contrario, tiene como objetivo la superación del conflicto armado a través de convivencia pacífica y de un orden justo, por tanto, al tener esta una finalidad superior en el Estado Social de Derecho no resulta constitucionalmente válido el hecho de haberse condicionado tácitamente la vigencia del acuerdo de paz y por ende del Acto Legislativo 01 de 2016 que lo implementa, requiriendo al congreso actos posteriores que legitimen y validen la refrendación ya realizada por este órgano de representación.</p> <p>-Coincide con la constitucionalidad de las normas demandadas ya que es proporcional y razonable, ya que dicha reforma se armoniza a la finalidad última de la búsqueda de la paz como principio consustancial de la constitución, es decir resulta acertado conciliar los principios de rigidez constitucional y el mantenimiento de la paz. De la misma forma concuerda con el alcance dado a la exequibilidad de las facultades legislativas extraordinarias otorgadas al Presidente de la República ya que estas son excepcionales, usadas para un solo fin y su objetivo es el desarrollo e implementación de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las Farc en aras de alcanzar un paz estable y duradera.</p>
ACLARACIÓN DE VOTO	<p>Aclaración de voto de los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alejandro Linares Cantillo:</p> <p>-La aclaración de voto de los magistrados está orientada a señalar que la argumentación utilizada por la Corte con respecto al alcance de los requisitos para "Refrendación popular" definidos en la sentencia, fueron insuficientes ya que, si bien se determinaron las características para identificar el acto complejo de refrendación popular, no estudió si las actuaciones adelantadas por el Congreso en ese particular cumplían con esa estandarización originada en la providencia en comento.</p> <p>-Los magistrados también señalan que el nuevo acto de refrendación impuesto por la Corte al Congreso no era necesario y las razones que determinan dicho planteamiento son: "(a) el vínculo entre el principio de soberanía popular y la democracia representativa, (b) la existencia de un acto del Congreso que adelantó válidamente la refrendación, y (c) la índole del control de constitucionalidad.</p> <p>-El Congreso de la República conforme a la naturaleza de su investidura, tiene facultad de ser instancia de refrendación popular, ya que su poder deviene del pueblo, el cual actuó</p>

C-699-2016	
	<p>como cuerpo electoral en su elección, competencia que le permitió refrendar acuerdo final reformulado y ajustado en ocasión al mandato popular expresado bajo mecanismo de democracia directa.</p> <p>- Concluyen además que carece de sustento la argumentación planteada por la Corte Constitucional con respecto a la definición de validez del acto de refrendación le correspondía al Congreso, en tanto no conocía de los criterios a verificar, planteados en la sentencia.</p>
ANALISIS JURIDICO DE LA SETENCIA PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL	
COMENTARIO DE LA DECISIÓN	<p>En términos generales la decisión adoptada por la Corte al realizar su control de constitucionalidad de las normas acusadas, es decir artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 01 de 2016, se acoge y comparte toda vez a que con el sentido del fallo se salvaguarda la integridad de la constitución, se acuden a teorías propias del derecho constitucional para interpretar los ejes axiales definitorios de la constitución puestos en controversia, lo anterior sin menoscabar el ordenamiento jurídico y sin alterar de manera sustancial la jurisprudencia de la misma corporación.</p> <p>Aunado a lo anterior se reconoce el esfuerzo argumentativo, interpretativo y deductivo utilizados a la hora de enfrentar las premisas mayores dispuestas en el juicio de sustitución , que debió realizar conforme a los cargos presentados por el demandante, interpretar el principio de rigidez constitucional dotándolo de una “rigidez específica” caracterizada por una resistencia relativa susceptible de adaptarse al tránsito, diversa y funcionalmente diferenciada permitió ampliar el espectro de lo que se ha venido manejando en el ámbito de los límites a la reforma constitucional y la resistencia al cambio de las normas constitucionales, ya que fue de vital importancia esclarecer la naturaleza de las normas constitucionales, por ejemplo que las mismas no son intangibles y que pueden ceder en flexibilidad en etapas de transición y aras de alcanzar compromisos fundamentales y que también son definitorios en la carta política de 1991.</p> <p>Se reconoce que es un fallo que permite la incorporación de una normatividad que es transitoria al ordenamiento jurídico colombiano, pero tendiente de la consecución de un fin mayor que es la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable; por tanto, bajo este entendido se hace valioso la reinterpretación de los estándares de los principios definitorios de la constitución nacional, sin exceder los límites y sin desnaturalizarlos, ya que finalmente se reconocen características propias a estas normas acusadas y se condicionan a unos criterios específicos (temporalidad, especialidad) y ajustados al momento histórico que atravesaba el país al momento de realizar el análisis.</p> <p>Es importante reconocer que la posición de la Corte Constitucional en ningún momento puso en riesgo ni la supremacía de la Constitución y mucho menos su integralidad, por el contrario, el análisis se realizó buscando garantizar otras garantías fundamentales como es el derecho a la paz y</p>

C-699-2016

también su connotación de valor y principio y todos los que de ella derivan como son la justicia, la verdad, las garantías de no repetición entre otros, lo anterior sin desconocer el papel preponderante de los otros órganos del poder público en este caso el legislativo y ejecutivo, respetando y resaltando los principios de separación de poderes y democrático, sin menoscabar el papel del constituyente primario y las atribuciones por este conferidas a la diferentes ramas del poder.

Finalmente es importante señalar que existe desacuerdo en el tratamiento utilizado por la Corte Constitucional al referirse al artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2016, ya que si se iba a pronunciar implícitamente sobre su constitucionalidad y por tanto de la vigencia del acto legislativo referido (ya que este primero lo condicionaba), lo debió de integrar normativamente y de esta forma pronunciarse de manera contundente al respecto y no adelantar condicionamientos implícitos a las demás ramas del poder público en torno a la referendación popular que exigía el mencionado artículo 5 y demás requisitos de interpretación que exigía la referida norma.

Para finalizar, en cuanto a la demanda presentada por el actor, se concluye que la miasma carecía de los requisitos que ha venido exigiendo y construyendo la Corte Constitucional en su jurisprudencia, lo anterior en cuanto a probar en sus cargos la existencia de un vicio de competencia por parte del Congreso de la República al expedir los actos reformativos de la constitución impugnados, la argumentación no fue suficiente ni contundente y se prestaba a equívocos en su justificación confundiendo principios, por tanto la misma no estaba llamada a prosperar.

1.2 C-332-2017

C-332-2017	
TIPO DE PROCESO QUE GENERA SENTENCIA	ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO
FECHA DE LA SENTENCIA	17 de mayo de 2017
MAGISTRADO (A) PONENTE	Antonio José Lizarazo Ocampo
MAGISTRADOS QUE CONSTITUYERON SALA	Sala Plena
MAGISTRADOS QUE ACLARAN VOTO	La providencia expedida no tuvo aclaraciones de voto por parte de los magistrados que constituyeron sala.
MAGISTRADOS QUE SALVAN VOTO	Alejandro Linares Cantillo (salvamento parcial de voto). Antonio José Lizarazo Ocampo (salvamento parcial de voto). Alberto Rojas Ríos (salvamento parcial de voto).
ACTOR O DEMANDANTE INTERVINIENTES	Iván Duque Márquez y Otros -Ciudadano Luis Edgardo García Molano - Ciudadano Juan Manuel Charria Segura - Ciudadana Martha Lucía Ramírez -Ciudadano Juan Guillermo Sánchez Gallego -Ciudadano Alirio Uribe Muñoz -Ciudadano Italo Giuseppe Romeo Serani -Ciudadano Eudoro Echeverri Quintana -Senadores Fernando Araújo, Daniel Cabrales y Jaime Amín -Senadora Paloma Valencia - Senador Alfredo Ramos Maya, Iván Duque entre otros. -Conferencia Episcopal de Colombia -Universidad Libre de Colombia -Comisión Colombiana de Juristas -Universidad Sergio Arboleda -Universidad santo Tomas -Universidad Industrial de Santander -Universidad Autónoma de Bucaramanga La Corte Constitucional convocó Audiencia Pública , conforme al procedimiento establecido, en la cual tuvieron participación: -Demandante: Iván Duque Márquez -Presidente del Senado: Mauricio Lizcano -Ministro del Interior: Juan Fernando Cristo - Alto Comisionado para la Paz: Sergio Jaramillo Caro - Vicepresidente del Consejo de Estado - Procurador General de la Nación: Fernando Carrillo Flórez - Representante de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra - Director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo - Presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, René Uruña - profesor Rodrigo Uprimny Yepes - Ciudadana Ligia Galvis Ortiz - Ciudadano Iván Orozco Abad - Ciudadana Marta Lucía Ramírez
A FAVOR DE LA EXEQUIBILIDAD NORMA DEMANDADA	- Ciudadano Italo Giuseppe Romeo Serani:

C-332-2017

Solicita la exequibilidad del acto reformatorio acusado, ya que el Congreso de la República, al expedirlo, actuó en ejercicio del poder constituyente derivado y acudió a razones socio-históricas ineludibles. Así mismo, estiman que el órgano legislativo ponderó los principios y valores constitucionales que la historia contemporánea les pedía, dando mayor peso y valor a unos sobre otros, sin llegar, en ningún momento, a sustituir el marco constitucional vigente, ni a derogar los principios de menor eficacia, los cuales, sin duda, permanecen inmutables.

-Universidad Libre de Colombia:

Sostienen que el acto reformatorio de acusado no altera ningún límite lógico de reforma constitucional, porque, en primer lugar, no modifica, de forma expresa, ninguna cláusula del Título XIII de la Constitución Política y, en segundo lugar, porque la creación del régimen por el acto legislativo no suspende o altera las normas de reforma constitucional ordinarias.

En su criterio la norma demandada amplía el sistema de colaboración armónica de poderes, al darle más control al órgano ejecutivo sobre el legislativo, dada la función que tiene el Presidente de la República como mediador en el Congreso. Además, dicha medida no desnaturaliza el sistema de gobierno presidencial que rige en el Estado colombiano, pues el órgano legislativo conserva la facultad genérica para la concreción del Acuerdo Final.

-Comisión colombiana de juristas:

Solicitan declarar exequible el acto legislativo demandado ya que en primer lugar los argumentos de la demanda son insuficientes para iniciar un juicio de sustitución. Para los intervinientes dicho acto en vez de sustituir la constitución.

Llaman la atención sobre "lógica del diseño transitorio para la implementación y desarrollo del Acuerdo de Paz" e indican que en desarrollo del artículo 189-4 de la Constitución, el Presidente de la República tiene a su cargo la conservación y restablecimiento del orden público, competencia que lo autoriza para iniciar y dirigir, en forma exclusiva, los procesos de paz conducentes a aliviar a la sociedad del conflicto armado y a garantizar las diferentes dimensiones constitucionales de la paz.

sostienen que el Presidente y sus representantes en las negociaciones son "quienes conocen de manera integral el sentido de los elementos incorporados en los acuerdos de paz", situación que sirve de fundamento a la idea "de que sea el Gobierno Nacional quien cuente con la iniciativa para presentar proyectos de ley y actos legislativos para la implementación y desarrollo de los acuerdos de paz, y sea adicionalmente quien, mientras el acuerdo se implementa, pueda responder a las propuestas que realice el Congreso en relación con las medidas acordadas para terminar el conflicto armado".

C-332-2017	
	<p><u>-Universidad Santo Tomas:</u></p> <p>Señala que la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse de los cargos de la demanda, ya que esta es sustantivamente inepta, sus argumentos no son suficientes para determinar que el legislativo excedió su facultad de reforma de la constitución y por tanto hay sustitución de sus ejes axiales; de manera que alegar que las normas del acto legislativo son contrarias a normas vigentes de la Carta resulta inane e impropio para afirmar que hubo una sustitución de la Constitución.</p> <p>Este interviniente concluye que el acto legislativo demandado introduce modificaciones a varios artículos de la Constitución con el objeto de hacer viable el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, por lo que se trata de normas transitorias y especiales que establecen procedimientos expeditos para implementar los acuerdos y para someterlos al control de constitucionalidad, pero que, en ningún caso, eliminan la división de poderes o anulan la independencia y autonomía de la Corte Constitucional, porque no se le restringe su facultad, sino que se toman medidas para darle estabilidad y seguridad al Acuerdo Final, sin que ello haya significado sustituir cláusulas definitorias de la Constitución.</p> <p><u>Universidad Autónoma de Bucaramanga:</u></p> <p>La norma debe declararse exequible, pues los cargos formulados en la demanda no demuestran que la norma acusada sustituye elementos esenciales de la Carta Política.</p>
EN FAVOR DE INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA	<p><u>-Ciudadano Luis Edgardo García Molano:</u></p> <p>Solicita se declare inexecutable el aparte "<i>posterior a su entrada en vigencia</i>", consagrado en el literal (k) del artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 2016, toda vez que considera que el control automático y único de los proyectos de ley y de los actos legislativos, tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, debe ser previo, pues, de lo contrario, se pone en riesgo la seguridad jurídica.</p> <p><u>-Ciudadana Martha Lucia Ramírez y otros:</u></p> <p>Solicitan a la Corte se inhiba de emitir fallo de fondo, ya que el Acto Legislativo 01 de 2016 nunca entró en vigencia y en subsidio la inexecutable de la totalidad del acto reformativo. Su intervención se fundamenta en señalar que el acto legislativo en comento debía ser refrendado popularmente, situación que no se efectuó porque el resultado del plebiscito en su votación mayoritaria fue por el No.</p> <p>Adicionalmente argumentan la reforma acusada sustituye el principio de separación y equilibrio de poderes establecido en la Constitución Política de 1991, por cuanto prevé que el Congreso de la República debe renunciar a competencias y facultades ordinarias en la tramitación de proyectos de ley y</p>

C-332-2017	
	<p>de actos legislativos a la hora de implementar el Acuerdo Final, fortaleciendo de forma desproporcionada el poder del Presidente de la República.</p> <p><u>-Juan Guillermo Sánchez Gallego:</u></p> <p>Solicita que se declare inexecutable la reforma acusada, ya que para este no se puede cambiar la Constitución Política de 1991 con el texto de un articulado acordado en La Habana por un grupo de personas, entre ellas subversivos, sin ninguna representación democrática y al margen de la ley. Adicional plantea que el acuerdo final para la paz no puede hacer parte del Bloque de constitucionalidad porque esa atribución solo la tiene la corte constitucional y por qué el mismo no tiene naturaleza de tratado o convenio a la luz del derecho internacional público.</p> <p><u>-Ciudadano Alirio Uribe Muñoz:</u></p> <p>Aduce en su intervención que el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2016 vulneró el principio de consecutividad, en cuanto el asunto relativo al condicionamiento de la vigencia a la refrendación popular no fue objeto de discusión y mucho menos de aprobación en el primer debate, ni de la primera ni de la segunda vuelta, como ha debido ocurrir para preservar los principios que gobiernan constitucionalmente la formación de las leyes.</p> <p>Señala por otro lado que la reforma cuestionada lesiona las atribuciones constitucionales conferidas por el Congreso de la República como órgano de representación popular al condicionar la vigencia de sus actos reformativos de la constitución a actuaciones que no están dentro de su órbita competencial propia. Por tanto, solicita la exequibilidad condicionada de la misma entendiendo su vigencia desde su publicación como lo establece la carta política.</p> <p><u>-Senador Fernando Araujo Rumié y otros:</u></p> <p>Señalan que la Corte Constitucional debe acoger la decisión adoptada por el pueblo Colombia en el plebiscito para la refrendación del Acuerdo final y señalan que el acto legislativo demandado al darle facultades extraordinarias al presidente y demás contempladas en el articulado de la enmienda en comento genera que el Congreso de la República en un simple avalador de los intereses del gobierno y de las FARC-EP, vulnerando la libertad de configuración del legislador y la soberanía popular.</p> <p><u>-Senadora paloma Valencia Laserna:</u></p> <p>Solicita que se declare la inexistencia del Acto Legislativo No. 01 de 2016, toda vez que su entrada en vigencia estaba ligada a la aprobación popular de los acuerdos, los cuales fueron rechazados en la votación del 2 de octubre de 2016. En sus argumentos también expone que el acto legislativo acusado quiebra pilares y ejes definitorios de la Constitución Política de 1991, tales como la separación de poderes, el sistema de</p>

C-332-2017	
	<p>frenos y contrapesos y el principio democrático.</p> <p><u>-Senador Alfredo Ramos Maya y otros:</u></p> <p>Señalan que la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2016, estaba sujeta a la refrendación popular efectuada el 2 d octubre, que en virtud a los resultados contrarios al gobierno se procedió a realizar otra refrendación indirecta a través del Congreso de la República sobre un nuevo Acuerdo que no tuvo cambios estructurales, por lo cual carece de validez al desconocer la votación del plebiscito del 2 de octubre de 2019.</p> <p><u>-Conferencia Episcopal de Colombia:</u></p> <p>Su representante señala que cualquier acuerdo de paz debe ser el proceso de un proceso democrático, el gobierno debe garantizar la participación de los diferentes sectores de la sociedad y de la opinión.</p> <p>Considera además que un acuerdo de paz no debe ser, por su propia naturaleza, incorporado a la Constitución Política, ni debe formar parte del bloque de constitucionalidad, sino que debe ser adoptado con sujeción a la Carta Fundamental y debe ser negociado por el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente de la República. Adicional señalan que el acuerdo de paz no puede ser catalogado como un acuerdo especial que forme parte del convenio y que su justificación este dada por lo establecido en una norma de derecho internacional (convenio de ginebra) ya que esta no puede elevar a nivel constitucional un acuerdo de paz.</p> <p><u>-Universidad Sergio Arboleda:</u></p> <p>Los representantes de dicha universidad señalan que debe declararse inexecutable el artículo 1 del acto legislativo acusado, así como cada uno de sus literales ya que constituye una modificación de las reglas de reforma constitucional.</p> <p>Así como también debe declararse inexecutable el artículo 4 del Acto Legislativo No. 01 de 2016 en ocasión a los vicios de forma en el procedimiento de su expedición.</p>
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	<p>La Procuradora General de la Nación mediante su concepto 006 del 7 de abril de 2016, solicita primigeniamente que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad en razón a la violación del procedimiento exigido para su expedición. Así mismo, insta a la Corporación a que se declare inhibida para pronunciarse sobre los cargos presentados en la demanda de la referencia, con fundamento en la tesis de la sustitución constitucional, toda vez que la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre cargos de fondo formulados contra un acto legislativo.</p> <p>En caso de que la Corte constitucional se declara competente para realizar examen de constitucionalidad del acto reformatorio demanda esta debería:</p>

C-332-2017	
	<p>1. Estarse a lo resuelto en sentencia C- 699 -2016, en relación a declarar la inexecutable, por sustitución de la Constitución, de la expresión “Los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates”, contenida en el literal f) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016, así como de la expresión “Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, contenida en el inciso primero del artículo 2º de la misma reforma.</p> <p>2. Declarar la inexecutable por sustitución de la constitución, de la expresión “y de acto legislativo”, contenida en el literal h) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016, así como de la expresión “único”, contenida en el literal k) del artículo primero, y de las expresiones análogas contenidas en los artículos segundo y cuarto de la misma preceptiva constitucional; al igual que de los literales j) y k) del artículo 1º y del artículo cuarto del Acto Legislativo 01 de 2016.</p> <p>De no declararse inexecutable de la expresión “único” contenida en el literal k declarar su executable condicionada de dicha norma bajo el entendido que dicha expresión no debe interpretarse como un límite para ejercer nuevos controles judiciales ante inconstitucionalidades sobrevinientes, e indica que, de igual manera, debe entenderse que no resulta aplicable al juicio efectuado sobre reformas constitucionales por vicios de sustitución.</p> <p>Por tanto, los literales h) y j) del acto legislativo 01, en criterio de la vista fiscal sostiene que el precepto implica que la función deliberativa del Congreso de la República esté sometida a la concurrencia de otro poder constituido como es el poder gubernamental, lo que desconoce el eje axial de la separación de poderes. Para la Procuraduría estima que las disposiciones acusadas sustituyen dos de los tres elementos que representan el eje axial de la separación de poderes, específicamente en lo que tiene que ver con la concurrencia que debe existir entre el ejecutivo y el legislativo para la confección de la ley, así como el aval que debe emitir el presidente genera que el congreso pierda todo papel deliberativo, lo cual desnaturaliza su función constitucional.</p> <p>Con respecto al literal K del artículo 1 acusado concluye que dicha disposición implica materialmente una exigencia del constituyente derivado al juez constitucional para que desarrolle controles integrales de juicio de sustitución de las reformas constitucionales en cuestión, lo cual implica una verdadera intromisión en la autonomía de la función judicial, en un juicio tan <i>sui generis</i> como el referido.</p> <p>3. Contra los cargos del artículo 2 del acto Legislativo solicita estarse a lo resuelto en el expediente D-11601, en el cual se señaló que la concesión de facultades legislativas al Presidente sustituye el eje axial de la separación funcional con</p>

C-332-2017	
	<p>colaboración armónica, porque implica un vaciamiento de la competencia ordinaria del legislativo para hacer leyes en los temas de paz. Además, por cuanto la concesión de dichas facultades extraordinarias debe implicar siempre una sujeción del ejecutivo al legislativo y no viceversa, como ocurre en este caso.</p> <p>4. Declarar la exequibilidad del artículo 3º del Acto Legislativo No. 01 de 2016, pero bajo el entendido de que esta disposición es un principio o mandato de optimización que debe realizarse, de conformidad con las competencias ordinariamente previstas en el texto constitucional.</p> <p>5.El artículo 4 del acto reformativo debe declararse inexecutable señala que el Congreso como constituyente derivado efectuó un uso impreciso de la categoría “Acuerdos Especiales” consagrada en el artículo 3º de los Convenios de Ginebra, pues dicha norma se aplica durante un “conflicto armado no internacional”, sin embargo, en Colombia, se pretende utilizar cuando ya no exista conflicto armado, es decir, después de la firma y entrada en vigor del llamado “Acuerdo Final”, los acuerdos especiales están en todo caso limitados en su contenido, en tanto deben corresponder a las normas del Derecho Internacional Humanitario.</p> <p>Por tanto, la norma acusada la norma acusada sustituye los ejes axiales de la supremacía constitucional y de la rigidez constitucional por flexibilizar las excepciones que el constituyente originario previó para el <i>corpus iuris constitutionalis</i>, de tres formas específicas, permitiendo la entrada de: (i) una norma en blanco al bloque de constitucionalidad, es decir, sin una calificación sustantiva precisa; (ii) suscrita por partes que no son sujetos de derecho internacional; (iii) que desborda las categorías conceptuales que el constituyente originario permitió como admisibles a través del bloque de constitucionalidad.</p> <p>6. Así mismo, declararse inhibida para pronunciarse sobre el artículo quinto del Acto Legislativo N. ° 01 de 2016, por falta de certeza en los argumentos presentados en la demanda.</p>
INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR LA CORTE	<p><u>-Demandante Iván duque Márquez:</u></p> <p>Inicia su intervención señalando que el Acto Legislativo 01 de 2016 sustituye la Constitución Política, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de la rigidez constitucional. Para el demandante la Constitución no puede estar al albedrío de la adecuación pragmática frente a las pretensiones de quien quiera negociar con el Estado” y las negociaciones con un grupo armado ilegal deben ajustarse al precepto constitucional del derecho a la paz y a sus límites.</p> <p>Señala que el artículo 1 del acto legislativo para paz en su literal f) que crea procedimiento especial para la expedición de reformas y reduce los debates para misma altera el principio esencial de rigidez constitucional, que el literal h del referido artículo desconoce el principio de separación de poderes ya</p>

C-332-2017	
	<p>que permite que las modificaciones realizadas por el Congreso “puedan ser incididas de manera directa por el poder ejecutivo”.</p> <p>Con respecto al artículo 3 señala que con la expedición del mismo el gobierno nacional está comprometiendo los planes plurianuales por veinte años para financiar la paz, de lo que cuestiona (i) su cuantificación y presupuesto, (ii) la arquitectura institucional requerida para la aplicación del acuerdo y (iii) la claridad en el manejo de conflictos presupuestales.</p> <p>Por ultimo señala que en cuanto a la refrendación el gobierno desconoció el mandato popular y que la Corte Constitucional, al permitir que se interpretara la refrendación a través de las mayorías parlamentarias, está aplicando el procedimiento “<i>fast track</i>”, sin la soberanía del Congreso, en su condición de opositor político.</p> <p><u>-Presidente del Senado Mauricio Lizcano:</u></p> <p>Propone como primera medida que las normas contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2016 deben declararse exequibles en tanto son convenientes y necesarias para la consecución de una paz estable y duradera.</p> <p>Que no tiene asidero la afirmación de los demandantes al señalar que los literales h) y j) del artículo 1 del acto reformativo demandado violenta el principio de separación de poderes sustituyendo con ello la carta política. En su argumentación expone que las normas que se tramiten dentro del procedimiento especial para la paz tienen vocación de ser debatidas y aprobadas por el Congreso como órgano representativo del pueblo y las demás ramas del poder (ejecutivo y judicial) mantienen sus facultades, el Congreso conserva su capacidad de iniciativa legislativa mediante la radicación y validación del proyecto de ley y la Corte no pierde su capacidad de revisión de las normas, pues ostenta la posibilidad de declarar su exequibilidad o inexecutable por medio del control que realiza la Corte Constitucional.</p> <p>Afirma que no existe desbalance al otorgar facultades al Presidente para avalar las modificaciones legislativas a los proyectos presentados por <i>fast track</i> pues con esto se cumple el principio de colaboración armónica entre poderes, que el acto reformativo tiene un límite temático que es la transición hacia la terminación del conflicto y la consolidación de la paz y que el mismo se constituye como un procedimiento: I. Especial, II excepcional (persigue la implementación del acuerdo) III. Transitorio (duración 6 meses) VI. Rápido.</p> <p>En Relación con la constitucionalidad del artículo 3 del acto reformativo demandado aclara que con este el ejecutivo no tiene la potestad de no tiene la posibilidad de crear impuestos, ni cargas tributarias, sino que debe garantizar que se destinen recursos del Presupuesto General de la Nación, durante los próximos 20 años, para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que este derecho es</p>

C-332-2017

la nueva realidad nacional al que se le debe asegurar su estructura funcional y las partidas presupuestales necesarias.

En la defensa del artículo 4 señala del Acto Legislativo 01 de 2016, que incorpora el bloque de constitucionalidad el acuerdo, en su juicio lo eleva a rango constitucional pero no hace parte de la Carta. Con ello: (i) se evita que su contenido sea reformado por el Congreso por medio de actos legislativos posteriores; (ii) las normas expedidas con ocasión del acuerdo deben desarrollar su contenido, incluyendo las que se dicten para cambiar los aspectos generadores del conflicto, en aras de la no repetición y (iii) el acuerdo deberá ser tenido en cuenta como parámetro de interpretación de las normas de su implementación y, por tanto, de su validez. Adicional señala que se prepara un nuevo artículo que solo permite la entrada al bloque de constitucionalidad los apartes del acuerdo que hagan referencia a normas de derecho internacional humanitario y derechos fundamentales definidos en la carta política, no obstante, para el momento aplicará la norma expedida demanda, es decir la integralidad del acuerdo entra al bloque de constitucionalidad.

-Ministro del Interior Juan Fernando Cristo:

Señala en primer lugar que el análisis de constitucionalidad del acto legislativo cuestionado se debe comprender el contexto histórico que lo originó. Que la norma que lo conforman tienen un carácter exclusivamente transitorio y responde a una coyuntura histórica que es la de finalizar el conflicto que solo ha traído violencia, dolor odio a la sociedad colombiana, para ello se debe garantizar una solución estable a través de la adopción de mecanismos extraordinarios y excepcionales.

De otro lado el interviniente hace alusión el Gobierno Nacional confió la legitimidad del acuerdo de paz en la democracia, representada en el máximo órgano del poder legislativo en Colombia y así ha funcionado y fue reconocido ajustado a la Constitución Política, por parte de la Corte Constitucional, en Sentencia C-699 del 2016. Y que la demanda impetrada al Acto Legislativo 01 de 2016 no cumple criterios del control de Constitucionalidad bajo juicio de constitucionalidad, porque además no se ha desdibujado ni desnaturalizado la Constitución 1991.

Alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo:

Puntualiza que el Acto Legislativo No. 01 de 2016, debe entenderse como una serie de garantías para resolver el mencionado problema de sincronización y de urgencia de implementación. De ahí que es necesario acudir al llamado *fast track* que pretende, en primer lugar, garantizar la fidelidad del acuerdo con las leyes que se promulguen posteriormente para desarrollarlo, por ello la reforma constitucional dispone que las proposiciones deben ajustarse al acuerdo y contar con el aval del gobierno y, en segundo término, garantizar un espacio de deliberación, lo cual se ha reflejado en las docenas de propuestas y proposiciones que se han realizado y aceptado en los diferentes debates.

C-332-2017	
	<p>Adicionalmente en relación con el contenido del acto legislativo demandado, sostiene que en el marco de implementación como lo consagró el artículo 3º de dicha reforma, un plan plurianual de inversiones para garantizar la estabilidad en el tiempo de los acuerdos y su cumplimiento, específicamente en su componente territorial y así revertir esa tendencia histórica de desinterés del Estado colombiano por gobernar todo el territorio y garantizar los derechos de todos por igual.</p> <p>Y que con respecto al artículo 4 del acto legislativo cuestionado, advierte que este fue derogado por un acto legislativo posterior que ya fue aprobado por el Congreso y que se encuentra pendiente de sanción presidencial, razón por la cual no es necesario hacer un pronunciamiento de fondo.</p> <p><u>-Vicepresidente del Consejo de Estado:</u></p> <p>Aclara que su posición es de magistrado de la corporación y no de esta en sí; Aclara que el “Procedimiento Especial para la Paz”, contenido en el Acto Legislativo No. 01 de 2016, en la medida en que comporta un sacrificio de los mecanismos deliberativos ordinarios, debe ser entendido como un mecanismo de creación normativa excepcional y transitorio y siempre orientado por un estricto principio de conexidad entre los fines de dicho procedimiento (agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto) y las medidas adoptadas con fundamento en el mismo.</p> <p>También señala que el “Procedimiento Especial para la Paz” debe ser utilizado para aquellas medidas o normas que revistan la necesaria urgencia o premura, de manera que sea imperativo sacrificar los mecanismos ordinarios de deliberación democrática consagrados en nuestra Carta Política. Y que las disposiciones del proceso de implementación del Acuerdo Final deben someterse a los principios que priman en contextos de transición institucional.</p> <p>Adicionalmente advierte que el “<i>fast track</i>” no puede tener una aplicación absoluta, toda vez que se trata de un trámite al que solo pueden ser sometidos los proyectos legislativos que guarden relación directa o sean indispensables para materializar el Acuerdo Final, criterios que deben contar con una motivación seria y suficientemente reforzada, lo cual constituye, precisamente, el límite del “Procedimiento Especial para la Paz”. En otras palabras, si el asunto a tramitar carece de suficiente motivación, no es posible sustituir los mecanismos ordinarios para este tipo de procedimientos.</p> <p>Puntualiza su intervención señalando que en un contexto de transición la expresión “único” debe ser interpretada acorde con la condición general de la cosa juzgada, toda vez que, de esta manera se proporciona la seguridad jurídica necesaria para crear las bases de un escenario de post acuerdo, pues al dar certeza y ser irrefutable al contenido jurídico del Acuerdo Final se origina la legitimidad para exigir a ambas partes el</p>

C-332-2017	
	<p>cumplimiento de lo pactado.</p> <p><u>Intervenciones de organizaciones sociales, universidades y ciudadanos invitados</u></p> <p><u>-Mesa Nacional de Víctimas:</u></p> <p>Sostiene que el acto demandado, no sustituye la Constitución, ni altera su rigidez, sino que cambia una de sus manifestaciones concretas por otra. Se trata de una modificación excepcional, temporal y transitoria. Del contenido del acto reformativo cuestionado se desprende que dicha reforma debe surtirse en comisiones y plenarios de las dos cámaras del Congreso, sólo pueden ser aprobadas por mayoría absoluta, lo cual introduce una exigencia mayor a la que tienen las leyes ordinarias, tiene control automático constitucional y deben ser tramitadas con prioridad. En otros términos, brinda las garantías básicas del trámite legislativo y conserva el control judicial ejercido por otra de las ramas del poder público. Así se cumple el principio de equilibrio de poderes.</p> <p>Finalmente concluyen que El acto legislativo cuestionado no solo garantiza la materialización de lo acordado para reparar integralmente a las víctimas del conflicto, sino que, además le dará una estabilidad jurídica sistemática a sus derechos, permitirá la reincorporación a la vida en sociedad como gran progreso hacia la construcción de una paz estable y duradera, así como la reconciliación y la búsqueda de la verdad, asistencia y reparación de los daños ocurridos en el marco del conflicto armado.</p> <p><u>-Comisión colombiana de Juristas:</u></p> <p>Hace alusión en su intervención que con respecto al control automático y único de constitucionalidad dispuesto en el literal k del artículo 01 del acto legislativo cuestionado, que si se adopta una lectura no restrictiva aclararía el alcance del adjetivo “único”, lo cual habilita a los ciudadanos para que presenten la acción pública de inconstitucionalidad cuando se configure una de las excepciones al principio de cosa juzgada absoluta, tal y como lo ha expuesto de forma extensa y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Destaca que, entenderlo de otro modo, podría configurar una posible vulneración del núcleo esencial de derechos como la participación y el acceso a la justicia constitucional.</p> <p>En relación con las facultades extraordinarias contenidas en los artículos 1 y 2 del acto cuestionado, señalan que el procedimiento especial para la paz contemplado tiene un carácter transitorio y excepcional y que, en consecuencia, no prohíbe la utilización por parte del Congreso de las facultades y procedimientos ordinarios para la implementación de buena fe del Acuerdo Final.</p> <p>En conclusión, estiman que debe realizarse un juicio de</p>

C-332-2017

competencia que tenga el Acuerdo Final como límite material del ejercicio de las facultades concedidas para agilizar la implementación y el desarrollo normativo del mismo, con fundamento en los criterios de conexidad y coherencia con dicho acuerdo.

-Academia Colombiana de Derecho Internacional:

Realizan su análisis más en relación con el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual lo encuentran conforme a la interpretación que se le ha dado al artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra, para ellos el Acuerdo Final para la paz si es un acuerdo especial bajo el derecho internacional humanitario, que produce efectos jurídicos internacionales; Sin embargo no por eso puede ser equiparado a un tratado internacional. Que en este orden de ideas los grupos armados no estatales, si son actores (pero no sujetos de derecho internacional, bajo este contexto las Farc son participantes de derecho internacional por tanto se les reconoce status y facultades jurídicas internacionales.

Consideran que las normas del Acuerdo Final son obligaciones que deben ser cumplidas de buena fe y de acuerdo con el principio *pacta sunt servanda*, pues si bien es cierto que lo no incorporado mediante bloque de constitucionalidad “no entra a ser exigible bajo derecho colombiano, también lo es que bajo derecho internacional todo el Acuerdo Final sí es obligatorio, en tanto Acuerdo Especial de DIH. y concluyen que la incorporación al bloque de constitucionalidad que otorga el artículo 4 del acto legislativo demandado, se trata de una reforma transitoria y restringida que no sustituye el principio de supremacía, pues respeta la jurisprudencia constitucional y crea una “expresión adicional del principio de apertura constitucional, pero no lo menoscaban ni eliminan”.

-Ciudadano Rodrigo Uprimny Yepes:

Señala en primer lugar que no debería realizarse un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte, debido a la ineptitud de la demanda y lo anterior a que esta no cumple el mínimo de requisitos para pronunciarse de fondo, en primer lugar, porque no señala de manera inequívoca cuál es el pilar que sería sustituido; en segundo término, cuál es la norma específica que podría afectar ese pilar y, por último, no señala concretamente en qué la norma demandada sustituye ese pilar.

Acota que la Corte Constitucional se pronunció y justifico los procedimientos especiales para la paz adoptados bajo el Acto Legislativo 01 de 2016, señalando que existen estos procedimientos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y que precisamente para que estos acuerdos sean estables y duraderos, el Estado debe garantizar el cumplimiento de lo pactado, a través de procedimientos especiales y rápidos o, dotando al acuerdo de paz de una cierta fuerza jurídica, lo cual intenta hacer el acto legislativo demandado.

C-332-2017

Que, con respecto a la facultad de aval otorgada al presidente para las modificaciones de los proyectos de ley en materia de implementación normativa del Acuerdo, aduce que el Presidente tiene la competencia de mantener el orden público y firmar acuerdos de paz con grupos insurgentes, pero para garantizar la coherencia de la legislación de implementación con ese acuerdo y para que este se cumpla como fue pactado, es necesario que las modificaciones que se introduzcan, cuenten con el aval del gobierno.

Puntualiza que con respecto al control automático, único y posterior que indica que el acto acusado, tiene una dificultad de interpretación y no de sustitución ya que este si admitiría demandas posteriores solo las evitaría mientras se adelanta el control automático de constitucionalidad, y finalmente con respecto a la naturaleza de acuerdo especial que se le pretende dar al Acuerdo Final para la paz no determina esto su entrada automática al bloque de constitucionalidad "Para que ello ocurra, se requieren otros elementos, como una reforma constitucional o un procedimiento especial, que se pretendió hacer en el artículo 4º que fue derogado por la reforma constitucional que se aprobó, recientemente, en el Congreso".

-Ciudadana Ligia Galvis Ortiz:

Su intervención se caracteriza por establecer un contexto para la interpretación de los convenios ginebra y el papel y obligaciones del Estado colombiano de cara a ello, seguidamente realiza su primera afirmación señalando que con el Acuerdo Final para Poner Fin al Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, las partes contrajeron un compromiso político y jurídico de obligatorio cumplimiento, derivada de los principios universales y, principalmente, del principio *pacta sunt servanda*.

Y finalmente puntualiza que el Acuerdo Final para la paz firmado por el Gobierno y las Farc E.P se constituye como un documento político que desarrolla, más no sustituye la Constitución Política y, en particular, colabora en el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Desde la dimensión internacional el mencionado acuerdo tiene alcance de especial en el marco del artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra y su protocolo adicional dos que lo desarrolla y, en ese sentido, hace parte del bloque de constitucionalidad.

Ciudadano Iván Orozco Abad:

Sugiere en su intervención que las circunstancias de degradación de la legitimidad política de los acuerdos a partir del No al plebiscito –con un bajo triunfo numérico y precario valor moral-, resulta indispensable que la Corte Constitucional, en un ejercicio de contrapeso, reivindique los acuerdos de La Habana y de Bogotá y el principio *pacta sunt servanda*, como parámetro de juzgamiento para estos Acuerdos y como garantía de la seguridad jurídica.

C-332-2017	
	<p>Le solicita a la Corte que no otorgue mayor peso a quienes niegan que en Colombia existió un conflicto armado interno y quieren hacer valer la victoria política del No en el plebiscito de 2016, como una victoria militar del Estado que, a su turno, faculte el desconocimiento del valor como fuente de Derecho y de Seguridad jurídica de los acuerdos de La Habana.</p> <p><u>-Ciudadana Martha Lucia Ramírez</u></p> <p>Para la interviniente existió un vicio de competencia de reforma por parte del congreso, por lo cual los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 sustituyen la constitución ya que el Congreso cede de manera inexplicable sus competencias, renunciando a la representación popular que le fue delegada por parte del constituyente primario en las elecciones de 2014. Destaca que una democracia deliberativa no se puede suplantar por una simple representación o participación formal de los congresistas que se limitan a acoger los proyectos presentados por el gobierno, sin poder incluirles ningún tipo de modificaciones.</p> <p>Puntualiza que las facultades extraordinarias conferidas por el acto legislativo cuestionado, generan en primer lugar, una fractura no solamente en la división de poderes, sino también, en el equilibrio de poderes y, en segundo término, una vulneración de todo el sistema de pesos y contrapesos.</p>
DETALLES Y/O CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA	
TEMAS TRATADOS	<ul style="list-style-type: none"> -Teoría de la sustitución de la constitución -Juicio de Sustitución -Principio de separación de poderes -Cosa Juzgada relativa -Vicio competencial -Principio de equilibrio de poderes -Sustracción material -Autorestricción judicial -Principio Pluralismo jurídico -Principio de autonomía de la rama ejecutiva -Colaboración armónica de los poderes públicos -Facultades de deliberación y decisión.
NORMA (S) DEMANDADA (S)	<p>La Norma demandada es la totalidad del Acto Legislativo No. 01 de 2016 de la cual nos permitimos extraer lo fundamental del mismo y que fue sujeto de pronunciamiento en la sentencia que se estudia.</p> <p>ARTÍCULO 1º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así: Artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto</p>

C-332-2017	
	<p>legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un periodo adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República.</p> <p>El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se regirá por las siguientes reglas:</p> <p>(...)</p> <p>h. Los proyectos de ley y de acto legislativo sólo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional.</p> <p>j. En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación. (...)</p> <p>ARTÍCULO 2º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:</p> <p>Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. (disposición que la Corte no procedió a realizar su análisis ya que los fundamentos y argumentos de los cargos de la demanda no resultaban diferentes a lo que había fallado en sentencia C-699-2016)</p> <p>ARTÍCULO 3º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:</p> <p>Artículo transitorio. Plan de Inversiones para la Paz. El Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales. (...) (artículo que la Corte se abstuvo de emitir pronunciamiento por que la demanda no cumplía con los requisitos suficientes para adelantar el estudio del caso).</p> <p>ARTÍCULO 4º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:</p> <p>Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 (...). (La Corte se inhibe de realizar estudio y pronunciamiento de la referida norma, ya que la misma fue derogada por el Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017)</p>

C-332-2017	
	<p>ARTÍCULO 5º. VIGENCIA. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (La Corte se inhibe de emitir pronunciamiento de este artículo por ineptitud de los cargos formulados contra el artículo).</p>
HECHOS Y ARGUMENTOS JURUICOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA	<p>En términos generales la demanda fundamenta sus cargos en la consideración que el Acto Legislativo 01 de 2016 sustituye la Constitución Política en sus pilares definitorios e inquebrantables como lo son la separación y el equilibrio de poderes.</p> <p>Con respecto al artículo 1 del acto legislativo en comento, señalan que este quebranta el procedimiento de reformas constitucionales al reducir el número de debates a la mitad de ocho a cuatro y las vueltas que se deben surtir a una equiparando dicho procedimiento al de expedición de normas ordinarias. Por tanto, dicho mecanismo <i>fast track</i> sustituye el artículo 375 de la Constitución Política ya que cambia sus elementos estructurales en contra del constituyente primario.</p> <p>Indican de manera adicional que el “<i>fast track</i>” le permite al Congreso de la República (i) dar un golpe de estado constitucional, (ii) abusar de su poder como constituyente derivado y (iii) crear normas constitucionales sin procedimientos ortodoxos reglados, desconociendo los núcleos y pilares fundamentales de la Constitución Política.</p> <p>Señalan que los literales h) y j) del artículo primero desconocen los principios de separación y equilibrio de poderes, toda vez que le permiten a la Rama Ejecutiva inmiscuirse en los asuntos del Legislativo, al supeditar la potestad reformadora de la Constitución de este último a un aval del ejecutivo, limitando, de esta forma, las capacidades de reforma constitucional de la Rama Legislativa.</p> <p>También argumentan que la separación de poderes es un elemento trascendental que está consagrado en el artículo 113 de la constitución política y que los “diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Con fundamento en este precepto sostienen que el acto cuestionado obstruye el poder de reforma constitucional otorgado al Congreso de la República, rompe el orden constitucional y sustituye la Carta Política.</p> <p>Con respecto al literal k del mismo artículo 1 del acto legislativo acusado, advierte que este limita de forma desproporcionada del poder judicial, al establecer que la Corte Constitucional ejercerá un control único de constitucionalidad sobre los proyectos de ley tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, lo cual desconoce los principios de autonomía de la Rama Judicial y de separación y equilibrio de poderes. Ya que conforme a la jurisprudencia de la corte el principio de autonomía e independendencia del poder judicial es una de las expresiones de la separación de</p>

C-332-2017	
	<p>poderes.</p> <p>Puntualizan que el referido literal que integra la reforma demandada al establecer un control único de constitucionalidad, desconoce el espíritu de la Constitución e impide que la Corte Constitucional revise los elementos del acto legislativo que no han sido sometidos al efecto de cosa juzgada.</p> <p>En relación con el artículo 2 del acto legislativo acusado, los demandantes señalan que este sustituye el artículo 150-10 de la constitución ya que cualquier facultad extraordinaria que se le confiera al Presidente de la República deben contar con la aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras del Senado. A juicio de los demandantes la sustitución radica en que el precepto demandado le da unas facultades al ejecutivo que reemplazan la función legislativa del Congreso, sin la correspondiente autorización previa, rompiendo el equilibrio de poderes.</p> <p>Con respecto al artículo 3 del acto legislativo acusado, los actores afirman que este desconoce los artículos 113, 338 y 345 de la carta política, ya que le permite al gobierno realizar los ajustes institucionales y normativos para poner en ejecución el componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones otorgándole así capacidad de crear y modificar impuestos y/o generar gasto público. Para ellos estas facultades estaban reservadas para el congreso de la república, asamblea y concejos que al concentrarse en el ejecutivo implica la ruptura de separación de poderes y en concreto los principios base de la hacienda pública y la tributación.</p> <p>El artículo 4 del acto reformativo, para la parte demandante quebranta el artículo 93 de la Constitución Política, al asimilar el acuerdo final para la terminación del conflicto a un acuerdo especial, en los términos del artículo 3º de los Convenios de Ginebra, así como al incorporarlo al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Lo anterior, sin tener en cuenta que la Carta Política establece taxativamente que instrumentos forman parte del mencionado bloque, al igual que delimita los sujetos de derecho internacional que pueden suscribir los tratados o normas que ingresan al indicado bloque normativo.</p> <p>Consideran que el bloque de constitucionalidad constituye un elemento esencial de la Constitución Política y que, por lo tanto, al incluir dentro del mismo un acuerdo o documento celebrado con un grupo subversivo calificado como terrorista, se sustituyó la Constitución Política, pues ese acuerdo no corresponde a un tratado internacional humanitario de derechos humanos, ni a una convención del trabajo, ni a ningún otro tipo de norma internacional que sea admisible dentro de dicho bloque. Por otra parte, los demandantes puntualizan señalando que el Congreso de la República, al incluir el mencionado acuerdo en el bloque de constitucionalidad, se atribuyó funciones del constituyente primario.</p>

C-332-2017	
	<p>Y finalmente los cargos del artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2016, están orientados a señalar que este quebranta el artículo 374 constitucional, ya que dicha reforma rige a partir de la refrendación popular del acuerdo, pues, posteriormente, se determinó, mediante Ley 1806 de 2016, que el mecanismo de participación utilizado sería el plebiscito, es decir, que la reforma dependerá de su resultado, lo que equivale a reformar la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto dicha norma prevé que la Carta Política sólo podrá ser reformada “por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo”.</p> <p>Nota: El artículo 4 del acto legislativo demandado, también fue demandado por vicios de procedimiento en su formación, los cargos de la demanda precisamente señalan que el congreso incurrió en vicios formales, toda vez que se vulneraron el principio de consecutividad, los artículos 157, 160 y 241-numeral 1° de la Constitución Política y los artículos 224, 225 y 226 de la Ley 5 de 1992, al introducir, en el último y el penúltimo debate, un eje temático que había sido negado, en dos oportunidades, y que luego no fue debatido en el trámite legislativo.</p>
NORMAS JURIDICAS Y JURISPRUDENCIA APLICADA AL CASO	<p>Constitución -Artículo 241 CN -Artículo 376 CN -Artículo 379 CN</p> <p>Sentencias -C-1200-2003 -C-551-2003 -C-293-2007 -C-577-2014 -C-379-2016 -C-222-1997 -C-044-2015</p>
PROBLEMA JURIDICO GENERICO C.C	¿Son exequibles o inexecutable los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Acto Legislativo 01 de 2016 en virtud de los planteamientos realizados en la demanda de constitucionalidad presentada y su análisis frente a los preceptos de la Constitución Política?
TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTOS DE LA DECISIÓN	
PROBLEMA JURIDICO (RESUELTO POR LA CORTE)	¿Con la expedición de los literales h (aval gobierno para la introducción de modificaciones a los proyectos de ley y acto legislativo que implementan el acuerdo de paz) y j (votación en bloque de los proyectos de ley y actos reformativos que implementan el acuerdo de paz) del artículo 1 del acto legislativo para la paz 01 de 2016 relacionado con el procedimiento especial para la paz, el Congreso de la República incurrió en vicio de competencia al sustituir ejes axiales de la constitución política tales como la separación y equilibrio de poderes?
3.2 RATIO DECIDENDI	Los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016 conforme quedaron estipulados sustituyen eje axial definitorio de la constitución de separación y equilibrio de poderes públicos, en el entendido en que los componentes de la función

C-332-2017	
	<p>legislativa de deliberación y la facultad de adoptar decisiones a partir del referido proceso público y pluralista son inaplicados por parte del legislativo en aras de otorgar facultades de aval al presidente de la república frente a la modificación de los proyectos de acto legislativos y de ley ampliando y fortaleciendo con esto el poder conferido al ejecutivo, lo que altera gravemente la autonomía de la rama legislativa que es uno de los componentes esenciales de los elementos definitorios de la constitución sustituidos.</p> <p>En palabras concretas de la Corte con estos literales se sustituye el principio de separación de poderes, porque comporta una supresión de la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso en materias que de manera originaria le han sido atribuidas por la Constitución, a partir del carácter definitorio de la labor de configuración política del Estado, tanto en asuntos legales como de reforma constitucional, pues la capacidad de determinar los contenidos normativos se transfiere al ejecutivo, como consecuencia del conjunto de restricciones previstas en los actos normativos demandados.</p> <p>Adicional a lo anterior, el literal J acusado trae como consecuencia práctica la posibilidad que se pueda eludir el debate de las materias y temas del acuerdo final que buscan ser implementados, aunado a esto impide la genuina expresión del voto de los congresistas</p> <p>Ya que impide la posibilidad de expresar desacuerdos parciales sobre lo que pueda debatirse, lo que ocasiona que no exista una debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras respecto de un tema amplio y altamente significativo para la vida democrática del país, lo que finalmente repercute directamente en la autonomía del legislativo, que sustituye el principio de separación de poderes, el cual lleva implícito la autonomía e independencia de cada uno de ellos.</p>
OBITER DICTA	<p>-“(…) la Corte ha concluido que reformas constitucionales que contienen instrumentos propios de la justicia transicional, no sustituyen por ese solo hecho elementos definitorios de la Carta Política, incluso si a través de ellos se establecen herramientas excepcionales y transitorias, las cuales no resultarían aplicables en períodos ordinarios de institucionalidad”.</p> <p>-El hecho de que el Presidente de la República sea la autoridad que por sus competencias este llamado a firmar el acuerdo final de paz, no implica esto que sea el único poder constituido sobre el que recae la obligación de adelantar acciones tendientes a la consecución de la paz, es más lo anterior resultaría un imposible en el estado colombiano fundado sobre el principio de división de poderes y la colaboración armónica de las ramas del poder público.</p> <p>-Las funciones que emanan del principio de separación de poderes y dadas a los órganos de poder público, se cumplen a partir de un arreglo institucional que mantenga contenidos los poderes públicos, de modo que ninguno esté en la posibilidad de vaciar de contenido las facultades y</p>

C-332-2017

competencias de otro, objetivos que se satisfacen a través de un sistema de controles inter orgánicos que hagan efectivos los frenos y contrapesos entre ellos.

- Una enmienda constitucional que varíe la configuración constitucional de la separación de poderes por ese simple hecho no se considera inconstitucional, es decir por su sola incidencia en ese principio. Para que ello suceda, debe acreditarse que la enmienda constitucional tuvo una entidad tal que vació de contenido las competencias de uno de los poderes públicos, a través de la intromisión indebida de una de las ramas en la otra.

- El Congreso de la República, así como el Presidente tienen origen democrático directo y éste tiene las funciones propias de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y de Suprema Autoridad Administrativa, entonces su capacidad institucional es sustantivamente superior a la de los demás poderes públicos. Por ende, aunque son *prima facie* admisibles reformas constitucionales que amplíen el poder gubernamental, las mismas deben ser compatibles con la integridad del principio de separación e independencia entre los poderes públicos, el cual sería sustituido cuando la configuración institucional resultante luego de la reforma constitucional, se muestre desbalanceada al punto tal que el peso específico del ejecutivo anule o impida el ejercicio efectivo de las competencias originarias de las demás ramas del poder.

-La amplitud de las facultades de la rama legislativa obedece a su condición de depositaria de la representación democrática del pueblo, por tanto, es titular de la soberanía que fundamenta el ejercicio del poder público, es por esto que se confía en el Congreso de la República la competencia originaria para la definición de un orden jurídico, por tanto, esta investido de legitimidad para imponer con carácter general reglas jurídicas con carácter vinculante.

- La posibilidad de deliberación de las iniciativas es un presupuesto para el pluralismo político y el respeto por el derecho de las minorías, lo anterior en el entendido que la deliberación política es el escenario más incluyente en términos de exposición de las diferentes posturas y, por lo mismo, el que mejor asegura los propósitos del pluralismo y la participación. Por lo tanto, no resultan *prima facie* admisibles las modificaciones que anulen la capacidad deliberativa del Congreso, puesto que ello desconocería los dos elementos que, desde la perspectiva analizada, configuran el núcleo mínimo de la función legislativa, esto es, la posibilidad de deliberación y la competencia de adopción de decisiones que permitan la configuración política del Estado, en el nivel legal y en el escenario de las normas constitucionales.

- El Acuerdo Final, en tanto acto político, requiere la labor de implementación normativa, la cual está a cargo de manera preferente en el Congreso, quien (i) tiene la competencia constitucional originaria para la producción normativa; y (ii) está revestido del mandato democrático representativo, lo que les otorga plena legitimidad a sus actividades de deliberación

C-332-2017	
	<p>y decisión, en lo que atañe al ejercicio de la cláusula general de competencia legislativa.</p> <p>- La sustitución del eje estructural de la separación de poderes, expresado en la autonomía del Congreso, radica en el hecho que se impone la votación en bloque al margen de cualquier decisión que adopten las cámaras sobre ese particular y a través de una transferencia excesiva de competencias al poder presidencial, quien no solo negoció el acuerdo de paz con las FARC EP, sin intervención de los otros poderes públicos, sino que al mismo tiempo tiene la prerrogativa de reserva de iniciativa legislativa, aunado a que también ejerce la autorización exclusiva para las modificaciones al proyecto mediante el mecanismo de los avales. Estas funciones, sumadas a la reducción de la posibilidad misma de la discusión del articulado provocan, sin duda, un profundo desequilibrio entre las competencias gubernamentales y del poder legislativo, en lo que respecta a la aplicación del procedimiento legislativo especial.</p> <p>-La validez del voto en bloque viene condicionada a que ese mecanismo no haya sido utilizado con el fin de provocar la elusión al debate, en perjuicio del ejercicio de la competencia de oportunidad de deliberación, definitoria de la función legislativa. Elusión al debate que se presenta cuando las cámaras ejercen maniobras tendientes a evitar que los congresistas cuenten con la oportunidad de discutir la iniciativa.</p>
METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO	<p>Juicio de Sustitución por posible vicio de competencia del congreso de la republica al expedir actos legislativos, para ello es preciso identificar dos premisas y extraer la conclusión, la <i>premisa mayor</i> en la cual se debe identificar los elementos definitorios de identidad de la constitución objeto de controversia, esta premisa debe caracterizarse por ser: a) expresa y clara, b) fundamentarse en diversos referentes normativos que determinen su especificidad en la carta política, c) esencial de la identidad de la constitución y d) no equivaler a la fijación de límites materiales intocables por el poder de reforma; en cuanto a la <i>premisa menor</i> las características de la enmienda producida por el órgano constituido y su alcance en torno al elemento definitorio de la identidad de la constitución que se estudian; al comparar estas dos premisas arrojará una <i>conclusión</i>.</p> <p>Lo anterior haciendo referencia en primera instancia al principio de autorestricción judicial, ya que la utilización de este minimiza los riesgos de una inadecuada aplicación de la sustitución que puede conllevar a la petrificación de la Carta Política.</p>
DECISIÓN EN CONCRETO	<p>PRIMERO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento sobre el literal k) del artículo 1º, el artículo 3º y el artículo 5º del Acto Legislativo No. 01 de 2016, por ineptitud de la demanda.</p> <p>SEGUNDO: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-699 de 2016 en relación con el cargo dirigido contra el literal f) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016.</p> <p>TERCERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-</p>

C-332-2017	
	<p>699 de 2016 en relación con el cargo formulado contra el artículo 2º del Acto Legislativo No. 01 de 2016.</p> <p>CUARTO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento en relación con el artículo 4º del Acto Legislativo No. 01 de 2016 por las razones expuestas en esta providencia.</p> <p>QUINTO: DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de los literales h) y j) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016.</p>
SALVAMENTO DE VOTO	<p>Magistrado Alberto Rojas Ríos:</p> <p>El cual realiza salvamento de voto parcial de la decisión adoptada en sala plena con respecto a la declaración de inexequibilidad de los literales h y j del artículo primero del acto legislativo 01 de 2016, basado en los siguientes argumentos:</p> <p>Señala que es un test de sustitución de la constitución es complejo porque entran en colisión diferentes competencias, aún más lo es en un contexto de justicia transicional debido al peso significativo que adquiere la paz, es su calidad de valor, principio y derecho fundamental, por tanto, en estos escenarios el juez constitucional debe tomar en consideración el contexto histórico en el cual fue adoptada una determinada enmienda a la Carta Política, al igual que los fines y propósitos perseguidos con aquélla. Correlativamente, el principio de la autocontención judicial (<i>principio del self-restraint</i>), cobra una mayor importancia.</p> <p>Acota además en los controles de constitucionalidad por vicios de competencia habrá una tensión entre el principio democrático y la necesidad de adecuar el texto normativo superior a las cambiantes realidades económicas, sociales, políticas y culturales de una sociedad; y por la otra, la exigencia de preservar la esencia de lo que constituye uno de los mayores valores de nuestra civilización occidental: la construcción de un Estado Social de Derecho fundado sobre el respeto por la dignidad humana, los derechos fundamentales y la consecución de la paz.</p> <p>Señala que la aplicación de un test de sustitución estricto no resulta plausible al momento de examinar la validez de reformas constitucionales referentes a instrumentos de justicia transicional. Lo anterior por cuanto la evaluación de medidas extraordinarias y transitorias, destinadas a superar una situación de conflicto armado interno, evidencia la existencia de fuertes tensiones entre algunos ejes definitorios la Constitución de 1991. De tal suerte que la consecución de la paz, en tanto que principio, valor y derecho fundamental, puede justificar un cierto grado de limitación pasajera de algún eje definitorio, lo cual resultaría inadmisibles en tiempos de normalidad. Por tanto, el juez tendrá que revisar si el instrumento de justicia transicional persigue la consecución de un fin legítimo (materialización de la paz) y si dicha medida es idónea y necesaria para ello, aunque con esto se pueda afectar otros ejes definitorios de la carta política.</p> <p>Señala que el control de constitucionalidad por vicios de competencia exige que los jueces den aplicabilidad al principio de autocontención, con la finalidad que la constitución pueda</p>

C-332-2017	
	<p>ajustarse a los cambios sociales, políticos, económicos o culturales, que se acuda a otras vías extra constitucionales para reformar la constitución o que pueda entenderse que el juicio de sustitución es un control material o político de las reformas constitucionales. Por esto concluye que las reformas constitucionales que versen sobre instrumentos transicionales, el juez constitucional debe acatar el principio de la autocontención. De allí que su intervención se torne realmente excepcional.</p> <p>En cuanto a la facultad de aval previo para modificación de proyectos en el marco de la transición a la paz conferida al presidente de la República, determina que no es una figura ajena al constitucionalismo colombiano, que si bien configura una medida que impone ciertas restricciones transitorias a determinados contenidos de un eje definitorio de la Constitución de 1991, como lo es la separación de poderes, también lo es que logra superar con creces un test de razonabilidad. En su intervención hace un análisis de su finalidad, idoneidad y necesidad encontrándola ajustada ya que esta se ciñe a garantizar la vigencia de la paz entendida como valor, derecho y principio; así como la materialización de las facultades constitucionales consagradas al Presidente de la República; por tanto la figura del aval del Gobierno Nacional, prevista en el literal h) del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2016 superaba un test de sustitución, como quiera que no configura un vaciamiento de las competencias del Congreso de la República ni una supresión de los principios de separación de poderes públicos y del carácter deliberativo y decisorio de aquél.</p> <p>En cuanto a la votación en bloque de los proyectos de reforma constitucional y de ley que permiten la implementación del acuerdo final para la paz, en su análisis persigue fines constitucionalmente validos que son: a) Garantizar la vigencia de la paz, en tanto que valor, principio y derecho fundamental; b) Asegurar que las normas de implementación del Acuerdo Final sean adoptadas e implementadas con la celeridad necesaria, permitiendo así preservar la confianza entre las partes.</p> <p>Por lo que concluye que la votación en bloque de los proyectos tramitados por la vía del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz no desnaturaliza el ejercicio de la función legislativa ni sustituye eje fundamental alguno de la Constitución de 1991. y que los avales gubernamentales y la votación en bloque no son procedimientos ajenos a la función legislativa diseñada originalmente por el constituyente de 1991.</p> <p>Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo:</p> <p>Se aparta parcialmente de la decisión adoptada en sala plena de la Corte constitucional en razón a que : I) se declararon inexecutable reglas del procedimiento legislativo especial contra las cuales no se formularon cargos en la demanda; II) se desconoció el precedente sobre sustitución de la Constitución, incurriendo en un control material de la reforma;</p>

C-332-2017

III) se desconoció la naturaleza excepcional de la reforma, la cual se encuentra inmersa “en un contexto de transición hacia la terminación del conflicto armado y la consecución de la paz”, y IV) el procedimiento legislativo especial no afecta el principio de separación de poderes.

I) Con respecto a la exequibilidad de los literales h) y j) el magistrado señala que la Corte debió ser más rigurosa con respecto a lo que solicitaban los demandantes, ya que en su criterio se extralimitaron en interpretar lo solicitado por los demandantes, de hecho, considera que la normas guardaban sentido por si solas de solo haberse declarado inexecutable la palabra aval ya que este es un precepto distinto, cuyo alcance no depende de las restantes proposiciones jurídicas completas que el Congreso incorporó en los citados literales, de hecho hace alusión jurisprudencia de la Corte constitucional en la que se establece que al control de los actos legislativos se opone en principio a una interpretación extensiva o analógica de las causales de la integración normativa , pues existiría exceso a los límites de la demanda.

Por tanto, concluye que la palabra aval de la disposición declarada inexecutable gozaba de autonomía como proposición jurídica completa, en consecuencia, apta para adelantar sobre ella el control de constitucionalidad, y por tratarse de una demanda fundada en una eventual sustitución de la Carta, cuyo análisis debe ser estricto y no puede extenderse a asuntos diferentes de los que son objeto de la acusación. Termina juzgando la posición de la sala plena de la Corte refiriéndose a ella como contradictoria con respecto a las decisiones proferidas en la sentencia C-699-2016, contradicción que se evidencia con la absoluta falta de motivación para esa declaración de inconstitucionalidad, aspecto este que se añade a la ausencia de cuestionamiento en la demanda, la cual contiene cargos contra otras disposiciones respecto de los cuales, pese a haberse argumentado con mayor amplitud, la Corte se inhibió “por ineptitud de la demanda”.

II) En primer lugar señala que la decisión de inconstitucionalidad adoptada por la sala plena de la Corte tiene un alto grado de abstracción de un eje axial de la constitución y es su único fundamento y basada en consideraciones aisladas y con notable de y con notable desconocimiento de la unidad de la Constitución y de su obligada lectura sistemática, tan relevante cuando se trata de verificar si a propósito de una reforma constitucional se ha cambiado la Constitución o alguno de sus ejes axiales por otro completamente opuesto.

III) Era oportuno en la providencia de la Corte realizar un análisis del contexto en el que se realizaba la reforma cuestionada, es decir los antecedentes existentes y la preponderancia de la paz en la carta política de 1991, no obstante, la sala plena prefirió tomar como premisa mayor el principio de separación de poderes y, en especial, las capacidades deliberativas y decisorias del Congreso de la República, acometiendo así un ejercicio totalmente

C-332-2017	
	<p>descontextualizado que no toma en consideración la situación excepcionalísima implicada en el hecho de procurar la terminación de un conflicto armado de más de 50 años y, al mismo tiempo, desconociendo el precedente contenido en la sentencia C-699 de 2016.</p> <p>También sostiene el magistrado que la Corte parte del supuesto equivocado de que en materia de implementación de acuerdos de paz todo está dicho, sin que se necesite crear nada. Se debió analizar que la implementación del acuerdo final para la paz no tiene un solo referente exclusivo como lo es la justicia transicional aun cuando esta es especial y tiene singular relevancia, en palabras del magistrado, la justicia transicional, por sí sola, no aporta todos los elementos indispensables para la indispensable contextualización del análisis que lamentablemente la mayoría desechó.</p> <p>IV) Parte señalando que la interpretación que realiza la parte mayoritaria de los magistrados del principio de separación de poderes es restrictiva, ya que limita a que las funciones realizadas por cada órgano de poder solo las pueda realizar la referida rama afectado con ello el principio de colaboración armónica de los poderes públicos, que siempre ha permitido flexibilizar el principio de separación de poderes.</p> <p>Por tanto, cuando la mayoría aísla al Congreso de la República en aras de otorgarle facultades de deliberación y decisión que no pueden ser obstaculizadas por el gobierno genera con respecto al principio de separación de poderes, su rigidez que no fue contemplado por el constituyente, omite la colaboración recíproca y armónica entre las ramas del poder público y las relaciones indispensables para el cumplimiento de sus funciones, así como descarta la participación del ejecutivo en complemento con la función legislativa y en razón al mandato constitucional de mantener el orden público.</p> <p>Por tanto, para el magistrado, el Aval del gobierno, como la iniciativa en materia de leyes y de actos legislativos, es un indiscutible mecanismo de colaboración recíproca entre los poderes y de adecuada participación del Ejecutivo en las labores del Legislativo, pues el Gobierno que suscribió el Acuerdo Final lo conoce y, por ello, está en óptimas condiciones para ilustrar al Congreso en una tarea de implementación que debe atender el criterio de fidelidad a lo pactado. En consecuencia, es preciso hacer claridad que resulta exagerado concluir que el aval propicia la concentración de funciones estatales en el ejecutivo, o que esta rama queda a salvo de cualquier modalidad de control a causa del mentado aval.</p> <p>Por tanto, concluye que los argumentos “de la posición mayoritaria son incorrectos, por cuanto los enunciados normativos declarados inexecutable no incluyen mecanismos que sustituyan la Constitución Política de cara a los principios de deliberación legislativa y separación de poderes. Por el contrario, estos mecanismos (i) no desnaturalizan la capacidad del Legislativo para introducir modificaciones a los proyectos de ley y actos legislativos, (ii) no privan al órgano</p>

C-332-2017	
	<p>legislativo de espacios esenciales de deliberación y decisión, y (iii) no subordinan al Congreso al Ejecutivo en el trámite legislativo especial”.</p> <p>Magistrado Alejandro Linares Cantillo:</p> <p>En su salvamento de voto señala que se aparta parcialmente de la decisión adoptada por la Corte, ya que en su criterio debieron haberse declarado exequibles los literales h y j del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016. Critica la utilización del juicio de sustitución ya que en su concepto este debe ser usado de forma excepcional y el mismo debe ser usado con especial prudencia y autorestricción. Por tanto, señala que la Corte Constitucional no debe actuar “como un contrapoder político, sino en la forma y sujeción procedimental de un control judicial”.</p> <p>En cuanto al juicio de sustitución en contextos de transición, señala que el juez constitucional debe actuar con modestia, lo cual no ocurrió en la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la que se aplica juicio de sustitución “con tal rigidez que mengua de manera desmedida el poder de reforma constitucional, impidiéndole introducir las reformas sustanciales que podrían en ciertos casos excepcionales resultar necesarias en contextos de transición.”</p> <p>En sus argumentos no comparte la postura asumida por la mayoría de la sala en esta decisión, de que instituciones como el aval previo y el voto en bloque desfiguran por completo el principio de separación de poderes es una valoración del juez incomprensible; aún más cuando en la misma decisión mencionan que estos mecanismos se encuentran contemplados en la carta política, por lo que se hace difícil afirmar que su introducción en el procedimiento legislativo del Acto Legislativo 01 de 2016 sea sustitución de la Constitución, “máxime cuando fueron aprobados para un tema específico, con una duración de tiempo determinada y, en todo caso, las normas aprobadas por esta vía se encuentran sujetas al control automático de la Corte Constitucional”.</p>
ACLARACIÓN DE VOTO	No hubo aclaraciones por parte de los magistrados que constituyeron sala.
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL	
COMENTARIO DE LA DECISIÓN	<p>La decisión adoptada por la Corte constitucional con respecto a la constitucionalidad del acto legislativo 01 de 2016, señalamos que se comparte en gran parte de la parte resolutive adoptada.</p> <p>Se considera que la Corte con respecto del artículo 1 y sus literales de la norma acusada, debió declararse inhibida para pronunciarse ya que los argumentos esgrimidos en los cargos de la demanda era ineptos, pues los mismos no eran suficientes, claros, ciertos y pertinentes para iniciar un análisis en base a una posible inconstitucionalidad y menos usar el juicio de sustitución de la constitución el cual debe aplicarse de forma restrictiva y conforme a los parámetros establecidos</p>

C-332-2017	
	<p>por la jurisprudencia de la mencionada corporación al respecto.</p> <p>Ahora bien en la sentencia se afirma en su parte motiva que las enmiendas constitucionales que desarrollan mecanismos de justicia transicional no son in genere sustituciones a la constitución, es decir las reformas constitucionales que contienen instrumentos de justicia transicional, no por ese solo hecho sustituyen elementos axiales de la carta política, de hecho se mencionan que se puede establecer herramientas excepcionales y transitorias que no resultarían aplicables en periodos ordinarios de institucionalidad, por tanto al hacer esta aseveración se pensaría que esta justificaría o sería el sustento decretar la constitucionalidad del artículo 01 de Acto Legislativo para la paz, pero por el contrario lo que argumentó a lo largo de la sentencia fue una excepción a lo afirmado es decir, que a pesar de la reforma constitucional se expida en periodo de transición y que la paz sea un fin primordial del estado conforme a lo establecido en la constitución, dicha enmienda no podría desconocer el principio de separación de poderes y colaboración armónica de poderes entre las ramas del poder público.</p> <p>Es importante señalar que no consideramos pertinente la justificación que realiza la Corte a las demás normas del ordenamiento constitucional que determinan aval del gobierno para su expedición, ya que si estableció que el literal h del Acto Legislativo 01 de 2016 sustituía ejes axiales de la constitución como separación de poderes por atentar contra uno de los elementos de la función legislativa como es su autonomía y con ella su capacidad de deliberación y decisión, este debía tener un tratamiento igual para todas las normas y no esgrimir motivos porque unas si son constitucionales y otras no.</p> <p>Argumentando que para las normas ya establecidas en el ordenamiento constitucional eran facultades dadas por el constituyente primario, para temas específicos y concretos, y que el legislativo mantenía con ellas sus funciones legislativas de deliberación, lo que generó en nuestra apreciación una distinción y tratamiento restrictiva con respecto a la norma demanda ya que en particular la misma hace uso de una figura establecida en el ordenamiento jurídico y para temas concretos como lo es el Acuerdo Final de paz.</p> <p>Finalmente señalar que la Corte Constitucional en el juicio de sustitución que adelantó en la sentencia, no fue rigurosa al realizar los pasos que se requieren para el mismo ya que implícitamente en la premisa menor concluye y razona por que las normas sustituyen elementos estructurales identitarios de la constitución, sin decantarlo propiamente en un capítulo aparte, después de haber dilucidado su premisa mayor y menor.</p>

1.3 C-630-2017

C-630-2017	
TIPO DE PROCESO QUE GENERA SENTENCIA	REVISIÓN CONSTITUCIONAL AUTOMÁTICA DE ACTO LEGISLATIVO
FECHA DE LA SENTENCIA	11 de octubre de 2017
MAGISTRADO (A) PONENTE	Antonio José Lizarazo Ocampo Luis Guillermo Guerrero Pérez
MAGISTRADOS QUE CONFORMARON SALA	Sala Plena
MAGISTRADOS QUE ACLARAN VOTO	Diana Fajardo Rivera José Fernando Reyes Cuartas
MAGISTRADOS QUE SALVAN VOTO	No hubo salvamento de voto por parte de los magistrados que conforman la Sala.
ACTOR O DEMANDANTE INTERVINIENTES	No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> - Secretaría jurídica de la Presidencia de la República - Universidad Externado de Colombia - Universidad Sergio Arboleda - Universidad Santo Tomás de Bogotá - Universidad Libre de Bogotá - Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia - Comisión Colombiana de Juristas - Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Corporación Jurídica Yira Castro - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Organización Ruta Pacífica de las Mujeres - Ciudadanos Marta Lucía Ramírez de Rincón, Camilo Jaimes, Camilo Bautista y Felipe Ortegón - Ciudadanos Julián Carrero, Laura Sofía Zambrano, José Elías Turizo y Rafael Alejandro Mendoza. - Ciudadano Luis Jaime Salgar Vegalara - Ciudadano Carlos José Lasprilla Villalobos <p>Intervenciones ciudadanas extemporáneas - Con posterioridad a la fecha de registro del proyecto de fallo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciudadanos Juan Pablo Acosta Peñaloza y Karen Daniela Rosero Narváez - Ciudadanos Fabio Enrique Pulido Ortiz y José Miguel Rueda Vásquez
A FAVOR DE LA EXEQUIBILIDAD NORMA DEMANDADA	<p><u>Secretaría jurídica de la Presidencia de la República</u></p> <p>En primer lugar, señala que la enmienda constitucional objeto de estudio guarda conexidad estricta con el acuerdo, ya que desarrolla uno de los puntos incorporados al acuerdo, es decir la introducción de un artículo transitorio en la constitución con el propósito de facilitar y asegurar la implementación del mismo.</p> <p>Que en la expedición del Acto Legislativo 02 de 2017 se surtieron cada una de las etapas establecidas por el procedimiento especial para la paz en materia de reforma constitucional.</p>

C-630-2017

Señala que el Acuerdo Final al tener carácter de político en principio solo vincularían al Presidente de la República y al ejecutivo central, por tanto, resulta razonable extenderla a las demás instituciones y autoridades del Estado en aras de construir una paz estable y duradera, esfuerzo que debe ser un compromiso del Estado en conjunto y no solo del ejecutivo central.

Con respecto al inciso segundo del artículo 1 del acto reformatorio objeto de control determina que la ausencia de referencia expresa a la observancia de la Constitución en esta disposición: “i) no resta supremacía al texto fundamental; ii) no amplía la fuerza normativa del Acuerdo, sino que, antes por el contrario, iii) reconoce el lugar prevalente de la Carta en el sistema de fuentes, así como iv) la naturaleza política del Acuerdo Final, que hace necesario elevar a rango normativo algunos de sus contenidos, como parámetros vinculantes de interpretación para el desarrollo normativo necesario para la implementación”.

Universidad Externado de Colombia:

No se realiza un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad de la norma bajo estudio, sino que se orienta a señalar si esta sustituye o no la carta política, así las cosas, señala que el ordenamiento jurídico colombiano atraviesa un constitucionalismo transicional, lo que genera ajustes al juicio de sustitución clásico, por lo que se requiere que los ejes definitorios se flexibilicen con la inclusión al sistema de fuentes del derecho de las normas constitucionales transitorias, lo que permite la consolidación de la paz como aspiración constitucional obligatoria y esencial de cara al momento histórico por el que atraviesa el país.

Por tanto, concluye que la Corte para el estudio del acto legislativo cuestionado aplique un juicio de sustitución transicional, ya que el clásico no brinda garantías al sistema constitucional transicional. puntualiza intervención señalando que el citado acto reformatorio no sustituye la constitución.

Universidad Santo Tomas:

En su intervención hacen la defensa de la constitucionalidad del acto legislativo objeto de control, señalan que este “satisface plenamente los *límites formales* impuestos por el procedimiento legislativo especial para la paz para su aprobación, así como el *criterio de conexidad*, en la medida en que la reforma tiene por objeto y finalidad mediata e inmediata facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final, ya que fija como parámetro de interpretación de las normas y las leyes que se expidan para tales efectos, los contenidos, los compromisos y el espíritu de dicho acuerdo”. Y adicional el mismo preserva los principios de buena fe y confianza legítima, garantía para los ciudadanos de que se dará cumplimiento con lo pactado.

Universidad Libre de Bogotá:

C-630-2017

Defiende la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, en el entendido que esta norma se constituye como un mandato que permite materializar la exigencia de construcción de la Paz, entendida no como una política de gobierno sino de Estado, que para cuya realización requiere de la colaboración armónica entre los poderes públicos, en un contexto de justicia transicional.

Centro de Estudios de derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia:

Como primer punto sostienen que el Acto Legislativo 02 de 2017, contiene una formula materializada en disposición constitucional de carácter temporal, que dota al Acuerdo Final de validez jurídica que se requiere, para que en un periodo de 12 años el referido pacto de paz sea implementado y evita que se pueda introducir contenidos extraños a la Constitución y por lo tanto sustituir alguno de los elementos definitorios. Seguidamente afirman que el congreso no excedió sus límites competenciales al expedir el referido acto ya que cumple con el criterio de finalidad (dotar de seguridad y fuerza jurídica necesaria a contenidos del acuerdo, proceso transicional avance, y se den las garantías de cumplimiento y fin del conflicto), criterio de conexidad (vínculo directo con el acuerdo Final, desarrollo de puntos específicos).

Proponen en su argumentación que la Corte Constitucional debe adelantar un segundo juicio de competencia doblemente ponderado, por lo que señalan que deberá realizar un juicio en primer nivel en el que se verifique que la norma controlada no contradice los contenidos del Acuerdo Final si no que corresponde a un desarrollo razonable del mismo y en el segundo nivel se deberá efectuar un juicio de sustitución en el que la Corte analice el acto reformativo ponderando el pilar fundamental de *la búsqueda de la paz* con los otros pilares que puedan llegar a ser impactados con la reforma constitucional que esté siendo analizada.

En cuanto al análisis de la premisa menor, que es el alcance del acto reformativo y los intervinientes la caracterizan señalando que *“le confiere por un tiempo limitado fuerza normativa a algunos contenidos del Acuerdo Final”* pero con ello a) no se pone al Acuerdo Final por encima de la Constitución si no que algunos contenidos entran a la constitución pero su fuerza normativa se sujeta a las normas constitucionales, por tanto no tienen el mismo rango b) no se agrega a la Constitución un elemento extraño si no una relación con elementos que contempla su cuerpo normativo, es decir derechos fundamentales y normas de DIH, c) contenido del acuerdo no entrará al bloque de constitucionalidad y d) la función de parámetro de interpretación y criterio de validez aplica solo respecto de las normas que buscan implementar el Acuerdo de paz por tanto la carta política segura siendo la suprema fuente normativa del ordenamiento jurídico e incluso de las normas de implementación ante referidas.

C-630-2017

En razón a lo anterior concluyen los intervinientes que el Acto Legislativo 02 de 2017 no sustituye el pilar de la *supremacía constitucional*, habida cuenta de que se trata de “*una norma con un estatuto especial, temáticamente limitada y de vigencia temporalmente restringida* que no transforma ningún contenido del Acuerdo Final en norma constitucional permanente, sino que fija algunos de sus contenidos como parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas que lo desarrollen e implementen”.

Comisión colombiana de juristas:

Los intervinientes determinan que el acto legislativo objeto de control fue expedido dentro de límites materiales y temporales de competencia dados al Congreso de la República en materia de *Fast track*.

Adicionalmente concluyen que el referido acto no sustituye ningún eje axial de la Constitución ni no que por el contrario garantiza el pilar esencial de respeto y protección de los derechos humanos, así como la búsqueda, construcción y mantenimiento de la paz como eje definitorio de la identidad de la Carta Política, pues el Acuerdo Final, cuyo valor jurídico se lo otorga la reforma, “responde al contenido material de la Constitución y al bloque de constitucionalidad *lato sensu*”.

Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo”, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Corporación Jurídica Yira Castro:

Proponen la exequibilidad condicionada de algunas disposiciones contenidas en el Acto Legislativo 02 de 2017 como: “*contenidos del Acuerdo Final [...] que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales*” y “*en desarrollo del derecho a la paz*” y “*las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final*”

El primero ya que las normas de DIH y DIDH no pueden ser rebajados a parámetros de interpretación, ya que se encuentran incorporados al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, lo mismo ocurre con la expresión de derecho humanos que también han tenido desarrollo jurisprudencial por tanto no podrían reducirse a parámetros de interpretación ni mucho menos ser contrariados por el Acuerdo Final y por qué la expresión de Derecho Internacional Humanitario debe ser entendida como un régimen normativo complementario y no excluyente del DIDH. Por tanto, concluyen que: “*los contenidos del Acuerdo Final, que sean nuevos y guarden una relación con el DIDH también sean incorporados al bloque de constitucionalidad en sentido lato*”.

C-630-2017

La segunda disposición cuestionada por ellos, señala que deberá entenderse que el Acuerdo Final es una política de Estado, que debe hacerse de buena Fe en aras de lograr la satisfacción de los derechos humanos, en especial de las víctimas del conflicto armado.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento:

Más que tomar posición en cuanto a la constitucionalidad de la norma objeto de control, exhortan a la Corte Constitucional para que con el estudio de este le confiera valor jurídico al acuerdo final, ya que la paz al considerarse como valor, principio, derecho y deber es interés no solo del gobierno, sino de la comunidad internacional de las ramas del poder público y de la sociedad en general. Y señalan que este valor debe otorgársele ya que las normas que implementen el acuerdo deben ser interpretadas a la luz del mismo para que las mismas no se desdibujen o se vean desprovistas de contenido en términos de conexidad estricta.

Organización Ruta pacífica de las mujeres:

Señalan a groso modo que la reforma contemplada en el Acto Legislativo 02 de 2017, lejos de sustituir la Constitución, desarrolla uno de sus pilares fundamentales como es del derecho a la paz y se constituye como una herramienta para que el acuerdo Final de paz se mantenga en el tiempo, independientemente de la composición del gobierno.

Ciudadanos Julián Carrero, Laura Sofía Zambrano, José Elías Turizo y Rafael Alejandro Mendoza:

Establecen que con la expedición del acto legislativo del que realiza control la Corte en cuanto a su expedición no incurrió en vicios de procedimiento en su formación y que el mismo no sustituye ningún eje axial de la carta política.

Determinan que al otorgársele valor jurídico a algunos contenidos del Acuerdo Final de paz que versan sobre derecho internacional humanitario o derechos fundamentales, le brinda la estabilidad y seguridad jurídica que se requiere para garantizar su cumplimiento y lograr así una transición sólida de la violencia a la paz, evitando repetir experiencias comparadas ya que la no certeza del valor jurídico de los acuerdos ha ocasionado su incumplimiento.

Ciudadano Carlos José Lasprilla Villalobos:

El ciudadano señala que el Acto Legislativo 02 de 2017 es más un acto político que norma jurídica, no obstante, establece parámetros para la introducción e implementación del Acuerdo final para la Paz.

En su análisis interpreta que el inciso segundo del artículo primero del acto legislativo objeto de control supera la competencia conferida al Congreso de la República para el uso del procedimiento especial para la paz, constituyéndolo en una sustitución parcial de la constitución ya que "hacer

C-630-2017	
	<p>extensiva las obligaciones adquiridas por el Gobierno Nacional a todas las autoridades que integran el Estado, trasgrede los ejes definitorios consagrados en la Carta Política como son: la supremacía constitucional, el Estado de derecho, la separación de poderes y la autonomía territorial”.</p> <p>Por tanto, propone que de no declararse la inconstitucionalidad de la norma referida anteriormente esta deberá ser interpretada bajo el entendido instituciones y autoridades allí mencionadas se refiere de manera exclusiva a aquellos que comprenden la Rama Ejecutiva del nivel nacional en el sector central.</p>
EN FAVOR DE INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA	<p><u>Universidad Sergio Arboleda:</u></p> <p>En su intervención señalan que el Acuerdo final solo es vinculante para las partes que lo suscribieron y por tanto no puede imponerse a las instituciones y autoridades del Estado, ya que de esta manera se afecta el principio de separación de poderes, toda vez a que, un acuerdo de gobierno se eleva a la categoría de acuerdo de Estado, sin cumplir con las exigencias constitucionales previstas para ello.</p> <p>En cuanto a la vigencia del acto reformativo señalan que es una medida inocua, ya que, en el futuro, los órganos con competencia para reformar la constitución podrían introducir cambios para modificarlo, en tanto piden la inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017.</p> <p><u>Ciudadanos Marta Lucía Ramírez de Rincón, Camilo Jaimes, Camilo Bautista y Felipe Ortegón:</u></p> <p>Solicitan la inexequibilidad del acto legislativo objeto de control ya que para ellos en términos generales dicha enmienda sustituye la Constitución, ya la introducción de la integralidad del Acuerdo Final propicia la ruptura de ejes axiales de la administración de justicia, la participación en política y la garantía y prevalencia de los derechos de las víctimas.</p> <p><u>Ciudadano Luis Jaime Salgar Vegalara:</u></p> <p>Solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del articulado del Acto legislativo 01 de 2019 y de no ser así condicionar la constitucionalidad de dicho artículo transitorio señalando que de haber contradicciones entre los derechos fundamentales y el Acuerdo Final éstas serán superadas mediante de la interpretación de lo que esta última procura y de no ser así se entienda por no aplicado. Adicional solicita a la Corte declarar inexequible la expresión “y aquellos conexos con los anteriores “así como la totalidad del inciso segundo del artículo primero del acto legislativo referido.</p> <p>Parte de su argumentación está dada al cuestionamiento de que el Acuerdo Final se haya suscrito con un grupo al margen de la ley y se plantea cuestionamiento como los límites de competencia que debe tener el presidente en la expedición de leyes y actos legislativos para la implementación de los mismos, el alcance del control de constitucionalidad de los</p>

C-630-2017	
	<p>actos reformativos ya que para el interviniente es primordial contar con reglas claras y ciertos cambios o rediseños de la carta política. Adicional a lo anterior cuestiona la indeterminación de una norma que introduce un artículo transitorio a la Constitución.</p> <p>Señala que existe una extralimitación del poder de reforma de la constitución a la hora de expedir el inciso segundo del Acto Legislativo 02 de 2019, ya que se somete a las diferentes entidades estatales a cumplir con lo pactado en el Acuerdo Final, sin que se haya efectuado un reconocimiento de las características propias de las instituciones del Estado obligadas a ello, lo que deriva en distintas inquietudes sobre el alcance de lo ordenado respecto de la autonomía de algunas entidades.</p> <p>Su último cuestionamiento radica en torno a las normas de derecho internacional humanitario y la de derechos fundamentales señalando que el Acuerdo Final no tiene potestad para limitar su alcance y que a su vez este tiene aspectos que podrían afectar garantías constitucionales fundamentales como el debido proceso. En tanto concluye que las normas que limitan los derechos fundamentales conducen a la sustitución de la constitución.</p>
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	<p>El concepto del procurador en términos generales solicita la declaración de exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017 y centra su argumentación en relación con los actos legislativos expedidos a través del procedimiento legislativo especial para la paz en tres temáticas específicas así: (i) la competencia del Congreso de la República para expedir el Acto Legislativo 02 de 2017 en lo relacionado con el límite temporal y la finalidad del mismo; (ii) el procedimiento de formación del Acto Legislativo 02 de 2017; y (iii) el juicio de sustitución de la Constitución como eventual vicio de procedimiento por falta de competencia del constituyente derivado.</p> <p>Con respecto al primer punto señala que el acto legislativo objeto de control se tramitó en vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz, es decir en el tiempo en el que este se encontraba vigente cumpliéndose así con el límite temporal para su expedición. Advierte a su vez que la norma guarda conexidad con la implementación del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y duradera ya que esta reforma otorga garantías a través distintas vías como lo son: I) otorgamiento del valor normativo a contenidos del acuerdo relacionado con DIH y derechos fundamentales y conexos de la Constitución como referente de las normas que desarrollen el Acuerdo. II) imposición a las autoridades del estado el cumplimiento de lo pactado de buena fe y III) establece una vigencia adecuada para la implementación de los mismos (tres periodos presidenciales).</p> <p>Exhorta a la Corte a que haga claridad del juicio de sustitución en cuanto si el mismo se hace por que existe un vicio sustancial o si es de procedimiento en cuanto a la creación legislativa, es decir tomar posición concordante para ambos eventos, es decir si se trata de un vicio sustancial será</p>

C-630-2017

improcedente para reformas constitucionales y por el contrario si es cuestionamiento de carácter procedimental se aplique para leyes y actos legislativos y se aplique para eventos de caducidad.

Para la Procuraduría el juicio de sustitución de la Constitución siempre debe verse como una herramienta excepcional, que debe ser utilizada si se está en presencia de la aniquilación del Estado Social de Derecho, es decir que se afecte la estructura jurídica del estado que deje de ser en sí misma y no elementos accidentales, por tanto, este juicio debe aplicarse de forma restringida para no afectar la soberanía popular y el principio democrático.

Señala la vista fiscal que el eje axial que podría verse afectado por el artículo 1 del acto legislativo es el de *supremacía constitucional* por la presunta poca certeza de los contenidos del acuerdo que serán parámetros de interpretación, pero esta posición no es suficiente para adelantar un juicio de sustitución. Así las cosas, puntualiza que debe entenderse que “los contenidos del DIH y de los derechos fundamentales y conexos no son categorías indeterminadas y, en todo caso, el Acuerdo Final es una aplicación concreta de estos contenidos en el marco de un proceso de negociación, pero a partir de las categorías limitadas. Si bien es cierto que el contenido del DIH y de los derechos fundamentales es amplio, las normas de implementación no pueden convertir cualquier texto del acuerdo en DIH o en un derecho fundamental”.

Para la procuraduría que los contenidos del Acuerdo final se sujeten a las disposiciones constitucionales, supone que las normas que desarrolle se integran a la Constitución en sentido lato pues el Acuerdo Final “en sus componentes de parámetro no tiene rango de norma constitucional, sino que tiene un nivel superior al de la ley, pero inferior al de la Constitución”.

Con respecto al inciso segundo del artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 conceptúa que dicha disposición comporta una obligación general de cumplimiento del Acuerdo Final que no se refiere a su valor jurídico como parámetro de interpretación, validez y desarrollo, sino que se refiere a un marco de aplicación específico de éste con independencia de su rango normativo. Por tanto, refiere que “una cosa es el valor jurídico del Acuerdo, y otra su cumplimiento general de buena fe como una política de Estado”

Finalmente, con respecto al artículo segundo del acto reformativo sujeto a control señala que en principio pudiese contrariar el eje axial de alternancia de poder, más sin embargo asevera que con la disposición no se pretende la perpetuación de un modelo o régimen de gobierno sino el sometimiento de los poderes públicos a los fines del Estado, es decir la búsqueda de la paz a través del cumplimiento del Acuerdo Final firmado.

C-630-2017	
DETALLES Y/O CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA	
TEMAS TRATADOS	<ul style="list-style-type: none"> -Separación de poderes -Principio democrático -Supremacía Constitucional -Rigidez Constitucional -paz -Independencia y autonomía de los órganos -Colaboración armónica de poderes -Principio de Legalidad -Equilibrio de poderes -Teoría de la sustitución de la constitución
NORMA (S) DEMANDADA (S)	<p>La norma objeto de control constitucional es el Acto Legislativo 02 de 2017 "Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" de la cual se hace análisis de sus artículos 1 y 2.</p> <p>Artículo 1: En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales.</p> <p>Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.</p> <p>Artículo 2: El presente Acto Legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.</p>
HECHOS Y ARGUMENTOS JURUICOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA	No aplica, en atención a que la Corte Constitucional adelanta control automático y posterior de constitucionalidad de los actos legislativos
NORMAS JURIDICAS Y JURISPRUDENCIA APLICADA AL CASO	<p>Constitución política</p> <ul style="list-style-type: none"> -Literal K del artículo 1 del AL 01 de 2016 (procedimiento legislativo especial para la paz) -Preámbulo CN - Artículo 2 CN - Artículo 22 CN - Artículo 189 numeral 4 CN

C-630-2017	
	<ul style="list-style-type: none"> -Artículo 241 numeral 1 CN -Artículo 374 CN -Artículo 242.3 CN - Artículo 160 numeral 5CN - Artículo 67 CN - Artículo 133 CN - Artículo 145 CN - Artículo 150 CN <p>Ley</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ley 5ta de 1992 (artículos 144 y 85) -Ley 3era de 1992 (artículo 2) <p>Sentencias</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sentencia C-160-2017 -Sentencia C-699-2016 -Sentencia C-551-2003 - Sentencia C-1200-2003 - Sentencia C-579-2013 - Sentencia C-577-2014 - Sentencia C-048-2001 -Sentencia C-379-2016 -Sentencia C-251-2002 -Sentencia C-285-2016 -Sentencia C-970-2004
PROBLEMA JURIDICO GENERICO C.C	¿Si el Acto Legislativo 02 de 2017 por el cual se adicional artículo transitorio a la Constitución con el fin de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del conflicto, se tramitó conforme al procedimiento legislativo especial para la paz y si el congreso tenia competencia para expedirlo, es decir si no excedió la misma ?
TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTOS DE LA DECISION	
PROBLEMA JURIDICO (RESUELTO POR LA CORTE)	¿La expedición del Acto Legislativo 02 de 2017 que en sus artículos 1 y 2 busca dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final de terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera sustituye o reemplaza transitoriamente los ejes definitorios de la Constitución Política como lo son la supremacía constitucional, separación de poderes, el principio democrático y de legalidad?
RATIO DECIDENDI	En primer lugar se determina que acto legislativo, visto desde una perspectiva general, no sustituye los <i>principios democrático y de legalidad</i> , porque el ordenamiento jurídico, esto es, las normas válidamente incorporadas por los cauces previstos en la Constitución para el efecto, siguen siendo el referente obligado de la actuación de los poderes públicos, como ocurre con el Acto Legislativo 02 de 2017, objeto de control, mediante el cual se elevó el Acuerdo Final a la categoría de política de Estado, vinculando de esta manera a todas las autoridades públicas a su cumplimiento de buena fe durante los próximos tres períodos presidenciales y estableciendo que sus contenidos en materia de DIH y de derechos humanos constituyen parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas de implementación.

C-630-2017

De igual manera el acto reformativo no suprime la separación de poderes, la competencia legislativa con alcance vinculante general se mantiene en cabeza del Congreso de la Republica, sin desconocer las condiciones excepcionales, el Presidente cumple funciones legislativas. Por el contrario, establece condiciones de colaboración armónica para la implementación integral y de buena fe del Acuerdo Final en cuanto política de Estado.

De la misma forma no sustituye el acto reformativo objeto de revisión el principio de supremacía de la constitución, por el contrario, lo reitera en cuanto dispone que el parámetro de constitucionalidad para la implementación normativa del acuerdo final y de la actuación de los poderes públicos es la propia Carta Política, de la cual forma parte el Acto Legislativo objeto de control, incluso en cuanto consagra como referente de validez de las normas de implementación los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de DIH o de derechos fundamentales definidos en la Constitución.

En importante señalar que el precedente de las normas de implementación es el propio acuerdo y, por tanto, resulta razonable que el mismo constituya una pauta interpretativa ineludible, por tanto, su carácter como parámetro de interpretación obligatorio en estimación de la Corte no deriva en un problema de constitucionalidad ya que lo anterior es consistente con el hecho de tratarse de normas de implementación requieren tener un marco de referencia interpretativa el Acuerdo de paz que se pretende implementar.

Por consiguiente, entre varias interpretaciones de una disposición normativa producto de la implementación del Acuerdo, y cuando todas ellas sean constitucionales, se deberá preferir aquella que se ajuste de mejor manera al contenido del Acuerdo Final. De esta forma, se garantiza en mayor medida el cumplimiento de lo acordado y, por lo mismo, el derecho y deber a la paz.

A su vez no existe problema de constitucionalidad la previsión en torno al referente de validez del Acuerdo Final, ya que esta hace referencia a la conexidad que deben guardar las normas y leyes de implementación con el Acuerdo Final, así como a su concordancia con las finalidades del mismo, cual es la consecución de la paz estable y duradera. En cuanto al parámetro del Acuerdo Final como referente de desarrollo, la corte determina que no se admite posibilidad contraria, si lo que se pretende es implementar el Acuerdo sus contenidos, inevitablemente, son referente de desarrollo para el proceso de producción normativa.

En relación con el inciso segundo del artículo primero del acto legislativo objeto de estudio en relación con que la autoridades e instituciones cumplan de buena fe con lo acordado preservando el espíritu, compromisos y principios del acuerdo final, para la corte no presenta problemas competenciales ya que se trata de garantizar la ejecución Acuerdo Final en cuanto a política pública formulada por el gobierno. Dicho mandato ha

C-630-2017	
	<p>de entenderse como una <i>obligación de medio</i>, lo que implica que los órganos políticos, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, deberán llevar a cabo, como mandato constitucional, los mejores esfuerzos para cumplir con lo pactado, en el marco de los principios de integralidad y no regresividad.</p> <p>Finalmente, la relación con el artículo segundo del Acto Legislativo 02 de 2017 lo que incorpora es un principio de estabilidad y seguridad respecto de lo acordado, es además coherente con las finalidades del mencionado acuerdo y hace posible que sea implementado con respecto de las competencias de las autoridades y órganos del Estado a nivel nacional y territorial.</p>
OBITER DICTA	<p>La opción por una salida negociada al conflicto maximiza el valor de la paz y constituye un paso hacia la efectiva vigencia de la constitución. Debe producirse en armonía con otros principios y valores constitucionales entre los cuales se cuentan el principio democrático, la supremacía de la constitución, los derechos de las víctimas, pero tiene un valor intrínseco en cuanto que la consolidación de la paz es un presupuesto para la materialización de los demás derechos.</p> <p>El principio democrático <i>no tiene un carácter absoluto</i>, sino que está sujeto a ciertos <i>presupuestos normativos sine qua non</i>, de manera que dicha presunción puede ser desvirtuada cuando en desarrollo de dicho principio se terminan adoptando decisiones que trasgreden los límites de la competencia democrática, los cuales refieren a las condiciones imperativas de un Estado social, constitucional y democrático de Derecho, como son el respeto de los derechos fundamentales, la separación de poderes y la democracia misma, y cuando en general se transgrede el orden constitucional vigente.</p> <p>La fuerza vinculante de la Carta Política se constituye en un principio elemental de lo que la doctrina especializada ha llamado "<i>constitucionalización del Derecho</i>", por cuanto a través de ésta se cristaliza una de las condiciones inexcusables para la validez del sistema jurídico interno.</p> <p>El control al ejercicio del poder como consecuencia de la "<i>mutua contención entre autoridades</i>" persigue el propósito de impedir la concentración de las funciones en un solo órgano y, por tanto, asignar las atribuciones básicas de la actividad estatal a distintos ámbitos del poder, de forma tal que cada uno se encargue principalmente, y por separado, de cumplir sus competencias, sin que en la atención de dicho propósito sea posible apropiarse de las atribuciones reconocidas por el ordenamiento jurídico a una rama u órgano distinto, interfiriéndolo en forma desmedida o privándolo de sus funciones privativas, en procura de darle prevalencia y primacía a cualquiera de los otros poderes u órganos del Estado.</p> <p>Los principios democrático y de legalidad, de supremacía constitucional y de separación de poderes, son principios estructurales y transversales de la Constitución Política que</p>

C-630-2017	
	<p>hacen parte de su identidad y, por tanto, si bien pueden ser objeto de reforma, en ningún caso pueden ser suprimidos.</p>
METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO	<p>El juicio de constitucionalidad estuvo comprendido por dos fases la primera orientada al examen del trámite utilizado para la expedición del acto legislativo objeto de estudio, teniendo como referencia los requisitos especiales establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 y aquellos del proceso ordinario de formación legislativa que resultan aplicables al procedimiento especial. Y en segunda medida el juicio de constitucionalidad consistió en el examen de competencia, con la finalidad si en dicho procedimiento de expedición se incurrió en un vicio de competencia ya sea por desbordar el principio de conexidad de la implementación del Acuerdo Final o por la sustitución de la Constitución.</p> <p>En relación con el segundo juicio adelantado por la corte fue utilizado por la misma y ciñéndose a la jurisprudencia de esta corporación el juicio de sustitución, el cual para su aplicación tuvo una variación ya que no existía demanda de por medio, no obstante, el mismo se efectuó bajo el parámetro de análisis de una premisa mayor (elementos de la constitución que podrían haber sustituido por el acto reformativo), premisa menor (donde se fijan características y el alcance jurídico del acto reformativo acusado de sustituir la carta) y una conclusión (en la que se confrontan premisa mayor y menor a fin de determinar si el eje definitorio expresado en la premisa mayor ha sido sustituido o remplazado por el acto normativo reformativo).</p>
DECISIÓN EN CONCRETO	<p>Declarar la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 02 de 2017, “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en los términos señalados en esta sentencia.</p> <p>Para la incorporación normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.</p> <p>Esta Corporación ha sostenido que el Acuerdo de Paz corresponde, en principio, a una <i>política pública de Gobierno</i>. Se entiende así, porque el texto final incorpora el conjunto de principios, estructuras y roles institucionales liderados por el Gobierno, que constituyen a la vez la base de la gestión estatal de lo que se considera necesario para materializar el derecho-deber a la paz.</p> <p>Siendo el Acuerdo Final, en los términos del Acto Legislativo 02 de 2017, una <i>política de Estado</i>, implica una obligación de cumplimiento de <i>buena fe</i> por parte de las instituciones y</p>

C-630-2017	
	<p>autoridades públicas, y como estrategia de mediano y largo plazo, se mantiene su vigencia durante los próximos tres gobiernos, plazo que el constituyente derivado encontró razonable para la implementación y consolidación de lo acordado.</p> <p>Que la incorporación al ordenamiento jurídico de los resultados de la negociación dependan de los actos de implementación y desarrollo no es una simple formalidad, sino, al contrario, representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico; (ii) al principio de supremacía constitucional, en el sentido de que el parámetro supremo de referencia para todas las autoridades y los particulares es la Constitución; y, (iii) a la regla de separación de poderes, pues los órganos del Estado deberán gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del deber de colaboración armónica para el cumplimiento de los fines constitucionales.</p> <p>La expresión “<i>deberán guardar coherencia</i>” del inciso segundo del artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017 se entiende en el sentido que impone a los órganos y autoridades del Estado el <i>cumplimiento de buena fe</i> de los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de progresividad.</p>
SALVAMENTO DE VOTO	No hubo salvamento de voto de la sentencia objeto de análisis.
ACLARACIÓN DE VOTO	<p>Magistrada Diana Fajardo Rivera:</p> <p>En términos generales comparte la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C 630-2017, considera importante el papel protagónico dado al acuerdo Final para la interpretación de las normas que se expidan para su implementación y que la interpretación de las premisas fue estructurada en debida forma y que se requiere interpretar las normas de forma sistemática.</p> <p>Pero señala en su aclaración que el inciso segundo del artículo 1 del acto reformativo objeto de la decisión, debe entenderse en el de la mejor disposición de las partes de hacer realidad el ambicioso arreglo alcanzado en aras de la construcción de la Paz, el cual se refiere a seis ejes temáticos gruesos de política pública, por tanto en ese sentido las autoridades en el margen de sus competencias legales y constitucionales deberán dar todos los pasos destinados para la concreción de lo acordado, dichas obligaciones podrán ser de medio o de resultado conforme al punto que se esté implementando.</p> <p>Para la magistrada en la sentencia se tocan puntos irrelevantes y constitucionalmente problemáticos como es la clasificación de la naturaleza del conflicto lo que hace depender la obligatoriedad de los acuerdos, restándole importancia a los elementos centrales del acuerdo de paz y del</p>

C-630-2017

derecho mismo. Es decir, para la magistrada “*comprender los conflictos es relevante para la superación de la guerra, pero utilizar tal clasificación como fundamento para justificar eventuales incumplimientos minaría la legitimidad del Estado que los suscribe, si quien lo firmó tenía la competencia para hacerlo, como explícitamente lo admite la Sentencia C-630 de 2017, en este escenario*”.

Finalmente busca hacer claridad que el termino de tres periodos presidenciales siguientes para la implementación de los acuerdos, resulta en un término prudencial para la concreción normativa de pactado, lo cual no implica que, pasado este periodo, el cumplimiento del Acuerdo Final deje de ser obligatorio para las autoridades, para órganos del Estado y beneficiarios directos, por tanto, la culminación de este periodo no debe constituirse como una licencia para interrumpir el camino recorrido hacia la paz y dejar sin efecto las decisiones adoptadas en aras de su construcción.

Así las cosas y en consecuencia con lo anteriormente expresado la magistrada termina señalando que “la interpretación correcta del artículo 2º a la luz del derecho-deber a la paz y de la efectividad de los derechos de las víctimas; y con miras a la reconciliación nacional y la no repetición de la violencia exige comprender que ese es el tiempo destinado a la concreción normativa esencial de lo acordado; no que los años siguientes serán de incertidumbre para los ex combatientes, o de riesgos para las víctimas”.

Magistrado José Fernando Reyes Cuartas:

La aclaración de voto del Magistrado está orientada a señalar el alcance y status que posee el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el ámbito internacional, reconociendo que conforme a la interpretación del DIH este debe ser catalogado como acuerdo especial conforme a las condiciones dadas por el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, teniendo así la virtud de tener vigencia y repercusiones en el orden internacional.

No obstante, señala el Acuerdo Final para la paz tiene por objeto proveer un conjunto de normas más amplias o detalladas, sin que por ello pierdan la naturaleza de humanitarios, cuyo objetivo es restaurar los derechos de las víctimas y aportar a la solución de las causas históricas del conflicto y de persistencia de la violencia, siendo de tipo declarativo y constitutivo.

Señala que catalogar el Acuerdo Final como categoría de acuerdo especial en las fuentes de derecho internacional no es un asunto pacífico, no obstante, este deberá producir efectos en el ámbito internacional conforme a los deberes que tienen los estados ante la comunidad internacional de hacer efectivo el DIH así como hacer cumplir los compromisos suscritos de buena fe en desarrollo del mismo, producto de un acuerdo de paz con grupos alzados en armas (sujetos del

C-630-2017	
	<p>DIH), sin que por ello constituyan en sentido estricto un tratado internacional.</p> <p>Señala el magistrado que, aunque en estricto sentido el acuerdo no sea un tratado internacional, si puede identificarse como una fuente especial de derecho internacional en general, ya que contiene obligaciones entre las partes ante la comunidad internacional y al celebrarse conforme a los estándares internacionales, así como una “<i>sui generis</i> en el orden internacional general, al responder a la obligación del Estado de hacer efectiva la aplicación del derecho internacional humanitario e implicar el cumplimiento de los compromisos adquiridos de buena fe”.</p> <p>Y finalmente concluye su aclaración de voto señalando que la Corte en la sentencia debió reconocerle al Acuerdo Final un status más amplio que una simple Política de Estado, en palabras textuales determinó: “el alcance reconocido en esta aclaración de voto al Acuerdo Final para la paz desde la perspectiva del derecho internacional general se hubiera podido proyectar con mayor ahínco en el derecho interno hasta reconocer la potencialidad de que algunos de sus contenidos produjeran efectos jurídicos mayores a los propios de una política de Estado, una vez pasarán por el tamiz de la Corte Constitucional al efectuar el control automático de constitucionalidad y éste así lo determinara”.</p>
ANALISIS JURIDICO DE LA SETENCIA PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL	
COMENTARIO DE LA DECISION	<p>El sentido del fallo en relación a la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017 que busca dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la construcción de la paz se comparte en la mayoría de sus consideraciones ya que busca darle un estatus al referido acuerdo, como lo es el de política de Estado, sin desconocer que para ello se requiere su implementación a través de los canales normativos establecidos por la constitución para ello, lo cual requiere un esfuerzo de todos los actores que intervienen en las relaciones de la organización estatal.</p> <p>Es importante destacar que es de recibo la interpretación que realiza la Corte en torno al alcance que se le da al acuerdo de paz como parámetro de interpretación, de validez y de desarrollo de las normas de implementación y el carácter de obligación de medio que se les confiere a las autoridades nacionales para su aplicación de buena fe y sin desconocimiento de las finalidades, principios y compromisos del referido Acuerdo Final. Adicional a ello es valiosa la interpretación que le da al término de duración que se le da a la implementación del contenido de los acuerdos ya que es una garantía de seguridad jurídica para cumplir con lo pactado, sin importar el gobierno que se encuentre de turno.</p> <p>Se constituye como elemento fundamental en la decisión de la Corte Constitucional la referencia que hace de los principios de separación de poderes, supremacía constitucional, principio de legalidad y como estos en realidad no se ven minorados o sustituidos por el Acto Legislativo 02 de 2017, si</p>

C-630-2017

no que por el contrario estos se reafirman al expedirse este, ya que no desconoce estos ejes axiales en ningún momento si no que refuerza la existencia de los mismos y como estos constituyen un límite a la hora del juicio de interpretación que deban realizarse de las normas que puedan expedirse para la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Uno de los puntos que resaltamos de la sentencia es la confirmación jurisprudencial, en relación a que, en escenarios de transición hacia la paz, la realización de dicha paz maximiza los valores, principios y derechos fundamentales de manera que posibilita una efectiva vigencia de la constitución política, es decir el ordenamiento jurídico establecido en Colombia tiene como fin esencial la consecución de la paz.

Así como la claridad que se realiza de la no incorporación directa del Acuerdo Final al derecho interno de Colombia, si no que los criterios para su incorporación se darán a través de las normas constitucionales y los mecanismos legislativos existentes y que el cuerpo normativo de carácter constitucional y de derecho internacional humanitario para su interpretación y de referente de desarrollo no son novedosos, sino que son reconocidos, ratificados por el Congreso e incorporados constitucionalmente con anterioridad a la expedición del Acuerdo Final.

Finalmente, como criterio personal, consideramos que la construcción de un juicio de sustitución que difiere a lo decantado por la Corte Constitucional en pronunciamientos anteriores, es poco estructurado ya que en el desarrollo del control de constitucionalidad no realiza una interpretación rigurosa de los criterios utilizados para definir su premisa mayor, es decir las intervenciones realizadas en la parte primera de la sentencia como parámetro para establecer un juicio de sustitución resulta escuetas o fútiles.

1.4 C-027-2018

C-027-2018	
TIPO DE PROCESO QUE GENERA SENTENCIA	REVISIÓN CONSTITUCIONAL AUTOMÁTICA DE ACTO LEGISLATIVO
FECHA DE LA SENTENCIA	18 de abril de 2018
MAGISTRADO (A) PONENTE	José Fernando Reyes Cuartas
MAGISTRADOS QUE CONFORMARON SALA	Sala Plena
MAGISTRADOS QUE ACLARAN VOTO	Gloria Stella Ortiz Delgado
MAGISTRADOS QUE SALVAN VOTO	No hubo salvamento de voto por parte de los magistrados que conforman la Sala
ACTOR O DEMANDANTE INTERVINIENTES	No aplica en razón al tipo de control constitucional
	<ul style="list-style-type: none"> - Presidencia de la República. - Ministerio del Interior. - Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República - Viceministerio de Hacienda. - Transparencia por Colombia. - Misión de Observación Electoral. - Ministerio del Interior. - Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado - Defensoría del Pueblo - Comité Internacional de la Cruz Roja. - Universidad de Antioquia. - Consejo Nacional Electoral. - Alto Comisionado de Paz. - Corporación Sisma Mujer, Corporación Humanas y Red Nacional de Mujeres. - Representante a la Cámara Telésforo Pedraza. - Camilo Gómez Álzate, ex comisionado de paz. - Oscar José Dueñas Ruiz, ex Presidente de la Unión Patriótica. - Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. - Iván Cepeda Castro, Senador del Polo Democrático - Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz. - Corporación Sisma Mujer, Corporación Humanas y Red Nacional de Mujeres. - Elisabeth Ungar, Miembro de la Misión Electoral Especial. - Fabio Enrique López, -IEPRI- Universidad Nacional de Colombia. - Jack Housni Jaller, Representante a la Cámara por el Partido Liberal - Vida. Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. - Unidad para las Víctimas. - Frédéric Massé - Francisco Toloza Fuentes, Movimiento Voces por la Paz y la Reconciliación. - Alexander Vega Rocha, Magistrado del Consejo Nacional Electoral
A FAVOR DE LA EXEQUIBILIDAD NORMA DEMANDADA	Ministerio del Interior:

C-027-2018

Expuso que el objetivo de la regulación está en terminar el conflicto de más de 50 años, en la garantía de no repetición para las víctimas y consolidando la paz como eje estructural de la Constitución. Recalcó que el reconocimiento de personería jurídica se sujeta a la condición esencial de dejación de las armas. A continuación, subrayó el carácter excepcional y transitorio de las medidas que permite la consolidación de un proyecto político dentro de la legalidad, otorgando al nuevo partido una participación activa en la implementación del Acuerdo Final, lo cual amplía la democracia y respeta el pluralismo. Señaló que de admitirse que se sustituye el principio de igualdad se debe observar que lo pretendido es la paz donde las supuestas ventajas que se establecen resultan proporcionales a las que se le darían a cualquier otro partido o movimiento político que inicia con fundamento en un proceso de paz.

Consejo Nacional Electoral:

Encontró que el otorgamiento inmediato de la personería jurídica no sustituye ningún pilar definitorio de la Constitución, porque se fortalece el Estado social de derecho y la democracia participativa y pluralista para cumplir el fin último de la paz. Destacó que estas prerrogativas tienen carácter extraordinario y temporal a efectos de permitir el tránsito de personas alzadas en armas a la vida civil, sin que genere una alteración permanente o grave al orden estatal. Adujo que el partido o movimiento político que surja de las FARC-EP debe cumplir con las reglas de funcionamiento de la organización interna, además que al momento de la constitución deben allegar ante el CNE el acta de constitución, estatutos, código de ética, plataforma ideológica, designación de sus directivos y compromiso con la equidad de género conforme a los criterios de paridad, alternancia y universalidad.

Alto Comisionado de Paz:

Señaló en la constituyente de 1991 se garantizó el tránsito como partido político al Partido Revolucionario de los Trabajadores otorgándole un cupo a la Asamblea Nacional constituyente, el Quintín Lame tuvo un vocero para participar en la constituyente y la Corriente de Renovación Socialista le fueron asignadas curules para su participación en la Cámara (1994-1998). Puso de presente el artículo transitorio 12 de la Constitución que estableció que los grupos guerrilleros vinculados al proceso de paz pudieran tener representación en el Congreso de la República, a través del establecimiento de las circunscripciones de paz. Concluyó resaltando la transitoriedad de las medidas (van hasta el 2022 y otras hasta el 2026).

Corporación Sisma Mujer, Corporación Humanas y Red Nacional de Mujeres:

Aseveraron que el acto legislativo tiene como finalidad el fortalecimiento y la ampliación de la democracia de quienes como grupo armado dejaron las armas para incorporarse a la vida política y legal. Encontraron relevante incluir tres

C-027-2018

elementos acordes con lo establecido en la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre “*Mujeres, paz y seguridad*”: (i) inclusión de un estándar de participación política para las mujeres; (ii) el alcance del concepto de equidad de género; y (iii) la adopción e implementación de medidas diferenciadas para garantizar la protección de las mujeres excombatiente antes, durante y después, especialmente para prevenir la violencia sexual y las amenazas.

Representante a la Cámara Telésforo Pedraza:

Afirmó que el otorgamiento de la personería jurídica por una sola vez sin el cumplimiento de los requisitos ordinarios y de forma equivalente a dos períodos del Congreso, tiene como finalidad ofrecer garantías de reincorporación a la vida política regular no armada de aquellos que habiendo dejado las armas quieren expresar sus ideas de manera libre y espontánea, perteneciendo a un partido o movimiento político que represente su pensamiento y convicciones. Informó que según la exposición de motivos al acto legislativo se evidencia que se busca fortalecer el pluralismo. No encuentra que se presente sustitución alguna de la Constitución, dado que son unas medidas proporcionales al fin último de la paz.

Oscar José Dueñas Ruiz, ex Presidente de la Unión Patriótica:

Rememoró que la propuesta de la creación de la UP nació de los Acuerdos de la Uribe en 1984, proclamación que se dio en noviembre del año siguiente. Informó que entre la propuesta de fundación y la proclamación violentamente murieron más de 165 activistas, además de los obstáculos para el reconocimiento de la personería jurídica por el Consejo Nacional Electoral, la cual vino a lograrse el 16 de agosto de 1986. Indicó que en el año 2002 se declaró la pérdida de la personería jurídica por parte del CNE. Indicó que la participación en política está garantizada por los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coligiendo que al hacer parte del bloque de constitucionalidad resulta razonable y proporcionado que se reconozca de pleno derecho la personería jurídica del nuevo partido o movimiento político de las FARC-EP.

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República:

Solicitó declarar la exequibilidad del acto legislativo. Determinó que la reforma constitucional introducida se enmarca dentro de un proceso de paz que se dio después de una salida negociada y que busca solucionar las fuertes tensiones entre justicia y paz.

En el análisis de constitucionalidad del artículo transitorio 1º del Acto Legislativo 03 de 2017 consideró que la premisa mayor que podría sustituirse es el “*marco democrático participativo bajo condiciones de igualdad*”, porque a primera vista podría pensarse que el reconocimiento de personería jurídica sin el cumplimiento de los requisitos legales para el

C-027-2018

partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal lo podría reemplazar. Sin embargo, estimó que la organización política que surja de las FARC-EP no está en las mismas condiciones de los demás partidos y movimientos políticos para exigirles cumplir los requisitos para obtener la personería jurídica, por lo que difícilmente podría nacer por sus propios medios, ya que nunca ha participado en elecciones ni ha conseguido votos ni representación porque apenas inicia su transformación.

Ministerio del Interior:

Aseguró que el acto en cuestión regula el proceso de reincorporación a la vida social, económica y política de un grupo desmovilizado, elemento esencial para la consolidación de una paz estable y duradera, que responde además al dictado constitucional de materializar el principio democrático.

Comité Internacional de la Cruz Roja:

Expuso que el derecho a la paz es un principio que debe ser observado en el juicio de sustitución. Informó que la reintegración política es una consecuencia directa del proceso de transición de la guerra hacia la paz, refiriendo casos como El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ha logrado posicionarse tras la firma del acuerdo de paz en 1992, ocupando la presidencia de la República durante los dos últimos períodos. También reseñó el caso sudafricano luego de la terminación del régimen del Apartheid, en donde el Congreso Nacional Africano (CNA) escaló al poder con Nelson Mandela como Presidente. En el caso colombiano, anotó, algunos miembros de ex grupos guerrilleros como el M-19 han participado en escenarios políticos como la Asamblea Constituyente y luego en alcaldías, gobernaciones, etc. Afirmó que la reforma constitucional propuesta no sustituye la Constitución, dado que el estudio de la enmienda constitucional debe realizarse bajo el contexto de la coyuntura excepcional y transicional, al tratarse de la reintegración de un grupo armado a la sociedad civil por las vías democráticas.

Defensoría del Pueblo:

Encontró válidas y razonables las reglas y medidas sobre reconocimiento de personería jurídica al partido o movimiento político que emerja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Determinó que la obtención de la personería jurídica de manera inmediata no sustituye la Constitución respecto a los principios democrático y de igualdad al tratarse de un escenario de justicia transicional, particularmente de una agrupación desmovilizada que por primera vez ingresa al escenario democrático, por lo que halló razonable la excepción de ciertos requisitos y condiciones que se aplican a los demás partidos y movimientos políticos, máxime si se atiende el carácter transitorio de las medidas adoptadas. De procederse de manera contraria, explicó, llevaría otorgar un tratamiento desigual atendiendo las especiales condiciones de

C-027-2018	
	<p>este nuevo actor político en el marco de la contienda democrática.</p> <p>Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Expresó que la adquisición de la personería jurídica de forma inmediata sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, permite de manera excepcional una serie de prerrogativas que tienen como finalidad proveer las herramientas de un régimen de transición hacia la paz y el abandono definitivo de las armas. Adujo que la reforma constitucional garantiza el pluralismo en dichos escenarios para evitar situaciones como el exterminio del partido o movimiento político, cuyas prerrogativas no implican que la agrupación que surja de las FARC-EP no deba cumplir con los demás requerimientos propios de las agrupaciones políticas, lo cual fortalece la democracia en el escenario de justicia transicional.</p> <p><u>Misión de Observación Electoral (MOE):</u></p> <p>Sostuvo que al preverse normas de reconocimiento de personería jurídica no se sustituye el pilar fundamental de la democracia, dado el valor de la paz como principio esencial de la Constitución.</p> <p><u>Universidad de Antioquia:</u></p> <p>Observó que el otorgamiento <i>ipso iure</i> de personería jurídica al partido o movimiento político que surja de las FARC-EP a la actividad político legal es una medida transitoria de inclusión de una nueva opción política electoral sin que ninguna otra agrupación política resulte excluida ni sus derechos desmejorados al resultar acordes con el principio consustancial de la paz. Aseveró que la personería jurídica tiene como objetivo que el incipiente grupo político no se vea avasallado por las consolidadas mayorías políticas</p>
EN FAVOR DE INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA	<p><u>Camilo Gómez Álzate, ex comisionado de paz:</u></p> <p>Indicó que el Estado colombiano ha reconocido de tiempo atrás el carácter político de las FARC-EP, sin que signifique una justificación a su forma de actuar. Anotó que la entrada al escenario político va a suponer un cambio de fondo en el sistema electoral y una modificación de las condiciones anteriores de la democracia. Aseveró que el fin último de un proceso de paz con un grupo guerrillero es lograr cambiar las armas por la política siempre que se cumpla con los derechos de las víctimas, en especial los presupuestos de verdad, reparación y no repetición. Halló desequilibrada la reforma al resultar ilógico que si las víctimas quisieran crear un partido político tuvieran que cumplir los requisitos del ordenamiento jurídico, mientras que el partido que surja de las FARC-EP no tiene que hacerlo. Concluyó que no se puede permitir que se sustituya la Constitución, ni que se confunda el concepto de oportunidades con el de privilegios como ocurre en el acto legislativo en cuestión.</p>
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	<p>Encontró ajustado a la Constitución los apartes sujetos a revisión constitucional. Anotó que las reglas de participación política pueden ser ponderables para responder a fines constitucionalmente importantes. Hizo referencia a la</p>

C-027-2018	
	<p>sentencia del Consejo de Estado de 2013 que anuló las resoluciones del CNE que suprimían la personería jurídica a la UP, por no haber alcanzado el umbral requerido en la correspondiente ley estatutaria. Explicó que tratándose de la justicia transicional el test de sustitución debe ser leve (criterio de la autocontención) en tanto lo que está de por medio es la materialización de un valor superior como es la paz. Resaltó que por tratarse de un control automático existe un inventario de ejes axiales y que se debe tener en cuenta como premisa mayor los principios de democracia participativa, pluralismo político y participación política.</p> <p>Subrayó que las medidas adoptadas son excepcionales teniendo efectos respecto de quienes se desmovilicen –ya sea de forma colectiva o individual – en el marco de un proceso de paz, además del carácter transitorio. En cuanto al reconocimiento de pleno derecho de la personería jurídica lo encuentra acorde con la Constitución, ya que el objetivo de la transición es conducir un proceso de paz que permita la reincorporación a la sociedad civil de antiguos actores del conflicto armado interno. Coligió que la disposición se reduce a establecer una regla de vigencia pasajera dirigida a fortalecer los principios y valores que permiten la reconciliación y convivencia pacífica de la sociedad en general, que termina por salvaguardar los derechos a elegir y ser elegido, así como la garantía de conformar, pertenecer y retirarse de agrupaciones políticas.</p>
DETALLES Y/O CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA	
TEMAS TRATADOS	<ul style="list-style-type: none"> - Principio Igualdad - Marco democrático participativo - Participación Política - Flexibilidad del Juicio de sustitución - Justicia transicional
NORMA (S) DEMANDADA (S)	<p>Acto Legislativo 03 del 23 mayo de 2017 a través del cual se regula parcialmente el componente de reincorporación política del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y por el cual se incorporan tres artículos transitorios a la Constitución Nacional. El cual introduce tres artículos transitorios a la Constitución Nacional.</p>
HECHOS Y ARGUMENTOS JURIDICOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA	<p>No aplica, en atención a que la Corte Constitucional adelanta control de constitucionalidad de los actos legislativos</p>
NORMAS JURIDICAS Y JURISPRUDENCIA APLICADA AL CASO	<p>Constitución Política</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artículo N° 3 - Artículo N° 22 - Artículo N° 40 - Artículo N° 95 - Artículo N° 103-111 - Artículo N° 120 - Artículo N° 122 - Artículo N° 241.1 - Artículo N° 258-263 - Artículo N° 264-266 - Artículo transitorio N° 12

C-027-2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - Artículo transitorio N° 30 - Ley - 1820 de 2016 - Sentencias - C-702 de 2010 - C-579 de 2013 - C-577 de 2014 - C-699 de 2016 - C-160 de 2017 - C-332 de 2017 - C-408 de 2017 - C-630 de 2017 - C-674 de 2017
PROBLEMA JURIDICO GENERICO C.C	¿Es violatorio del principio de igualdad justificar el reconocimiento de personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, (i) Sin haber participado antes en certamen electoral, (ii) contado con el número de afiliados exigido y (iii) sin umbral de votación?
TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTOS DE LA DECISIÓN	
PROBLEMA JURIDICO (RESUELTO POR LA CORTE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Se sustituyen los elementos axiales de la constitución tales como la participación política y el marco democrático participativo en condiciones de igualdad, al excepcionar la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación, a movimientos o partido político de un grupo desmovilizado? 1. ¿Permitir la participación en política de quienes en el pasado tuvieron calidad de victimarios y condenados por la justicia transicional subvierte el compromiso del Estado social y democrático de investigar, juzgar y sancionar? 2. ¿Cómo debe aplicarse el juicio de sustitución de la constitución, en contextos de justicia transicional dada la naturaleza excepcional y transitoria de esta?
RATIO DECIDENDI	<p>1. La participación política como contenido normativo definitorio de la Constitución de 1991”, toda vez que “resulta esencial en la definición del Estado colombiano, especialmente en lo relativo a su carácter democrático. En efecto, si la democracia garantiza que las decisiones más importantes dentro del Estado se tomen por parte del cuerpo de ciudadanos, la participación profundiza y desarrolla el principio democrático a través de la especificación de aquellos mecanismos o aquellas vías por las cuales los ciudadanos podrán hacerse partícipes del proceso decisorio. La participación, desde esta perspectiva, será el elemento definitorio de la Constitución que permitirá la realización material/sustancial de la democracia –también principio fundante del ordenamiento constitucional del Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución.</p> <p>Corte ha identificado el marco democrático participativo y la participación política como ejes definitorios de la Constitución</p>

C-027-2018

y ha reconocido que en el contexto de justicia transicional la Carta Política faculta a los exintegrantes de grupos alzados en armas desmovilizados a intervenir en política sin más limitantes que las que establezca el legislador con sujeción a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos y humanitarios.

El trato catalogado como favorable responde al comienzo de la actividad de un nuevo partido o movimiento político con personería jurídica en desarrollo del proceso de implementación de la paz, que hace necesario equilibrar las posibilidades de competencia democrática frente a las agrupaciones existentes, por lo que el tratamiento diferenciado de carácter excepcional establecido permite garantizar condiciones básicas de trato igualitario ante condiciones no semejantes de una organización política naciente respecto de las demás agrupaciones.

Las garantías que surgen en el proceso de reincorporación política no sustituyen el elemento fundacional de participación política en condiciones de igualdad, al corresponder a un ajuste institucional y de adecuación normativa de amplitud de escenarios en el ámbito de la justicia transicional. Al contrario, es factible predicar de la enmienda constitucional la búsqueda de la efectividad de principios axiales del ordenamiento constitucional como la democracia, la participación, el pluralismo y la igualdad.

2. La Sala encuentra que, por un lado, la habilitación para la reincorporación en la vida pública constituye un elemento estructural del proceso de construcción de una paz estable y duradera, y que además, es consistente con los imperativos que se derivan del principio de participación como eje esencial del ordenamiento superior, pero que, por otro lado, esta medida podría vaciar de contenido y eliminar la eficacia de las penas impuestas por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, y que por esta vía se podría desconocer el deber del Estado de imponer sanciones efectivas a los máximos responsables de los delitos más graves y representativos, por lo que la aparente dicotomía puede resolverse favorablemente si se articulan adecuadamente los elementos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En este sentido la Corte afirma que la visión integral que los procesos de justicia transicional deben contener, implica el desarrollo de medidas públicas que busquen la reconciliación de todos los actores que intervinieron o resultaron afectados por la consecuencias del conflicto armado, el reconocimiento de los derechos de las víctimas que aún en situaciones de grave convulsión social no se pueden desconocer de manera total y la recomposición y fortalecimiento de la legitimidad social sobre las instituciones públicas.

Es así como el alcance de la justicia como principio constitucional fundamental varía en la justicia transicional, al implicar una evolución del entendimiento exclusivamente retributivo del término. Así, el deber estatal de investigar,

C-027-2018

juzgar y sancionar las conductas delictivas no desaparece en los procesos de justicia transicional, pero puede llegar a ser más benigno para concatenar de manera efectiva los valores en disputa. Asimismo, las medidas estatales deberán brindar una mayor relevancia a los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la no repetición, pues a través de ellos se garantiza la reconciliación y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.

Puede sostenerse que no se suprime el eje fundamental de la Constitución por el hecho de que se permita a los integrantes del partido político de un grupo desmovilizado la participación en política, sea que ello se concrete por su paso por la justicia transicional. Si bien se advierte la existencia de un trato diferenciado favorable al partido político por no aplicar inhabilidades, ello no goza de la entidad suficiente para sustituir la Constitución, al propiciarse en el marco de la justicia transicional que reviste carácter extraordinario y temporal. Esa participación debe sujetarse al cumplimiento propio de los mismos requisitos que deben cumplir los demás partidos y movimientos políticos, exceptuando solamente la inhabilidad que pueda surgir de condenas penales o de otra naturaleza respecto de conductas que se hayan cometido antes de la firma del acuerdo final para la paz. Excepción que tampoco rompe o desdibuja la participación en política en condiciones de igualdad, si se tiene en cuenta que resulta necesaria la flexibilización de las exigencias que hacen imposible la participación democrática, en tanto la naturaleza misma de la terminación del conflicto armado obliga al Estado a disponer de mecanismos que autoricen una contienda democrática y no más una armada

3. Las enmiendas que desarrollan modelos de justicia transicional en contextos de paz, a pesar de implementar medidas extraordinarias no aplicables en periodos ordinarios de institucionalidad y de introducir excepciones transitorias a la Constitución, no comportan por sí mismas una sustitución de la Carta Política. Por lo tanto, el control que efectúa el juez constitucional debe flexibilizarse porque se trata de una justicia adaptada a un proceso transicional en materia de paz.

Por lo que la Corte establece que cuando se trata de valorar reformas constitucionales que tengan como finalidad última el fortalecimiento y consecución de la paz, el juicio de sustitución se debe adecuar a este propósito y, por ende, se debe flexibilizar al ponderarse respecto de los demás ejes fundacionales.

OBITER DICTA

La participación política es un componente normativo fundacional en la Constitución, reconocida en los convenios internacionales de derechos humanos, y a la vez sujeta a diversas disposiciones de la Carta Política que le impone límites o instituye otros ejes determinantes (paz - justicia) con los cuales debe ponderarse con la finalidad de alcanzar los objetivos constitucionales.

Tiene un “contenido transversal” en el ámbito de la democracia, que armoniza con otros principios estructurales

C-027-2018	
	<p>como el pluralismo (sociedad diversa), que permiten construir espacios de razón pública. Luego la participación política de miembros de grupos desmovilizados en el escenario del postconflicto constituye una herramienta vital y de la esencia de todo proceso de paz para la consolidación de la democracia y el régimen constitucional.</p> <p>Bajo esa lógica, el principio democrático es fundamental para dimensionar e interpretar el alcance de los derechos humanos, ya que “no hay derechos políticos sin democracia y no hay democracia sin derechos políticos”. La Corte ha reconocido la importancia de asegurar la eficacia de los derechos políticos, v. gr., en asuntos de paz otorgando un componente de participación a ex miembros de grupos alzados en armas que se encuentran en tránsito a la legalidad, en el contexto de la justicia transicional que busca lograr un balance entre poner fin a las hostilidades y prevenir el regreso a la violencia y consolidar la paz a través de reformas estructurales y políticas incluyentes</p>
METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO	<p>En una primera etapa la Corte entra a verificar el cumplimiento de los requisitos procedimentales en la formación del acto legislativo (requisitos especiales y generales). Luego la observancia de los requisitos especiales de competencia (conexidad y habilitación).</p> <p>Seguidamente, se efectúa el juicio de sustitución que inicia con una parte dogmática que comprende: i) un breve contexto; ii) los ejes fundacionales en materia de reincorporación política; y iii) el sistema electoral y la igualdad. Por último, la Corte referirá al test de sustitución en el contexto de la justicia transicional y procederá a realizar el juicio (premisa mayor, premisa menor y síntesis) sobre cada una de las disposiciones del acto legislativo.</p>
DECISION EN CONCRETO	<p>Declarar la EXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo 03 de 2017, <i>“por medio del cual se regula parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”</i>.</p>
SALVAMENTO DE VOTO	<p>No hubo salvamento de voto</p>
ACLARACIÓN DE VOTO	<p>Aclaración de voto de la magistrada: Gloria Stella Ortiz Delgado</p> <ul style="list-style-type: none"> - La magistrada señala que el estándar para la aplicación del juicio de sustitución debe ser uniforme, sin que resulte admisible la flexibilización avalada por la mayoría respecto de aquellas enmiendas que implementen acuerdo de paz. Esto debido a que (i) la misma jurisprudencia constitucional señala que una de las condiciones para la validez del procedimiento legislativo especial es el reforzamiento del control de constitucionalidad respecto de las normas adoptadas bajo el mismo; (ii) el juicio de sustitución es una herramienta de decisión judicial que busca mantener la integridad de la Constitución, tarea en la cual no resulta adecuado ni necesario fijar estándares de análisis menos rigurosos; y (iii) al margen de que las medidas transicionales sean transitorias y excepcionales, las mismas deben sujetarse a los límites constitucionales, que a su vez no pueden ser

C-027-2018	
	<p>válidamente modificados a través del ejercicio del poder de reforma, más aun cuando es adelantado bajo reglas igualmente excepcionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Señala que una de las condiciones que permite concluir la validez del procedimiento transitorio y abreviado de reforma constitucional para avalar un proceso de paz, es la consagración del control de constitucionalidad automático. - Finalmente considera que la flexibilización que propone la Sala se concentra en la provisión de un procedimiento legislativo especial y abreviado para la implementación normativa del Acuerdo Final, sin que resulte procedente avalar una mayor flexibilidad predicable de otros ámbitos, esta vez a partir de la disminución del estándar de control de constitucionalidad sobre el juicio de sustitución.
ANALISIS JURIDICO DE LA SETENCIA PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL	
COMENTARIO DE LA DECISIÓN	<p>La decisión adoptada por la Corte al realizar el control automático de constitucionalidad 03 de 2017, se acoge y comparte.</p> <p>No obstante, en esta sentencia se amplía la flexibilidad en la provisión del procedimiento legislativo especial y abreviado para la implementación normativa del acuerdo final, al juicio de sustitución, siempre que se busque valorar reformas constitucionales que tengan como finalidad última el fortalecimiento y consecución de la paz, con lo que se concluye contempla en sus decisiones criterios de índole político, sin los cuales estos actos legislativos serian inexequibles. Argumentación que plantea diversos interrogantes, entorno al límite de dicha flexibilización, como también a la existencia otros fines constitucionales por los cuales pueda darse esta flexibilidad.</p>

1.5 C-020-2018

C-020-2018	
1.1 TIPO DE PROCESO QUE GENERA SENTENCIA	REVISIÓN CONSTITUCIONAL AUTOMÁTICA DE ACTO LEGISLATIVO
FECHA DE LA SENTENCIA	4 de abril de 2018
MAGISTRADO (A) PONENTE	Carlos Bernal Pulido
MAGISTRADOS QUE CONFORMARON SALA	-Alejandro Linares Cantillo -Carlos Bernal Pulido -Diana Fajardo Rivera -Luis Guillermo Guerrero Pérez -Antonio José Lizarazo Ocampo -Gloria Stella Ortiz Delgado -Cristina Pardo Schlesinger -José Fernando Reyes Cuartas -Alberto Rojas Ríos
MAGISTRADOS QUE ACLARAN VOTO	- Alejandro Linares Cantillo - Antonio José Lizarazo Ocampo
MAGISTRADOS QUE SALVAN VOTO	- Alberto Rojas Ríos
ACTOR O DEMANDANTE	N/A
INTERVINIENTES	- Contralor General de la República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Ministerio de Minas y Energía - Departamento Nacional de Planeación - Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía – Asofondos - Facultad de Derecho de la Universidad Libre - Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República - Consultorio Jurídico de la Universidad de Cartagena - Federación Nacional de Departamentos - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes - Ciudadanos, Andrea Carolina Julio Guzmán, Angélica Salcedo Romero y Freddy Andrés Gutiérrez Celín
A FAVOR DE LA EXEQUIBILIDAD NORMA DEMANDADA	<u>Contraloría General de la República:</u> Se solicita la declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 4 de 2017 porque, en su opinión, "cumple los límites materiales expresados por la Corte Constitucional sobre la conexidad objetiva, estricta, suficiente y necesaria para esta clase de normatividad encaminada a implementar el Acuerdo Final". Además, señaló que "desde la óptica de la Contraloría General de la República, el uso pertinente de las regalías contribuirá a la implementación del Acuerdo de Paz". Se señala que el Acto Legislativo sub examine (i) no menoscaba la función de control y vigilancia fiscal sobre estos recursos por parte de la Contraloría; y (ii) incluye ajustes al Sistema General de Regalías que propician una adecuada ejecución de estos recursos. <u>Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Minas y Energía:</u> Los jefes de las oficinas jurídicas de tales entidades solicitaron la declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 4 de 2017. Esta solicitud se fundó en dos premisas. Primera, "la reforma bajo examen se tramitó y aprobó con sujeción

C-020-2018

estricta al procedimiento regulado en el Acto Legislativo 1 de 2016, las cláusulas constitucionales y, en lo pertinente, las reglas de trámite previstas en la Ley 5 de 1992". Segunda, "el Congreso de la República no excedió sus límites competenciales al aprobar el Acto Legislativo 4 de 2017, en tanto la enmienda no sustituye ningún pilar esencial o eje definitorio de la Constitución Política".

En términos generales, manifestaron que las modificaciones introducidas al Sistema General de Regalías "son ajustes menores al esquema de administración, destinación y control de estos recursos, previamente definido por el Acto Legislativo 5 de 2011, con el loable e imperioso fin de lograr la financiación del Acuerdo Final". Asimismo, señalaron que tales modificaciones permitirán la eficiente administración de dichos recursos, destinándolos a las entidades territoriales que más los necesitan, "manteniendo los elementos principales que actualmente operan como salvaguardas del principio de autonomía territorial en el Sistema".

En relación con el trámite del Acto Legislativo, los intervinientes concluyeron que "las normas de procedimiento fueron plenamente observadas y por consiguiente no es posible atribuirle a dicho trámite la existencia de algún vicio de procedimiento ni mucho menos algún déficit en su deliberación".

Manifestaron, además, que las modificaciones que el Acto Legislativo 4 de 2017 introduce al Sistema General de Regalías no afectan sus principios básicos, a saber: (i) la competencia de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para definir los proyectos de inversión; (ii) la inversión territorial general y en ciencia, tecnología e innovación, así como en el ahorro pensional; (iii) el mecanismo de estabilización del sistema, esto es, el Fondo de Ahorro y Estabilización; (iv) la titularidad de los recursos en cabeza del Estado y el derecho de participación de las entidades territoriales; y (v) la descentralización de los recursos del sistema.

Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía – Asofondos:

La representante legal de esta entidad solicitó la declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 4 de 2017 con base en las siguientes consideraciones: (i) dicho acto fue presentado al Congreso de la República por el Gobierno Nacional, integrado por el Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y el Director Nacional de Planeación; (ii) guarda conexidad con el Acuerdo de Paz, "pues se destinan los recursos del Sistema General de Regalías para beneficiar a los territorios más afectados por el conflicto armado a través de unos planes de inversión"; (iii) se tramitó con prelación en los órdenes del día del Congreso de la República; (iv) su título corresponde al previsto para estos actos normativos por el Acto legislativo 1 de 2016; (v) se tramitó en una sola vuelta, con cuatro debates en los que se aprobó por mayoría absoluta; y (vi) se cumplió con el lapso de

C-020-2018

8 días entre la aprobación y el debate de una y otra cámara. Por lo tanto, el Acto Legislativo 4 de 2017 "fue expedido con el cumplimiento de todos los requisitos formales establecidos en la Constitución".

Facultad de derecho de la Universidad Libre:

Los intervinientes que actuaron en representación de esta Universidad solicitaron la declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 4 de 2017 con base en las siguientes consideraciones: (i) el Congreso "obró dentro de la competencia que le otorgó el Acto Legislativo 1 de 2016 y la Constitución Política de 1991"; y (ii) el Acto Legislativo sub examine guarda conexidad directa, objetiva, estricta y razonable con el Acuerdo Final.

Por último, señalaron que la normativa objeto de control es transitoria, por cuanto su vigencia es por 20 años y, además, "no modifica ni suprime el régimen de distribución del FNR-L, sino que establece una finalidad adicional para su utilización, supeditada en cualquier circunstancia al uso prioritario que ordena la Constitución para estos recursos".

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República:

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República solicitó declarar exequible el Acto Legislativo 4 de 2017, por cuanto se ajusta a la Constitución "tanto porque su procedimiento de formación fue respetuoso de las reglas constitucionales y legales aplicables, como por no ser sustitutivo de ninguno de los ejes definitorios de la Constitución".

Por lo demás, advirtió que "el sistema general de regalías es un instrumento central para la implementación del acuerdo final, no solo por ser una fuente de financiación de la inversión territorial, sino porque en sus fundamentos comparte la visión de que el desarrollo económico, social y ambiental del país se construye desde los territorios, de manera consensuada entre todos los niveles de Gobierno y ello también se aprecia en diversos contenidos del Acuerdo Final de Paz". Finalmente, señaló que esta reforma constitucional guarda conexidad con el Acuerdo Final en relación con el fortalecimiento de las entidades territoriales, las cuales deben contar con recursos adicionales a los programados en sus planes de desarrollo, para destinarlos de manera concreta al logro de los puntos acordados.

Por último, la interviniente resaltó que el Acto Legislativo 4 de 2017 no sustituye la Constitución, "así como tampoco ninguno de los referentes constitucionales básicos del régimen de regalías". En su opinión, este Acto Legislativo ni siquiera afecta los elementos definitorios de la Constitución, "como quiera que su alcance se constrañe a destinar, con carácter transitorio, una parte de los recursos de las regalías a la implementación del Acuerdo Final de Paz". Por el contrario, en su criterio, con la reforma constitucional sub examine (i) el Estado "sigue siendo el titular de las regalías"; (ii) "no se alteró

C-020-2018	
	<p>el régimen de descentralización y autonomía de las entidades territoriales en la gestión de las regalías"; (iii) "no se desfinancian las entidades territoriales"; (iv) "se mantuvieron los derechos de participación de las entidades territoriales frente a las regalías"; y (v) "se resguardó la autonomía de las entidades territoriales al otorgar a los departamentos la facultad de decidir si se aumenta el porcentaje de recursos a trasladar".</p> <p><u>Consultorio Jurídico de la Universidad de Cartagena:</u></p> <p>La Directora y dos estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad de Cartagena solicitaron la declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 4 de 2017. Como fundamento de su solicitud, señalaron que el Acto Legislativo 4 de 2017 "propone una destinación de los recursos del sistema general de regalías para llevar a cabo la implementación de los Acuerdos de Paz y la reparación integral de las víctimas, sin desconocer los objetivos y fines primigenios que se instituyeron por el Sistema de Regalías". En tales términos, resaltaron que la finalidad de dicha destinación de recursos es constitucionalmente válida, a la luz de los fines del Estado previstos por el artículo 2 de la Constitución Política.</p> <p>Finalmente, concluyeron que las destinaciones de los rubros del Sistema General de Regalías "no afectan el principio de sostenibilidad fiscal y el presupuesto nacional".</p>
EN FAVOR DE INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA DEMANDADA	<p><u>Federación Nacional de Departamentos:</u></p> <p>Solicitó la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2017, por cuanto no satisface el criterio de conexidad. En su opinión, este parágrafo "crea un nuevo modelo para la presentación, viabilización, aprobación y ejecución de proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, circunstancia que no guarda conexidad directa con los propósitos de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final". Además, señaló que "los mencionados recursos no son de exclusividad para atender proyectos de inversión que correspondan a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto sino que corresponden a recursos que se deben ejecutar para inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de las entidades territoriales". Además, señaló que dicha disposición "creó un nuevo modelo de distribución de los recursos del FCTI que atenta contra elementos definitorios de la Constitución de 1991". Los elementos definitorios amenazados son, en su criterio: (i) la autonomía de las entidades territoriales, (ii) el derecho de las entidades territoriales a participar en las rentas nacionales, (iii) el uso eficiente de los recursos, (iv) la ejecución directa de los recursos por parte de las entidades territoriales conforme a sus propios planes de desarrollo, y (v) la supremacía constitucional.</p> <p>Finalmente, la interviniente manifestó que "la norma analizada no ofrece garantías a las entidades territoriales para hacer valer su derecho de participar en las rentas nacionales y de</p>

C-020-2018

competir en igualdad de condiciones con la presentación de programas y proyectos que se articulen con sus planes de desarrollo territoriales, infringiendo los parámetros constitucionales fijados en la norma de normas".

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
- Codhes:

Los intervinientes señalaron que el Acto Legislativo 4 de 2017 prevé "fuentes de financiación pública del Acuerdo de Paz en abstracto y solo residualmente para la reparación a víctimas, en particular porque establece la destinación específica en la materia de los recursos identificados en el Acto Legislativo, como una excepción, contradictoriamente, en las entidades territoriales con un baja o nula incidencia del conflicto armado". A su vez, cuestionaron la idoneidad y suficiencia de dichos recursos, porque, en su opinión, generan cargas financieras para los entes territoriales en la medida en que se fundan en: (i) un porcentaje de los recursos recibidos por los entes territoriales del Sistema General de Regalías para el ahorro pensional territorial; (ii) la destinación de un porcentaje de los ingresos del Sistema General de Regalías a una asignación para la paz "con el agravante de que se institucionaliza el incentivo de actividades de explotación de recursos naturales no renovables a pesar de que los territorios pueden verse afectados sustantivamente por dichas actividades"; y (iii) el traslado de un porcentaje de saldos no aprobados en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación "priorizando para ello a municipios petroleros, mineros o con puertos para transportar dichos recursos o sus derivados, entre otros, lo cual va en contravía del Acuerdo de Paz". Resaltaron que con dicha priorización se generan "desbalances constitucionales" en relación con la igualdad de acceso a recursos públicos por parte de los entes territoriales.

Con base en sus consideraciones, le solicitaron a la Corte:

Declarar la exequibilidad condicionada del acto legislativo 4 de 2017 en el sentido de que la expresión "incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de víctimas, contenida en el inciso 1 del parágrafo 4 y en el inciso 1 del nuevo parágrafo 7 (...) deben interpretarse en el sentido de que dichos proyectos deben ser los prioritarios entre los susceptibles de ser financiados".

Declarar la inexecutable de la expresión "el 30% restante se destinará para incentivar la producción de municipios, en cuyos territorios se exploten los recursos naturales no renovables y a los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o derivados de los mismos", contenida en el inciso 2 del nuevo parágrafo 7.

Declarar la inexecutable de la expresión "... y los municipios en cuyos territorios se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables", contenida en el inciso 4 del nuevo parágrafo 7.

C-020-2018	
	<p><u>Intervención de los ciudadanos Andrea Carolina Julio Guzmán, Angélica Salcedo Romero y Freddy Andrés Gutiérrez Celín:</u></p> <p>Los intervinientes solicitaron la declaratoria de inexecutable del párrafo 8 del Acto Legislativo 4 de 2017, por cuanto, en su opinión, "esta norma desconoció los principios [constitucionales] para la distribución de las regalías", así como los artículos 27, 67 y 71 de la Constitución Política. En su opinión, el Congreso "al momento de disminuir los fondos destinados al Fondo de Ciencia, Tecnología y Desarrollo en un 60% incurrió en una supresión sustancial de elementos propios de la Constitución en cuanto al proceso de destinación de los recursos de las regalías en vista que al momento de recortar más de la mitad de los fondos destinados para este fin se vio inmerso en una extralimitación de sus funciones lo que terminaría siendo inconstitucional".</p> <p>En este mismo sentido, los intervinientes señalaron que "la implementación de un Acuerdo de Paz, no puede terminar en una deducción significativa del presupuesto para la Innovación y la Ciencia, debido a que esto mismo aporta al desarrollo del país, la sostenibilidad de la sociedad y el progreso de la misma". Por último, advirtieron que "reducir el 60% de los saldos no aprobados en el Fondo de Ciencia sería una forma inadecuada de aportar a la Paz".</p>
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	<p>Procurador General de la Nación presentó su concepto sobre el asunto de la referencia, en el que solicita que se declare la executable del Acto Legislativo 4 de 2017, con excepción de la expresión "y la implementación" prevista en el párrafo transitorio 9 del artículo 2, la cual, en su criterio, debe ser declarada inexecutable.</p> <p>Señaló que el Congreso de la República tramitó y expidió el Acto Legislativo 4 de 2017 de conformidad con las reglas del procedimiento especial previstas por el Acto Legislativo 1 de 2016 y por la Ley 5 de 1992.</p> <p>Señala que no observa que en lo regulado en dicho acto legislativo se hubieran introducido elementos que hayan cambiado los valores o el sentido de la Constitución, al extremo de volverla radicalmente distinta o diferente a la adoptada por el Constituyente primario de 1991. Tras identificar veinte ejes de la Constitución, el Procurador concluyó que el Acto Legislativo no los sustituye y ni los "compromete".</p> <p>También resaltó que no se compromete la autonomía de los entes territoriales en relación con el uso de los recursos de las regalías, porque se mantiene la destinación constitucional a las regiones como recursos exógenos de los cuales participan en los términos establecidos por el orden constitucional expresado en el Acto Legislativo 4 de 2017.</p> <p>Respecto del párrafo transitorio 9, solicitó la declaratoria de inexecutable de la expresión "y la implementación". Tal solicitud se fundó en que tal expresión sometería la</p>

C-020-2018	
	<p>implementación del Acuerdo Final “a lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 –y demás planes que a futuro se aprueben– que fue expedido con anterioridad a la aprobación del Acuerdo Final en forma unilateral por el Estado colombiano y no como producto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC EP; es decir finalmente lo ejecutado terminaría siendo la totalidad del contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, así como de los planes regionales de desarrollo y de los planes nacionales de desarrollo que a futuro se aprueben.</p> <p>Por último, en relación con el párrafo 10, manifestó que esta norma prevé que las entidades territoriales podrán definir directamente los proyectos de inversión cuando estos tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final, siempre que (i) su apropiación bienal de inversión sea menor a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y (ii) que tengan un adecuado desempeño en la gestión de estos recursos. Al respecto, resaltó que dicha regulación no es óbice para que tales decisiones “no tengan ningún control”. Por el contrario, están sometidas a los controles políticos, fiscales y disciplinarios ordinarios. En consecuencia, no existe reparo de constitucionalidad alguno.</p>
DETALLES Y/O CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA	
TEMAS TRATADOS	<ul style="list-style-type: none"> - Reforma Constitucional - Sistema General de Regaláis - Estado Unitario - Autonomía territorial
NORMA (S) DEMANDADA (S)	Acto Legislativo 04 del 8 de Septiembre de 2017, por medio del cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política.
HECHOS Y ARGUMENTOS JURIDICOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA	No aplica, en atención a que la Corte Constitucional adelanta control de constitucionalidad de los actos legislativos
NORMAS JURIDICAS Y JURISPRUDENCIA APLICADA AL CASO	<p>Constitución Política</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artículo N° 1 - Artículo N° 3 - Artículo N° 4 - Artículo N° 6 - Artículo N° 113 - Artículo N° 122 - Artículo N° 123 - Artículo N° 241 - Artículo N° 241.1 - Artículo N° 287.4 - Artículo N° 360 - Artículo N° 361 - Artículo N° 374 <p>Decreto ley</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1997 de 2017 <p>Sentencias</p> <ul style="list-style-type: none"> - C-551 de 2003 - C-1040 de 2005 - C-010 de 2013

C-020-2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - C-121 de 2013 - C-699 de 2016 - C-094 de 2017 - C-160 de 2017 - C-332 de 2017 - C-408 de 2017 - C-630 de 2017 - C-674 de 2017
PROBLEMA JURIDICO GENERICO C.C	<p>1) ¿En la formación del Acto Legislativo 4 de 2017, “por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”, el Congreso de la República incurrió en algún vicio de procedimiento?</p> <p>2) ¿Incurrió el Congreso en vicio de competencia con la expedición de este Acto Legislativo?</p>
TESIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTOS DE LA DECISIÓN	
PROBLEMA JURIDICO (RESUELTO POR LA CORTE)	<p>1). ¿La reforma al sistema general de regalías sustituye el eje axial de la autonomía territorial que constituye un elemento vertebral del modelo de organización del Estado colombiano, consagrado en la Constitución Política de 1991?</p>
RATIO DECIDENDI	<p>1). EL eje definitorio que puede verse comprometido en la configuración constitucional del Sistema General de Regalías, es el del Estado Unitario con descentralización y autonomía de las entidades territoriales, núcleo esencial del cual hacen parte las prerrogativas establecidas en el artículo 287 de la Constitución Política: gobernarse por autoridades propias, gestionar sus propios intereses y ejercer las competencias que les correspondan, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y a participar en las rentas nacionales, administrar sus recursos.</p> <p>El Congreso excedería su competencia para reformar la Constitución cuando, a través de un acto legislativo, subvierta el régimen de autonomía de las entidades territoriales, al punto que modifique la mencionada conformación institucional. Ello bien hacia el resquebrajamiento del grado de autonomía, conformándose un Estado unitario de carácter netamente centralista, o bien hacia una sustitución constitucional que elimine el principio de Estado unitario y prefiera una fórmula federal. Cada uno de estos extremos en el ejercicio del poder de reforma excedería la competencia congresional, pues introduciría un factor de mutaría la definición de Estado contemplada en la Carta Política.</p> <p>Ahora bien, los recursos provenientes de regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables, según reiterada jurisprudencia, son de propiedad estatal y por ende respecto de tales recursos, las entidades territoriales son beneficiarios en los términos que determine la ley (artículo 360), en consonancia con el derecho que tienen a participar en las rentas nacionales (artículo 287.4). Los recursos provenientes del Sistema general de Regalías constituyen “rentas exógenas” de financiación para las entidades territoriales y por lo tanto, su participación en las mismas puede ser alterada por el Legislador, asunto frente al cual éste goza de un amplio margen de configuración.</p>

C-020-2018	
	<p>Las reglas de redistribución de los recursos del Sistema General de Regalías no dan lugar a la “desfinanciación de las entidades territoriales”, en tanto tal redistribución “opera de forma articulada con las distintas previsiones constitucionales que están unívocamente dirigidas a garantizar el financiamiento de las entidades territoriales, en aras que puedan asumir las competencias que les asignan la Constitución y la ley.</p>
OBITER DICTA	<p>En este sentido es claro que el Congreso en ejercicio de sus funciones constitucionales, cuando modifica el Sistema de Regalías, busca corregir las inequidades del régimen anterior de distribución y administración de las regalías, que son recursos del Estado y evitar la incorrecta utilización y en algunos casos despilfarro de los mismos, enmarcada en objetivos constitucionales como la equidad y la prosperidad general”, a efectos de lo cual lo que hizo el Congreso en el Acto de reforma fue redistribuir los recursos que tienen como fuente el Sistema General de Regalías.</p> <p>Estas modificaciones no conducen a la desfinanciación de las entidades territoriales para cumplir con sus funciones y competencias, en tanto no se alteran sus fuentes de ingreso propias o endógenas, ni se afecta su participación en otras rentas exógenas, como lo son las fuentes de recursos que provienen del Sistema General de Participaciones.</p> <p>De esta manera, la Corte concluye que el Legislador, al fijar reglas adicionales para la redistribución, la destinación y la ejecución de los recursos que las entidades territoriales perciben del Sistema General de Regalías, no excede sus competencias en materia de reforma constitucional, esto siempre que la regulación contenida no conduzca a la configuración de un modelo de Estado unitario netamente centralista, como tampoco instaure un modelo de Estado federal, con lo cual no se sustituye el modelo constitucional existente de Estado unitario con descentralización y autonomía territorial.</p>
METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO	<p>La corte analiza si el Congreso: (i) cumplió los requisitos de procedimiento previstos en el ordenamiento jurídico para la formación de este acto normativo, y (ii) si incurrió en vicio de competencia alguno con su promulgación.</p> <p>Con tal objetivo, la Corte (i) entra determinar la naturaleza y el alcance del control de constitucionalidad de los actos legislativos tramitados y promulgados mediante el PLEP; (ii) señalando las características del PLEP y los requisitos, generales y especiales, para la formación de estos actos legislativos de conformidad con lo previsto por la Constitución Política, el Acto Legislativo 1 de 2016 y la Ley 5 de 1992; y, finalmente, (iii) si el Acto Legislativo 4 de 2017 cumple con tales requisitos.</p> <p>Finalmente se examina la competencia del Congreso para la expedición del Acto Legislativo 4 de 2017 con fundamento en la doctrina de la sustitución de la Constitución. Con tal objetivo, la Corte (i) reiterando la jurisprudencia relativa a la metodología del juicio de sustitución de la Constitución; y (ii)</p>

C-020-2018	
	determinando, que si con la expedición de este Acto Legislativo, el Congreso incurrió en vicio de competencia.
DECISIÓN EN CONCRETO	Declarar EXEQUIBLE el Acto Legislativo No. 4 de 8 de septiembre de 2017, “por medio del cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”.
SALVAMENTO DE VOTO	Magistrado Alberto Rojas Ríos salvó el voto frente a la anterior decisión, por cuanto, a su juicio, el Acto Legislativo 3 de 2015 sustituyó el eje axial de la autonomía territorial que constituye un elemento vertebral del modelo de organización del Estado colombiano, consagrado en la Constitución Política de 1991. (La sentencia no dispone de más información)
ACLARACIÓN DE VOTO	
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL	
COMENTARIO DE LA DECISIÓN	<p>Se acoge y comparte la decisión adoptada por la Corte al realizar el control automático de constitucionalidad 04 de 2017.</p> <p>No obstante, en la sentencia no se resalta que si bien la Constitución confiere al Congreso la competencia para la distribución de los recursos de regalías de las entidades territoriales, esa facultad no es ilimitada, sino que está circunscrita a las limitaciones y regulaciones contempladas en la Carta Política. Es así como las regulaciones que se hagan sobre la materia no pueden hacer nugatorio el principio de autonomía territorial que el ordenamiento constitucional consagra, ni siquiera tratándose de aquellos recursos que provienen de fuentes exógenas de financiación, tales como las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las rentas cedidas o los derechos de participación en las regalías.</p> <p>En este sentido las normas superiores que regulan el régimen de regalías hacen énfasis en que su utilización debe incluir la financiación de proyectos que irroguen beneficio directo a las entidades territoriales o, de una manera más general, incidan efectivamente en el desarrollo regional. Así, el Legislador tiene la competencia para definir el modo de distribución de dichos recursos, pero deberá incorporar entre los destinatarios de las regalías y compensaciones a las entidades territoriales, so pena de vulnerar los derechos de participación anteriormente mencionados.</p> <p>De igual manera, tal limitación otorga eficacia a lo previsto en el inciso primero del artículo 361 de la Constitución, el cual establece los fines de las regalías y vincula todos ellos a la satisfacción de intereses y necesidades propios de las entidades territoriales.</p>

CONCLUSIONES DEL ANALISIS JURISPRUDENCIAL

ACUERDOS DE PAZ SE AJUSTAN A LAS FINALIDADES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIOS FUNDANTES DE LA CARTA DE 1991.

Conforme a lo sustraído de las sentencias analizadas en primer lugar es menester afirmar que con la Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tienen dentro de sus finalidades la protección y preservación de la integridad del orden constitucional vigente y de la democracia; adicional a ello dentro de sus fines se evidenciaba el respeto por el cumplimiento de los principios y valores que sustentan el pacto político establecido por el constituyente del 91, los cuales son: Estado social de derecho, la democracia participativa, el pluralismo, la dignidad humana y descentralización y autonomía.

Ahora bien, podemos afirmar que dicho Acuerdo de paz no tendría por si solo la capacidad de producir efectos jurídicos ni ser vinculante para las partes, ya que tiene vocación de contenido programático, con potencialidad de ser política de estado en materia de paz, por lo cual requirió del desarrollo de un marco normativo que jurídicamente garantizará su implementación, como fue el caso del Acto Legislativo 01 de 2016 el cual dio origen a mecanismos como el procedimiento especial para la paz (Fast track) y las facultades presidenciales para la paz, en aras de convertirse en instrumentos para el desarrollo normativo de los acuerdos para la terminación de conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, procedimientos que fueron objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional en ocasión a la naturaleza del mismo y el cual solo entro en vigencia una vez fue interpretada y se dio alcance a la concepción de “Refrendación Popular” (ya que era condicionante para su entrada en vigor conforme A.L) y su posterior aplicabilidad por parte del Congreso de la República conforme al condicionamiento tácito que le

hizo la Corte en su calidad de órgano constituido y con legitimidad popular en sentencia C-699-2016.

En consideraciones de la Sentencia C-630-2017 se hace referencia al papel de la paz en el proceso de formación de la carta política de 1991, instruyéndola como una de las finalidades para su concreción y para el funcionamiento del Estado Social de Derecho configurado en dicha constitución, al punto de otorgarle la Asamblea Nacional Constituyente un lugar principalísimo en la escala de valores protegidos; por consiguiente, al ser un valor intrínseco de su espíritu, todos los esfuerzos que permitan su materialización no se opondrán ni serán contrarios a los pilares fundantes de la Constitución política de 1991, en expresión de la misma Corte en escenarios de transición para la superación del conflicto la paz maximiza los valores, principios y derechos fundamentales de manera que posibilita una efectiva vigencia de la constitución política. Por tanto, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto guarda estricto cumplimiento de las normas constitucionales y las potestades conferidas en esta, así como los estándares del DIH.

El Acuerdo Final suscrito entre el gobierno de Colombia y las Farc E.P, permite el reconocimiento del deber de ambas partes actuar con sujeción a un orden constitucional que permite la armónica convivencia y que, en caso de existir diferencias en asuntos económicos, sociales y políticas, se tramiten de manera pacífica a través de los canales institucionales que se han previsto para ello, por tanto, concluye la Corte afirmando “La opción por una salida negociada al conflicto maximiza el valor de la paz y constituye un paso hacia la efectiva vigencia de la Constitución. Debe producirse en armonía con otros principios y valores constitucionales entre los cuales se cuentan el principio democrático, la supremacía de la Constitución, los derechos de las víctimas, pero tiene un valor intrínseco en

cuanto que la consolidación de la paz es un presupuesto para la materialización de los demás derechos”⁶.

AMPLIACION EN LA INTERPRETACION DE LA EXPRESIÓN REFRENDACIÓN POPULAR COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ACTOS REFORMATARIOS QUE PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL

Para la Corte Constitucional fue determinante a la hora de adelantar el estudio de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del Acto Legislativo 01 de 2016, verificar si dicho acto sometido a control estaba vigente o no o por lo menos que producía efectos jurídicos o tenía la vocación de producirlos, la corte en primera medida señala que el acto será objeto de estudio en la medida que este tenía la potencialidad de entrar en vigencia y de producir efectos jurídicos, vigencia que para el caso concreto estaba dada por la refrendación popular del Acuerdo Final.

La expresión *refrendación popular* determina la Corte no se define en el Acto Legislativo 01 de 2019 y se entiende entonces como una expresión genérica, que a la fecha de realización del control constitucional no se había definido un único mecanismo para ello, puesto que primigeniamente estaba atada a un mecanismo de participación ciudadana, pero sin la certeza de saber si era suficiente, si era necesario la utilización de otros medios en caso de resultados adversos o si se requería una renegociación que permitiera llegar a mayores consensos. Lo anterior en el entendido que “las expectativas del órgano que emite una constitución o una reforma constitucional pueden informar el sentido normativo que se les atribuya. Pero es también claro que los redactores de una norma no logran prever ciertos desenvolvimientos sociales y políticos, que desajusten el balance de principios

⁶COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 630 de 2017 (17-10-2017). MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. P.65.

contenido en sus reglas, y es por eso que las expectativas originales, aunque informan, no determinan el sentido de la interpretación constitucional”⁷.

En la sentencia C-699-2016 de deja de manifiesto que los referendos regulados en las Leyes 1745 de 2015 y 1806 de 2016, pueden ser instrumentos idóneos para la refrendación popular de los acuerdos de terminación del conflicto y de las medidas que los implementen. Pero esto no significa que sean los únicos aptos para ese fin. En efecto, en la sentencia C-784 de 2014 la Corte afirmó que la creación de instrumentos especiales para refrendar actos que persigan terminar el conflicto no busca cerrar, restringir o dificultar la transición hacia una sociedad en paz, sino abrir vías que faciliten ese tránsito en el marco de la Constitución y la ley. Por tanto, las leyes estatutarias sobre referendos o plebiscitos especiales no imponen un deber inexorable de usar los instrumentos allí regulados para poner fin al conflicto, sino que se limitan a ensanchar el universo de alternativas políticas disponibles.

Por tanto, se puede señalar que con respecto a este punto el término *Refrendación popular* tiene la capacidad de abarcar distintos métodos de ratificación, sin que necesariamente existiesen características necesarias que agotaran su significado. Por tanto, la Corte se permite afirmar que cuando una norma o reforma constitucional contemplan una institución jurídica y no la desarrollan expresamente existe “amplio margen de configuración” para las autoridades que están llamadas a aplicarlas o configurarlas. Por tanto, señala la corte que la interpretación de la expresión estará determinada por sus márgenes semánticos, el contexto de la expedición de la norma que la contempla, la teoría constitucional, los principios constitucionales que pretende garantizar, su relación con las normas y jurisprudencia establecidas en el ordenamiento jurídico.

⁷ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699-2016 (13-12-2016). M.P María Victoria Calle Correa. P 49.

En consecuencia, a lo anterior, la Corte Constitucional para la corte constitucional existirá refrendación popular para la entrada en vigencia de una norma cuando se cumpla con los siguientes requisitos: *(i) proceso, (ii) en el cual haya participación ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática, (v) sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participación ciudadana para la revisión específica de aspectos concretos ulteriores*⁸, de esta manera debe entenderse que la votación desfavorable para la ratificación del acuerdo se convierte en la imposibilidad jurídica de implementar ese acuerdo en específico, pero no mina la facultad y obligación que tiene el Presidente de lograr la paz y recurrir a otras formas para concretar este mandato constitucional.

Es así como la interpretación realizada por la Corte hace alegoría a que las normas no pueden entenderse de manera aislada, sino que debe mirarse su integralidad, es decir vislumbrando los principios que busca realizar que para el caso concreto el acto reformativo busca la concreción de la paz, así para ello requiera actuar con mecanismos de democracia, por tanto exhorta a los órganos de representación a que “ en ejercicio de su margen de apreciación política, que en caso de haber puesto en marcha mecanismos de participación democrática pero consideran en riesgo la viabilidad de la política de paz, pueden aplicar el acto legislativo 01 de 2016 en la medida que consideren satisfechos los principios de la refrendación popular, declarados en esta providencia”⁹.

Finalmente es oportuno enfatizar es que para la Corte Constitucional en virtud de lo explicado anteriormente manifiesta que el Acto Legislativo 01 de 2016 tiene vocación de entrar en vigencia, toda vez a que esta se encuentra supeditada a la

⁸ *Ibíd.*, P. 52

⁹ *Ibíd.* P 60

refrendación popular, la cual debe entenderse en los términos dispuestos en la sentencia y por tanto en esta medida estos todavía son susceptibles de cumplirse, lo que permite concluir que para el control constitucional del acto reformativo solo se requiere que este tenga la vocación de vigencia, indicando además que la vigencia de una norma no debe ser producto de una decisión judicial ya que depende de las condiciones propias de cada reforma y que debe ser el Congreso de la Republica (autoridad revestida de legitimidad democrática) quien determine si se cumplieron con los principios para la refrendación popular definidos por la sentencia.

LA PAZ, COMO VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO QUE IRRADIA AL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991.

Conforme a lo expuesto en la parte motiva de las sentencias estudiadas se evidencia la importancia y jerarquía que posee la paz dentro de la Constitución Política y como esta se integra y es transversal para el desarrollo de los principios y ejes axiales de la constitución, pues la consecución de esta se instituye como el fin primordial para los ciudadanos y de los organismos que representan los intereses de estos primeros en las diferentes ramas de poder público; la Corte Constitucional ha puntualizado señalando que “la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución y que la preeminencia reconocida por la Carta a la paz es consecuente con las razones que influyeron en su expedición y con la clara tendencia humanista que la inspiró; con la mención expresa que a ella se hace en el Preámbulo como parte de los valores que la Constitución aspira a realizar; con su doble condición de derecho y deber; y con la característica de constituirse en un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos.”

Por tanto, a la hora de realizar los juicios de sustitución dentro de las providencias analizadas, la Corte siempre ponderó dicho valor con los otros elementos

definitorios de la identidad de la Constitución en disputa o puestos en discusión por su posible alteración, sustitución de las normas contenidas en los actos reformativos expedidos para la implementación del Acuerdo Final y que fueron objeto de las demandas presentadas y/o sujetos de control automático de constitucionalidad.

Esta característica de elemento fundante de la constitución de 1991 para la Paz , viene dada porque que el fundamento para la expedición del decreto 927 del 3 de mayo de 1990 por el cual se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente era la decisión adoptada en la séptima papeleta y por la situación de violencia inminente, adicionalmente “al mismo tiempo se producían en esta época en Colombia diversas circunstancias de índole política como la desmovilización de algunos de los grupos guerrilleros (M19, Quintin Lame y EPL) y el pedimento de participación política de diversos sectores de la sociedad antes excluidos que proponían también la convocatoria de la Constituyente”¹⁰, así las cosas se entiende la necesidad de la consecución de la paz y el cumplimiento de los derechos y principios que le son conexos y la superación de todas las formas de violencia que sufría el país, por lo que era anhelo de sus habitantes buscar la cesación de toda clase de conflicto armado y la materialización de la Paz.

En las sentencias analizadas se hace claridad en todo momento de la triple condición de la Paz, como valor, derecho y deber dentro del Estado constitucional colombiano, lo que es producto de la diversa composición política y de opinión de la Asamblea Nacional Constituyente y la influencia del ámbito internacional en el cual se considera a la Paz como una de las manifestaciones esenciales para el debido respeto a la dignidad de las personas.

Así las cosas, en las referidas decisiones se ha realizado un desarrollo de cada uno de los tres ámbitos de la Paz, en cuanto valor reconoce su fundamento en el preámbulo y artículo segundo constitucional señalando “en cuanto valor, la paz es

¹⁰ RAMIREZ CLEVES, Gonzalo. Límites de la reforma Constitucional en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, P. 40.

fundamento y fin esencial del Estado y de los derechos humanos que irradia el ordenamiento jurídico y que, como principio, debe dirigir la acción de las autoridades públicas”¹¹, seguidamente se hace una descripción en el plano de deber en el cual la corte decanta “la paz se manifiesta en el establecimiento de obligaciones directas que se traducen en la existencia de (i) un deber de todos de vivir con sujeción al ordenamiento jurídico y de tramitar de manera pacífica las diferencias por los cauces en él previstos (ii) un deber estatal de diseño e implementación de acciones normativas y de política pública dirigidas al propósito de garantizar la convivencia pacífica, (iii) una acción estatal orientada al logro progresivo del pleno ejercicio de los derechos fundamentales¹², y (iv) una opción preferencial por la solución pacífica como mecanismo de resolución de conflictos que excedan los marcos constitucionales”. Y finalmente en su calidad de derecho el cual abarca varias connotaciones, es decir como derecho humano, individual y colectivo, puntualiza la Corte que la Paz será un derecho fundamental en la medida que su garantía dependa de la efectividad y realización de los demás derechos civiles y políticos de la persona, ya lo refiere así el artículo 22 superior el cual lo cataloga como derecho de todos.

Esta categorización de la Paz realizada por la Corte Constitucional, es valiosa y de vital importancia en la toma de decisiones que se adelantan en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto suscrito entre el gobierno y las Farc E.P ya que prácticamente se constituye como un fin último del Estado social de derecho, se instituye como una necesidad imperante por materializar; se puede establecer con lo referido por la Corte que su peso jurídico en el ordenamiento constitucional colombiano es de primer orden, por ello la importancia de su búsqueda y construcción en periodos de transición, por tanto resulta valiosa la afirmación que determina que tanto a la sociedad y las autoridades les asiste no solo un deber jurídico, sino principalmente ético que impone avanzar en la creación de condiciones que aseguren *materialmente* la convivencia pacífica en el marco de un

¹¹ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 630 de 2017 (17-10-2017). MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. P.61.

¹² COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-379 de 2016 (18-07-2016). M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

“proceso democrático, libre y abierto”¹³ que garantice la participación efectiva de todas las personas.

“La paz es un presupuesto para la eficacia del Estado Social de Derecho, por cuanto constituye una condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales”¹⁴. Por tanto, es menester de todas las ramas del poder construir e implementar diversos mecanismos que permitan garantizar el fortalecimiento del orden constitucional y los principios que constituyen la esencia del mismo, es decir la paz y los derechos que de esta se derivan y es menester de la Corte Constitucional preservar la supremacía de este derecho fundamental en las decisiones que adopte ya que no pueden dejarse al arbitrio de lo expresado por el pueblo en las urnas ni a las mayorías en el Congreso al tener un carácter “Contramayoritario”¹⁵ ya que es dejar una puerta abierta para que el futuro se sometan a deliberación otros derechos fundamentales.

PRINCIPIOS DEFINITORIOS DE LA CONSTITUCION EN TENSION CEDEN EN FLEXIBILIDAD CUANDO HAY RIESGO PERMANENTE DE LA INEFECTIVIDAD DE COMPROMISOS FUNDAMENTALES DE LA CARTA.

Se hace importante puntualizar que la Constitución de 1991 tal y como determinó la Corte no posee cláusulas intangibles, por tanto, sus normas están sujetas a modificación, ya que como lo contempla la carta política hay un régimen para realizar las respectivas enmiendas y que no hay prohibición constitucional que prohíba la modificación de dicho régimen, sin embargo también es cierto que estas

¹³ COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T -439-2002 (30-05-2002). M.P Manuel José Cepeda Espinoza

¹⁴ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699-2016 (13-12-2016). M.P María Victoria Calle Correa. Salvamento de voto Magistrado Alberto Rojas Ríos.

¹⁵ Principio desarrollado por el Magistrado Alberto Rojas Ríos en su salvamento de voto parcial Sentencia C-699-2016, prevé conforme a este principio La democracia no puede entenderse como el poder omnímodo de las mayorías. Un sistema democrático de gobierno, que acoja la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales, no puede someter al escrutinio popular la vigencia de éstos. Siendo la paz un derecho fundamental, y, por ende, contra-mayoritario, su vigencia no está sometida a la voluntad de la mayoría parlamentaria, ni tampoco a aquella expresada por el pueblo mediante los mecanismos de participación ciudadana

reformas deben ajustarse a los ejes axiales que dan identidad a la constitución, ya que al no hacerlo podrían entrar a sustituir la esencia y el espíritu contemplado en la norma superior, como señaló Ramírez Cleves “ esta apertura de reforma reglada de la norma constitucional, no quiere decir destrucción o ruptura con los principios y valores que sustenten el pacto político que acuerda el poder Constituyente de 1991”.¹⁶

No obstante, lo anterior, cuando existen principios axiales de la constitución en disputa por la introducción de una reforma constitucional, es menester del operador judicial ponderar los mismos conforme a las premisas construidas en los juicios adelantados; sin embargo suele existir una flexibilización de alguno de ellos, en su entendimiento y alcance ya que con esto se persigue la consolidación efectiva de derechos y principios constitucionales que permanecían en riesgo de no ser conseguidos dentro del Estado social de derecho constituido de la Constitución de 1991; para el caso concreto se ponderó La paz y las garantías del mismo orden que de ella se desprenden. Es decir, los principios orientadores de la Constitución ceden en flexibilidad para su aplicación y concepción en aras de lograr la consolidación de otros principios fundamentales en crisis, sin que esto signifique la aniquilación de los mismos, ya que de no ser así se extinguiría la misma Carta Política.

Dentro de las sentencias estudiadas podemos contemplar el caso del principio de rigidez específica de la constitución el cual es adecuado a las finalidades propias que permitan la implementación del Acuerdo Final a través de mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz dotando este principio a características como resistencia constitucional relativa, variable, diversa y funcionalmente diferenciada lo que permite a su vez entender que no hay cláusulas de intangibilidad en las disposiciones o mecanismos de reforma constitucional, es decir no hay petrificación

¹⁶ RAMÍREZ CLEVES. Op.cit., P. 160.

de dichas cláusulas, permitiendo ello que ni se supriman ni reduzcan los mecanismos de enmienda ni equiparar la competencia del Constituyente.

Lo mismo sucede con la interpretación que se realiza del principio de separación de poderes en relación con el otorgamiento de facultades legislativas extraordinarias al Presidente de la República, en la cual la Corte establece que no hay sustitución del eje axial toda vez a que la habilitación legislativa es temporal y en un ámbito delimitado, es decir dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2016, con limitación temática por cuanto solo puede usarse para asegurar y facilitar la implementación del acuerdo final; cuenta con restricciones competenciales es decir no le está permitido la expedición de cierto tipo de normas, tienen control constitucional y no priva en ningún momento al legislador de sus competencias.¹⁷

EN ESCENARIOS DE TRANSICIÓN, LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ADQUIEREN MENOR RESISTENCIA AL CAMBIO EN ARAS DE LA MATERIALIZACIÓN DE UN ORDEN JUSTO CON LA EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES PROCLAMADAS EN LA CARTA POLITICA.

Los escenarios de transición están caracterizados por herramientas, procedimientos y estándares mínimos que permitan la superación del conflicto armado y todas la formas de violencia asociadas a este, como consecuencia de ello se busca garantizar justicia, conocimiento de la verdad, la reconciliación, la reparación de las víctimas y demás garantías conexas, las cuales se conseguirán a través de mecanismos que permitan su efectividad, para autores como Bernal pulido estos escenarios de transición implican la introducción de cambios políticos radicales, es

¹⁷ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699-2016. En virtud de lo decidido por la Corte constitucional conforme a la revisión del artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 que establece la habilitación legislativa extraordinaria la presidente de la Republica.

de esperarse que como resultados de los mismos emerja un nuevo cambio constitucional que implique un marco jurídico interno.¹⁸

No obstante lo dicho con anterioridad, la misma naturaleza de este escenario conlleva al establecimiento de marcos jurídicos que permitan su desarrollo ya que precisamente se trata de momentos históricos excepcionales y con finalidades superiores contemplados en la misma Carta Política, por tanto conlleva esto a que los principios estructurales de la Constitución permitan la inserción transitoria de normatividad que permita la efectividad de valores esenciales como la paz, así las cosas su contenido debe ser respetado pero permitir que se puedan adecuar las normas requeridas en esta etapa de transición. Es decir, la finalidad es que permitan la expedición de reformas constitucionales sin que estas impliquen sustitución de la Constitución ya que estos principios siguen prevaleciendo en el ordenamiento constitucional solo que se adecuan con mayor amplitud a la situación de facto que busca la materialización de otros principios que orientan y fundamentan el establecimiento del Estado social de derecho en la Constitución de 1991.

En relación con la jurisprudencia analizada tenemos el caso particular del Acto Legislativo 01 de 2016 que permite la creación transitoria de un procedimiento legislativo especial para la paz, facultado para adelantar reformas constitucionales, no obstante, en mismo se inscribe en un contexto de transición hacia la terminación del conflicto armado y la consecución de la paz, por lo cual el juicio de sustitución del principio de rigidez específica se debe aplicar tomando en consideración que es susceptible de adaptarse a la transición, lo que significa en palabras de la Corte que “ que la resistencia a la normas constitucionales debe ciertamente ser superior a la de la leyes, pero el grado de superioridad es un aspecto *susceptible de adaptación transicional* precisamente como una forma de garantizar la integridad de la parte dogmática de la Carta y en particular el derecho a la paz y los demás derechos y

¹⁸ BERNAL PULIDO, Carlos. El control de constitucionalidad sobre el marco jurídico para la paz. En: Letra jurídicas revista [en digital]. Medellín: julio-diciembre 2014, vol. 19. P 21- 46. ISSN 0122-0777

principios que dependen de ella”¹⁹, En consecuencia se evidencia que los principios que dan identidad a la Constitución son interpretados de forma más amplia y con un grado de mayor adaptabilidad con la finalidad exclusiva que pueda lograrse la efectividad y garantía del derecho a la Paz y los demás que resulten conexos a ella, así como la conservación de los compromisos asumidos con la suscripción de la Carta política de 1991.

Así las cosas, las reformas constitucionales pueden actualizar las disposiciones constitucionales conforme a las realidades políticas y sociales que se vislumbren en el país, lo que no podría permitirse bajo ninguna circunstancia es que dichas enmiendas puedan desnaturalizar los elementos esenciales de la constitución, los cuales siguen permaneciendo e irradiando el ordenamiento constitucional pese a la implementación del Acuerdo de paz, así lo decanta Bernal Pulido “Los artículos transicionales no derogan ni interrumpen la validez de los principios estructurales de la constitución”.²⁰

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA PAZ Y LAS FACULTADES LEGISLATIVAS EXTRAORDINARIAS DADAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERSIGUEN FINALIDADES SUPERIORES Y CONCRETAS Y SE CARACTERIZAN POR SU TRANSITORIEDAD.

Conforme a lo establecido en el análisis adelantado la Corte Constitucional se obtiene que los procedimientos legales y constitucionales utilizados y definidos para la producción normativa que permita la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera fueron declaradas exequibles y en tanto adecuadas al orden constitucional, una vez se realizaron los juicios de sustitución del caso y se ponderaron los principios

¹⁹ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699-2016 (13-12-2019). M.P María Victoria Calle. P.70

²⁰ BERNAL PULIDO Op.cit., P. 25

esenciales de la carta política, a excepción de los literales del fast track declarados inexecutable en sentencia C-332-2017, Para ello hubo ampliación y reinterpretación de los postulados de algunos ejes axiales de Constitución, así como el estudio minucioso de cada uno de los elementos de la reforma constitucional que permitieron llegar a las siguientes inferencias:

-El procedimiento de reforma a la Constitución sufrió modificación transitoria (por un término establecido de 6 meses prorrogables por el mismo término) se introdujo procedimiento específico para ello, pero limitado a unas materias ceñidas al Acuerdo de Paz, sin que esto significare la aniquilación de los demás mecanismos definidos en la Constitución y señalando que el diseño original en esta materia no es intangible.

- Es pertinente señalar que dicho procedimiento de reforma especial (su objeto es la transición hacia la terminación del conflicto) , excepcional (para implementar el acuerdo) y transitorio (solo por seis meses prorrogables por 6 meses más) , tiene como finalidad concreta la búsqueda de una paz estable y duradera, que permita la terminación del conflicto y la implementación de los acuerdos y cada uno de los ejes temáticos contemplados, que finalmente el principio de rigidez constitucional interpretado en términos de resistencia relativa no se elimina, ya que el mecanismo de reforma sigue conservando la exigencia de mayorías calificadas para su aprobación en ambas cámaras, el control automático de la Corte Constitucional y la refrendación popular. En palabras concretas el procedimiento legislativo especial para la paz se ajusta al marco constitucional existente toda vez a “que mantiene el nivel de resistencia al cambio de las normas constitucionales por encima del de las leyes, no petrifica las cláusulas de reforma de la Constitución, no suprime ni reduce la diversidad en los mecanismos de enmienda o sus formas de activación ni equipara el poder constituyente a la competencia de reforma constitucional”.²¹

²¹ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699-2016 (13-12-2016). M.P María Victoria Calle.

- Tanto el procedimiento especial para la paz, así como las facultades presidenciales para la paz, son de carácter transitorio, expedidos en una etapa de transición hacia la terminación del conflicto lo que los hace excepcionales y su finalidad exclusiva es la implementación de los acuerdos de paz, por tanto, en aplicación de ellos no les será permitido al Congreso de la República legislar acerca de una materia diferente y regular asuntos que son objeto de reserva de ley.

- Es importante destacar que el mecanismo de enmienda constitucional configurado por el procedimiento legislativo especial para la Paz mantiene el nivel de resistencia al cambio de las normas constitucionales por encima de las leyes, no petrifica las cláusulas de reforma de la Constitución, no suprime ni reduce la diversidad en los mecanismos de enmienda o sus formas de activación, ni tampoco equipara el poder constituyente a la competencia de revisión constitucional.

- Finalmente con el procedimiento especial de reforma y las facultades legislativas extraordinarias conferidas al Presidente de la República se garantiza el principio de separación de poderes y sistema de contrapesos ya que el Congreso no perderá competencia o poder principal otorgado por la Constitución, sufriendo el mismo efecto la rama judicial en lo que a ella le atañe, además es importante enfatizar que la normatividad que emane de los procedimientos referidos puede ser objeto de modificación posterior a su entrada en vigencia.

LA IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DEL ACUERDO FINAL DE PAZ DEBE SER EL RESULTADO DEL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LAS DIFERENTES RAMAS DEL PODER PÚBLICO Y EL COMPROMISO DE LA CIUDADANIA.

Los diálogos para la terminación del conflicto armado interno y la construcción de una paz estable y duradera en el país, fue iniciativa del gobierno nacional, después de escuchar el clamor de diferentes sectores de la sociedad y la necesidad imperante del cumplimiento de los fines del estado, la suscripción del Acuerdo Final

de Paz se derivó de un trabajo incansable del poder ejecutivo, víctimas, y demás actores vinculados; pero la materialización de los mismos a través de su implementación normativa no debe depender exclusivamente de los esfuerzos que pueda adelantar el Presidente de la República de hecho desbordaría sus capacidades al intentar realizarlo, por lo tanto conforme a la configuración del Estado fundado en la división de poderes y la colaboración armónica entre ellos, la consecución de la paz y las medidas que se puedan adoptar en torno a ella requiere de la “acción concurrente y coordinada de los diferentes poderes públicos”²²

Para la Corte los principios de división y colaboración armónica de poderes, deben mantenerse intactos en los contextos de transición del conflicto armado hacia escenarios de paz, para lo que se requiere siempre de normas instrumentales que garanticen dicho fin, y en Colombia no es la excepción y siempre debe tener un eje central ya que es uno de los ejes definitorios que caracteriza nuestro sistema constitucional, pues en especial en regímenes excepcionales de transición en los que se requiere de una acción mancomunada y articulada de las funciones institucionales de cada una de las ramas para lograr consolidar la paz.

Es así como en la parte motiva de una de sus providencias la Corte determinó que “la colaboración armónica supone, que cada rama del poder público contribuye desde sus esferas competenciales y las atribuciones conferidas por el Constituyente al logro común de la paz, de manera que el ejecutivo conserva sus especiales potestades en materia de orden público y las otras ramas detentan competencias especializadas para contribuir al mismo fin. En esta medida, el principio de división de poderes despliega aquí también su función de activar el mecanismo de pesos y contrapesos, con el fin de impedir usurpación de funciones de una rama por la otra.”²³

²² COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332-2017 (17-05-2017). M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. P. 108 donde se referencia lo decidido en Sentencia C-379-2016.

²³ COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332-2017 (17-05-2017). M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. P.110

Conforme a lo señalado en párrafos precedentes la adscripción de carácter jurídico y vinculante que requiere el acuerdo final para la paz, solo puede darse a través de los mecanismos y canales contemplados por la constitución en cuanto a producción del derecho y para ello es necesario el desempeño de las funciones dadas y los esfuerzos de cada una de las ramas del poder público, por tanto la prevalencia de dichas competencias es esencial para el referido procedimiento de implementación, para la Corte Constitucional es fundamental la aplicación de los medios constitucionales de creación normativa porque “(i) solo dichos canales son válidos en una democracia constitucional para la previsión de normas con carácter vinculante; y (ii) el uso de tales mecanismos garantiza la concurrencia de las diferentes ramas del poder, asegurándose con ello que el proceso de implementación quedará sometido al régimen de controles inter orgánicos”²⁴.

Por tanto, las reformas constitucionales que se adelanten en el proceso de implementación de los acuerdos, deben primar por la prevalencia en la distribución de competencias dadas por la Constitución a cada rama de poder público, ya que al disponer obligaciones absolutas y avales gubernamentales a los proyectos de reforma y de ley, implica autorizar al Gobierno para que desborde su ámbito de competencia e incida de forma indebida en las facultades y prerrogativas de otro poder público y se eluda el mandato que la construcción de la paz es compromiso de los organismos del estado y el pueblo representado en los primeros.

En determinante afirmar entonces, que, para la incorporación normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se deberán activar mecanismos de producción normativa fijados en el marco Constitucional y legal, la Corte en sus sentencias es enfática en señalar que los actos reformativos como lo es el Acto Legislativo 02 de 2017, instituye una obligación a las autoridades del Estado de contribuir de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto a política de estado, dentro del marco

²⁴ COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332-2017 (17-05-2017). M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. P.146

de sus competencias. Por tanto, la Corte constitucional señala que la incorporación al ordenamiento jurídico de los resultados de la negociación entre el gobierno y las Farc, nunca será una simple formalidad, sino que esta representa sujeción “(i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico; (ii) al principio de supremacía constitucional, en el sentido de que el parámetro supremo de referencia para todas las autoridades y los particulares es la Constitución; y, (iii) a la regla de separación de poderes, pues los órganos del Estado deberán gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del deber de colaboración armónica para el cumplimiento de los fines constitucionales”²⁵.

ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA ELEVADO A LA CATEGORIA DE POLITICA DE ESTADO.

El primer antecedente que permite denominar el Acuerdo Final como política de estado se origina en la sentencia C-376- de 2016, la cual examinó la constitucionalidad para la convocatoria al pueblo a plebiscito por el cual los colombianos decidirían si estaban si apoyaba o rechazaba el Acuerdo Final suscrito entre el gobierno y las Farc el 24 de agosto de 2016. De conformidad con lo anterior en la referida providencia la Corte precisó lo siguiente: *El Acuerdo Final no puede entenderse como un conjunto de disposiciones jurídicas definidas, comprendidas estas como proyectos normativos específicos, que modifican directamente la Constitución o la ley, bien sea adicionándolas, derogando alguno de sus contenidos o reformándolos. Para que sea susceptible de ser refrendado a través de plebiscito especial, el Acuerdo Final se entiende como una decisión política o plan de acción, susceptible de ser posteriormente implementado*²⁶, incluso a través de normas

²⁵ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 630 de 2017 (17-10-2017). MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. P.88

²⁶ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-379 de 2016 (18-07-2016). M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

jurídicas. Por tanto, desde ese preciso momento se entendió la naturaleza del acuerdo final y la necesidad de su implementación a través de procedimientos constitucionales y legales para la creación, modificación y derogatoria de las normas jurídicas.

Los resultados del plebiscito y la renegociación del Acuerdo Final con fecha de 24 de noviembre de 2016 permitieron dilucidar aún más la naturaleza de este, en la cual se excluyó cualquier posibilidad de incorporar automáticamente al ordenamiento interno del Acuerdo Final, sin importar las normas derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, también se desecha la posibilidad que dicho acuerdo ingresara de manera directa al bloque de constitucionalidad, así como la posibilidad de su reconocimiento como acuerdo especial en los términos del acuerdo tercero común a los convenios de Ginebra, para el derecho interno y no para su vigencia internacional. Lo que permite afirmar que para ese momento había quedado sin sustento las connotaciones dadas anteriormente al acuerdo de paz, su blindaje en el ordenamiento jurídico y que tomaba mayor fuerza otorgarle al Acuerdo Final su status de decisión de gobierno a través de una política de Estado.

Por tanto, con la expedición del Acto legislativo 02 de 2017 y la decisión proferida para establecer su constitucionalidad, se determina que la inclusión del Acuerdo Final debe darse un proceso de implementación normativa en cabeza del gobierno, pero con la colaboración armónica de las autoridades conforme sus competencias, al tenor literal señala la Corte “el Acuerdo Final no tiene un valor normativo *per se*, lo que significa que *ex ante* de la activación de los mecanismos de implementación y desarrollo, como política de Gobierno vincula al Gobierno Nacional y lo obliga a impulsar su implementación”²⁷. Adicionalmente señala que a partir del Acto Legislativo 02 de 2017 se adopta al Acuerdo Final “como *política de Estado*, de

²⁷ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 630 de 2017 (17-10-2017). MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. P.86.

manera que todos los órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran comprometidos con su desarrollo e implementación de *buena fe*, y por tanto, cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento y guardar coherencia con sus contenidos, finalidades, espíritu y principios”.²⁸

La Corte Constitucional le ha conferido esta naturaleza de *política pública de gobierno* a los Acuerdos de Paz en ocasión a la calidad con la que actúa el presidente de la República y lo que representan estos como asunto de interés nacional, la finalización del conflicto armado y el logro de la paz y en razón a que el Acuerdo Final “Se entiende así, porque incorpora el conjunto de principios, estructuras y roles institucionales liderados por el Gobierno, que constituyen a la vez la base de la gestión estatal de lo que se considera necesario para materializar el derecho-deber a la paz”. Categoría que señala la corte fue otorgada por el Acto Legislativo 02 de 2017 por consiguiente resulta vinculante para todas las autoridades e instituciones públicas coadyuvar con los órganos de representación popular para la construcción de una sociedad que pueda convivir pacíficamente, con respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de la paz como valor fundante del ordenamiento constitucional colombiano.

Finalmente, para este punto es menester señalar que para la Corte el concepto de política de Estado para el Acuerdo Final alude a un proyecto a mediano y largo plazo en aras de la consolidación de una paz estable y duradera, “que a su vez incluye medidas de transición hacia la paz de tipo penal, político, social, económico y cultural, de derechos de las víctimas, de seguridad ciudadana, que conllevan los cambios estructurales necesarios de las causas que dieron origen al conflicto interno para su finalización y garantías de no repetición. Todos estos aspectos tienen un valor estratégico, pues no dependen de los variables dinámicas de la actividad política”²⁹.

²⁸ *Ibíd*, P. 86.

²⁹ *Ibíd*, P. 87

CONTENIDOS DEL ACUERDO FINAL RELACIONADOS CON NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO SON DOTADOS COMO PARÁMETRO DE INTERPRETACIÓN, VALIDEZ Y DESARROLLO NORMATIVO.

La categorización dada a los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que correspondan a normas derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política y conexos a estos, como parámetros obligatorios de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas que implementan el referido Acuerdo, fue otorgado por el Acto Legislativo 02 de 2017 y ratificada su constitucionalidad mediante sentencia C-630-2017.

Conforme a lo analizado en la providencia antes referida, la Corte en primer lugar señala que no han de existir señalamientos de vicios de competencia del acto reformatorio toda vez que el criterio de interpretación utilizado por este es de reconocida utilización en el ordenamiento jurídico, es decir en relación con la remisión en caso de duda de una disposición deba remitirse conforme al método interpretativo que permita conocer la historia de creación de la misma, no pasa lo contrario con las normas de implementación y de desarrollo del Acuerdo Final, cuyo precedente siempre sería el acuerdo mismo, queriendo significar lo anterior que obligatoriamente las normas de implementación deberán tener como un marco de referencia interpretativa para el Acuerdo de paz, para este punto la Corte detalla al respecto “entre varias interpretaciones de una disposición normativa producto de la implementación del Acuerdo, y cuando todas ellas sean constitucionales, se deberá preferir aquella que se ajuste de mejor manera al contenido del Acuerdo Final. De esta forma, se garantiza en mayor medida el cumplimiento de lo acordado y, por lo mismo, el derecho y deber a la paz”³⁰.

³⁰ *Ibíd*, P. 90

En relación con la característica de los contenidos del Acuerdo Final como referente de desarrollo de las normas de implementación del mismo, para la Corte Constitucional la previsión realizada por el acto legislativo es lógica, por que sea cual sea el mecanismo jurídico para la implementación del Acuerdo de paz, sus contenidos *inevitablemente, son referente de desarrollo para el proceso de producción normativa.*³¹

Finalmente, en el examen de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017, se determina que la acepción de los contenidos del acuerdo Final como referente de validez se relaciona con la conexidad que debe existir entre las normas y leyes de implementación con el Acuerdo Final y su concordancia con la materialización de las finalidades del mismo. Por tanto, para la corte constitucional no existirá problema de constitucionalidad si se entiende que las normas que implementen los acuerdos de paz, serán válidas si cumplen con estos postulados “(i) si guardan conexidad con los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o de derechos fundamentales definidos en la Constitución Política; (ii) si tienen por objeto alcanzar las finalidades que buscaron las partes al suscribir el Acuerdo Final; y (iii) si sus contenidos o su incorporación al ordenamiento jurídico, se sujetan a las disposiciones constitucionales”³²; de no cumplirse estos requisitos se entenderán como no válidas y deberán ser expulsadas del ordenamiento jurídico.

LA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRIDENCIAL, COMO RAZON OBJETIVA EN LA CALIFICACION DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO DE PAZ.

Las modificaciones introducidas a la Constitución Política, por los actos legislativos que ponen fin al conflicto armado, consistentes fundamentalmente, en adicionar a la Carta Política algunas disposiciones que establecen nuevas reglas en gran parte

³¹ *Ibíd*, P.90

³² *Ibíd*, P. 90

transitorias, respecto a temas en los cuales tuvo entonces ocasión de pronunciarse la Corte, son analizadas de acuerdo al precedente jurisprudencial fijado, como es el tema de la redistribución de las regalías por parte del órgano legislativo. En este sentido la Corte señala:

“De allí que para la verificación de la competencia del Congreso para la reforma constitucional correspondiente al A.L. 4 de 2017, se dará aplicación al precedente jurisprudencial fijado por esta Corporación en la Sentencia C-010 de 2013, conforme al cual el eje definitorio que puede verse comprometido en la configuración constitucional del Sistema General de Regalías, es el del Estado Unitario con descentralización y autonomía de las entidades territoriales, núcleo esencial del cual hacen parte las prerrogativas establecidas en el artículo 287 de la Constitución Política: gobernarse por autoridades propias, gestionar sus propios intereses y ejercer las competencias que les correspondan, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y a participar en las rentas nacionales, administrar sus recursos”.

Y en lo que respecta al juicio de sustitución señala:

“[E]l Congreso excedería su competencia para reformar la Constitución cuando, a través de una (sic) acto legislativo, subvierta el régimen de autonomía de las entidades territoriales, al punto que modifique la mencionada conformación institucional. Ello bien hacia el resquebrajamiento del grado de autonomía, conformándose un Estado unitario de carácter netamente centralista, o bien hacia una sustitución constitucional que elimine el principio de Estado unitario y prefiera una fórmula federal. Cada uno de estos extremos en el ejercicio del poder de reforma excedería la competencia congresional, pues introduciría un factor de mutaría la definición de Estado contemplada en la Carta Política”.

Por lo anterior es claro que el Congreso no sustituye la Constitución al realizar modificaciones en cuanto al cambio de destinación que habrá de darse a estos recursos de regalías por parte de las entidades territoriales y fijando criterios adicionales de priorización para la distribución de tales ingresos. En este sentido, no existe una afectación al núcleo esencial de la autonomía de las entidades territoriales, en la medida en que se mantiene la competencia de dichas entidades a participar en las rentas nacionales, en particular las que tienen como fuente de recursos el Sistema General de Regalías, se mantiene la competencia de las entidades territoriales relativa a administrar los recursos y ejercer las competencias

que les corresponden. A su vez las modificaciones planteadas no conducen a la desfinanciación de las entidades territoriales para cumplir con sus funciones y competencias, en tanto no se alteran sus fuentes de ingreso propias o endógenas, ni afectan su participación en otras rentas exógenas, como lo son las fuentes de recursos que provienen del Sistema General de Participaciones.

LOS ACTOS REFORMATARIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA QUE SE EXPIDAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE LOS ACUERDOS DE PAZ REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE DELIBERACIÓN DEMOCRATICA Y SU LEGITIMACIÓN POR ORGANO COMPETENTE

La naturaleza del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ha sido definida por la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos como lo fue la sentencia C-379 de 2016, en la que determina que este se comporta como una decisión política del gobierno, en términos concretos estableció que el mencionado acuerdo es una “decisión del ejecutivo que contiene una política pública carente de naturaleza normativa autónoma la cual solo se adquirirá en razón a un proceso de implementación , en todo caso posterior y basado en el acatamiento de las previsiones constitucionales sobre producción de normas jurídicas” ; así las cosas se requiere del trabajo mancomunado de los órganos de poder conforme a sus funciones para la materialización de la implementación e incorporación de los acuerdos de paz en el ordenamiento jurídico colombiano.

En cumplimiento de lo anterior y conforme fue objeto de estudio a través de las sentencias analizadas en especial en la C-332-2017, se evidencia la revisión del Acto Legislativo 01 de 2016 en la totalidad de su articulado, haciendo énfasis en los literales h) y k) del artículo 1 que corresponde al procedimiento legislativo especial para la paz, para la Corte se vuelve fundamental pronunciarse al respecto ya que la variedad temática del Acuerdo Final, sus ejes principales y sus objetos a regular

son de relevancia para el país y son transversales a diferentes materias que buscan la superación de conflicto por lo que requiere que los actos reformativos y leyes que los implementan, no sean de adscripción exclusiva del poder ejecutivo, es decir su formulación, regulación y autorización de modificación de las referidas iniciativas. Si no que en virtud de la relevancia de los temas objeto de desarrollo para el país estos deberían ser debatidos y decididos por el Congreso de la República como órgano competente y con representación democrática, que permite que las normas expedidas puedan gozar de mayor legitimidad y sean el resultado de concesos y la participación de los diferentes sectores políticos y las minorías.

La Corte le da relevancia al papel que desempeña el poder legislativo a la hora de configurar enmiendas constitucionales, aun mas al tratarse de temas fundamentales para el país como es la consecución de la paz, lo que hace que para dicha corporación sea de vital importancia que no exista desconocimiento del principio deliberación que hace parte de los elementos de la función legislativa en la expedición de los actos reformativos de la constitución, por lo que señala que “las reformas constitucionales tienen un efecto directo respecto de las demás disposiciones del orden jurídico, por lo que deben estar supeditadas a los más altos niveles de legitimidad democrática. Esto implica, necesariamente, que los componentes de la función de configuración normativa sean debidamente desarrollados durante el proceso de formación de los actos legislativos, en particular la deliberación que refleje el pluralismo político al interior del Congreso y, con ello, la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras”³³.

Conforme a lo anterior y en razón a lo establecido en la sentencia C-332-2017, los actos legislativos que buscan introducir reformas a la carta política, sin importar que se expidan en régimen de transición deben conservar las competencias y atribuciones otorgadas a cada una de las ramas del poder público y estas no pueden

³³ COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332-2017 (17-05-2017). M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. P.147

desplazarse a una sola rama, so pena de trasgredir elementos definitorios de la constitución y alterar lo estipulado por el constituyente primario, por tanto la fijación de los contenidos de las reformas constitucionales debe ser dada por el Congreso de la República, con la participación complementaria del ejecutivo, pero preservando siempre la capacidad deliberativa y decisoria del legislativo. Por tanto, cualquier norma reformativa que pueda disponer lo contrario alterar y/o vaciar esta función puede sustituir la constitución. Así concluyó la corte señalando los principios de separación de poderes y autonomía del Congreso “se sustituyen cuando la capacidad del Congreso en relación con la cláusula general de competencia legislativa y su competencia como poder de reforma, se trasladan sustancialmente al ejecutivo, en cuanto se le reviste de la capacidad de determinar los contenidos de una y otra potestad normativa, limitando la actuación del Congreso a la posibilidad de asentir o disentir en bloque, y exigiendo que, en función de preservar los acuerdos de paz, limite su competencia a la aprobación de lo que se le presente o las modificaciones que sean avaladas por el Gobierno”³⁴

³⁴ COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332-2017 (17-05-2017). M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. P 148

BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA

BERNAL PULIDO, Carlos. (2013). Fundamentación y significado de la doctrina de la sustitución de la Constitución Un análisis del control de constitucionalidad de las reformas a la Constitución en Colombia. *Diálogos constitucionales de Colombia con el mundo: VII encuentro de la jurisdicción constitucional* (págs. 405-431). Bogotá: Universidad Externado de Colombia y Corte Constitucional de Colombia.

BERNAL PULIDO, Carlos. (2014). El control de constitucionalidad sobre el marco jurídico para la paz. *Letras jurídicas Vol. 19*, 21-46.

Gobierno de Colombia y Guerrilla Farc-EP. (2016). Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.

HIGUERA JIMENEZ, Diego. (2017) Límites al poder de reforma, modificaciones y alteraciones a la Constitución. *Opinión Jurídica*, Vol. 16, N° 32, pp. 97-126 - ISSN 1692-2530.

JARAMILLO GIRALDO, Juan. (2013) la problemática de los límites al poder de reforma de la Constitución Política de 1991. *Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS*. Vol. 43, No. 118. Medellín. ISSN 0120-3886.

LOPEZ MEDINA, Diego. (2002). El derecho de los jueces. Bogotá: Legis –Uniandes.

PULIDO ORTIZ, Fabio Enrique, La validez de los procedimientos de reforma constitucional fast track, 30 *International Law*, *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 151-184 (2017). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.il.15-30.vprc>.

RAMÍREZ CLEVES, Gonzalo. (2009). Límites de la reforma constitucional en Colombia. El concepto de Constitución como fundamento de la restricción. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

ROBLEDO, P., & RAMÍREZ CLEVES, G. (2014). La Jurisprudencia Constitucional Colombiana en el año 2013: el control de constitucionalidad por sustitución y el amparo reforzado a los sujetos de especial protección constitucional. *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* (págs. 587-620). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales No. 18.

QUINCHE RAMÍREZ, Derecho Constitucional Colombiano “de la carta de 1991 y sus reformas”, Bogotá, TEMIS, 2012.

UPRIMNY YÉPEZ, R., & SÁNCHEZ, N. (2014). El marco jurídico para la paz: Cheque en blanco o camisa de fuerza para las negociaciones de paz? En R. Uprimny Yepes, L. Sánchez Duque, & N. Sánchez León, *Justicia para la paz-crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada* (pág. 220). Bogotá: DeJusticia.

DOCUMENTOS EN INTERNET

DIARIO LA REPUBLICA. Las Cinco Decisiones de la Corte Constitucional Frente al proceso de Paz. Bogotá D.C. 18 de octubre de 2018. [consultado el 20-09-2019] .Disponible en: <https://www.larepublica.co/economia/las-cinco-decisiones-de-la-corte-constitucional-frente-al-proceso-de-paz-2782011>.

UPRIMNY YEPEZ, R, & Guiza Gómez Diana. (2019). “Pacigerancia: el valor jurídico de los acuerdos de paz en el derecho internacional”. *Latin American Law Review* n.º 03 (2019): 49-78, doi: <https://doi.org/10.29263/lar03.2019.03>.

UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo, ¿Reformar el Acuerdo de Paz o ajustar su implementación? [en línea]. En: *El espectador*, Bogotá D.C, agosto 4 de 2018. [consultado: 07 de septiembre de 2019]. Disponible en: <https://www.elespectador.com/opinion/reformar-el-acuerdo-de-paz-o-ajustar-su-implementacion-columna-804215>

JURISPRUDENCIA

COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias.

- C-379 de 2016 (18-07-2016). M.P Luis Ernesto Vargas silva.
- C-699-2016 (13-12-2016). M.P María Victoria Calle Correa.
- C-332-2017 (17-05-2017). M.P Antonio José Lizarazo Ocampo.
- 630 de 2017 (17-10-2017). MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
- C-027-2018 (18-04-2018). M.P José Fernando Reyes Cuartas.
- C-020-2018 (04-04-2018). M.P Carlos Bernal Pulido.
- T -439-2002 (30-05-2002). M.P Manuel José Cepeda Espinoza.